

# JOURNAL OF DEMOCRACY EN ESPAÑOL

*Volumen 1, año 1, Abril de 2026*

## ARTIGOS INÉDITOS

### **Intolerancia y autoritarismo en la democracia brasileña**

*Wilson Gomes*

### **Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en la era de Donald Trump: con una perspectiva histórica**

*Arturo Valenzuela*

---

## TRADUÇÕES

### **Los peligros reales de la IA para la democracia**

*Dean Jackson e Samuel Woolley*

### **El Estado de vigilancia impulsado por la IA de China**

*Valentin Weber*

### **Cómo los líderes autoritarios se aprovechan del género**

*Elin Bjarnegård e Pär Zetterberg*

### **Crimen, represión y democracia en Ecuador**

*Galo Mayorga e Kai M. Thaler*

**PLATAFORMA  
DEMOCRÁTICA**

FUNDAÇÃO FHC  
CENTRO EDELSTEIN

[PLATAFORMADEMOCRATICA.ORG](http://PLATAFORMADEMOCRATICA.ORG)



JOURNAL OF  
**DEMOCRACY**  
EN ESPAÑOL

EDITORES Bernardo Sorj  
Sergio Fausto

COORDINADORA DE PUBLICACIONES Beatriz Kipnis

REVISIÓN DE TRADUCCIÓN Rodrigo Torrealba

REVISIÓN DE MAQUETACIÓN Felipe Martins

MAQUETACIÓN Bruno Ortega

Journal of Democracy en Español, Volumen 1, Año 1,  
São Paulo, Abril de 2026  
Plataforma Democrática

**Índice del catálogo sistemático:**

Democracia; Política y Gobierno; Sociedad; Partidos políticos; Políticas públicas.

**© Copyright - Todos los derechos reservados a:**

Fundación Fernando Henrique Cardoso

Rua Formosa, 367, 6º andar, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01049-000  
fundacaoofhc.org.br • correo electrónico: imprensa@fundacaoofhc.org.br



São Paulo (Sede)

Rua Formosa, 367, 6º andar - Centro

São Paulo - SP - Brasil - CEP 01049-000

tel: +55 (11) 3359-5000

contato@plataformademocratica.org

PERIODICIDAD: Semestral

Esta obra puede reproducirse gratuitamente, sin fines comerciales, en su totalidad o en parte, siempre que se indique debidamente la publicación de origen y su autor.

## Presentación

**E**n esta edición, el Journal of Democracy en español reúne seis artículos que analizan los retos contemporáneos de la democracia: desde el aumento de la intolerancia política hasta el uso manipulador de la igualdad de género por parte de regímenes autoritarios, pasando por los posibles efectos antidemocráticos de la IA, la política exterior de Trump y la crisis de seguridad en América Latina.

En un artículo inédito, el profesor **Wilson Gomes** (Universidade Federal da Bahia) trata de comprender cómo opera concretamente la intolerancia en el seno de la democracia brasileña, qué formas adopta tanto en la derecha como en la izquierda y cuáles son sus efectos sobre la convivencia democrática.

«¿Cuál es el principal problema de las democracias hoy en día: el autoritarismo o la intolerancia? La respuesta más esclarecedora es que se trata de problemas distintos, pero profundamente interrelacionados. La intolerancia suele ser el primer signo visible de procesos autoritarios más profundos. Cuando los adversarios políticos pasan a ser descritos como enemigos de la nación, de la moral o de la humanidad, el terreno subjetivo para el autoritarismo ya está ampliamente preparado», advierte el autor de *La democracia en el mundo digital: historia, problemas y temas* (Editora Sesc São Paulo, 2025).

En el segundo texto, también inédito, **Arturo Valenzuela**, profesor y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University, advierte, desde una perspectiva histórica, de los riesgos que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca representa para América Latina y para las relaciones entre Estados Unidos y los países de la región.

«Es importante no permitir que Trump interprete la Doctrina Monroe y sus corolarios como la intención de EE. UU. de establecer su dominio sobre las Américas. También es indispensable no ignorar lo que Trump está diciendo y haciendo al menospreciar totalmente el papel fundamental

que las naciones sudamericanas y centroamericanas tuvieron, como repúblicas independientes, en la creación de la arquitectura institucional del mundo de la posguerra, junto a EE. UU. —y no como adversarios», escribe este exdiplomático estadounidense nacido en Chile, especialista en política latinoamericana y relaciones interamericanas.

En el tercer artículo, los autores **Dean Jackson** (Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council) y **Samuel Woolley** (Pittsburgh University) analizan los riesgos de la inteligencia artificial para la democracia y tratan de distinguir qué preocupaciones son exageradas y cuáles se están subestimando.

«Queremos llamar la atención sobre las formas en que, a largo plazo, la IA podría presionar —o incluso sacudir— los cimientos de los sistemas políticos democráticos en todo el mundo. Si el actual auge de la IA conduce a su adopción sin la reflexión suficiente, prevemos tres tendencias, cada una de ellas perjudicial para la democracia», escriben, detallando en el texto cuáles son.

¿El impacto de la IA en el Estado de vigilancia de China hará que el Partido Comunista de China sea eternamente dominante? ¿Será algún día capaz este régimen de controlar totalmente las emociones humanas o de eliminar la imprevisibilidad del comportamiento humano? Estas son algunas de las preguntas que **Valentin Weber**, investigador sénior del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores y asociado de *China Foresight* en el LSE IDEAS, busca responder en el cuarto artículo.

«Aunque el PCCh pueda reducir su dependencia de los agentes de policía humanos, seguirá teniendo que lidiar con 1400 millones de seres humanos. Estas personas seguirán siendo muy ingeniosas e impredecibles, especialmente cuando se enfrentan a dificultades económicas o personales. Si se descuida —por ejemplo, si no logra proporcionar prosperidad económica—, entonces ni todos los robots, drones y cámaras del mundo serán capaces de contener la agitación social», escribe el doctor en ciberseguridad por la Oxford University.

En el quinto artículo, los politólogos **Elin Bjarnegård** y **Pär Zetterberg** (Uppsala University) explican por qué líderes autoritarios

han adoptado reformas de igualdad de género a un ritmo sin precedentes. ¿Cómo entender estas tendencias simultáneas —y aparentemente contradictorias— en sus discursos y acciones?

«Los defensores de la democracia y la igualdad de género deben comprender los usos que los líderes autoritarios hacen del *genderwashing* y del *genderbashing*. Ambas son estrategias destinadas a desviar la atención —o justificar— las violaciones de las normas e instituciones democráticas. Como tales, constituyen amenazas para la democracia», afirman.

En el sexto y último texto, **Kai M. Thaler** y **Galo Mayorga** (California University, en Santa Bárbara) tratan de comprender por qué la violencia se ha apoderado de Ecuador y si el presidente Daniel Noboa, reelegido en abril de 2025, representa una amenaza para la democracia del país.

«Se ha mostrado cada vez más asertivo, empleando fuerzas militares a nivel interno para garantizar la seguridad —un objetivo aún no alcanzado— y desafiando a las instituciones liberal-democráticas cuando se interponen en su camino. La democracia de Ecuador se encuentra ahora presionada entre la violencia y el miedo sembrados por las organizaciones criminales y la presión populista por más poder de un presidente que ha sido agresivo militarmente, pero aún no eficaz en la lucha contra el crimen», escriben.

Que disfruten de la lectura.

**Bernardo Sorj y Sergio Fausto**

*Directores de la Plataforma Democrática*

# Intolerancia y autoritarismo en la democracia brasileña

*Wilson Gomes*

*Wilson Gomes es profesor titular de la Universidade Federal da Bahia, doctor en filosofía y autor de Transformações da Política na Era Digital (Transformaciones de la política en la era digital), A Democracia no Mundo Digital (La democracia en el mundo digital) y A Tirania da Virtude (La tiranía de la virtud).*

## **Introducción: intolerancia, autoritarismo y el silencioso desgaste de la democracia**

La intolerancia política ha dejado de ser un fenómeno periférico o episódico en la vida pública contemporánea. De hecho, se ha convertido en un rasgo habitual del debate político y está presente en las campañas electorales, las redes sociales, las universidades, los parlamentos, la cultura e incluso en las decisiones judiciales, por no mencionar las prácticas cotidianas de intimidación, acoso y, en el extremo, brutalidad. El adversario político ya no es solo alguien que piensa de manera diferente; cada vez más, se le trata como alguien cuya presencia en el espacio público se considera ofensiva, peligrosa, ilegítima y, por lo tanto, insoportable.

Es evidente que un determinado nivel de intolerancia, contenido por las leyes y los valores compartidos, se mantiene de forma inercial

incluso en las sociedades democráticas. Al fin y al cabo, el dogmatismo, el fundamentalismo, la rigidez cognitiva y la hostilidad hacia la diferencia forman parte de la naturaleza humana. Pero lo que antes se percibía como exceso, radicalismo o desviación, últimamente se ha naturalizado como virtud cívica, reacción necesaria o deber moral.

Este fenómeno no se limita a Brasil ni puede atribuirse exclusivamente a un campo ideológico. Se inscribe en un contexto más amplio, marcado por la nueva ola global de autoritarismos, que afecta tanto a las democracias consolidadas como a las nuevas democracias, a las sociedades ricas como a los países pobres y desiguales, a los distintos sistemas políticos y a las diversas tradiciones culturales. En prácticamente todos esos contextos se observa la misma paradoja: se siguen llevando a cabo elecciones, las constituciones siguen formalmente en vigor, las instituciones siguen funcionando, pero la disposición social para aceptar el pluralismo, el disenso y la legitimidad del adversario se deteriora rápidamente.

La literatura especializada suele describir este proceso como una erosión democrática gradual. Sin embargo, antes de manifestarse plenamente en el ámbito institucional, esta erosión se anuncia en el plano de las actitudes, disposiciones y prácticas cotidianas. Es en este punto donde la intolerancia política asume un papel central. Funciona como el eslabón entre las predisposiciones autoritarias latentes y su traducción práctica en la vida pública. Más que un subproducto de la polarización, la intolerancia se ha convertido en un mecanismo habitual de organización del conflicto político.

Para comprender adecuadamente dicho proceso, es necesario situar correctamente la relación entre intolerancia y autoritarismo. Aisladamente, la intolerancia tiende a interpretarse como un problema de temperamento, un rasgo de personalidad, un estilo discursivo o una radicalización retórica. Insertada en el marco más amplio del autoritarismo contemporáneo, revela otra dimensión: la de ser la forma cotidiana en que las disposiciones autoritarias se activan, se expresan y se vuelven socialmente aceptables, a menudo bajo la apariencia de virtud.

Autoritarismo e intolerancia no son lo mismo. Confundirlos empobrece el diagnóstico, mientras que separarlos rígidamente nubla su articulación. El autoritarismo se refiere a una orientación general frente al mundo social y político. Implica incomodidad con la diversidad y las diferencias, hostilidad hacia el «otro lado», aversión a la ambigüedad, deseo de orden y uniformidad, valoración de las autoridades fuertes y aceptación de la coacción como solución legítima para los desacuerdos profundos. Se trata menos de una ideología específica que de una forma de lidiar con las diferencias, las incertidumbres y los conflictos.

La intolerancia, por su parte, es una práctica social y política concreta. Se manifiesta cuando la discrepancia de valores o creencias, por un lado, o el pluralismo de actitudes y estilos de vida, por otro, dejan de ser tratados como legítimos y pasan a ser considerados como un error moral, una amenaza, una perversión o un delito. El intolerante no solo discrepa del otro —de sus ideas y actitudes, de su forma de vivir—. Niega al otro el derecho a defender públicamente su posición, a participar en el debate, a vivir como desea y a seguir estando protegido por derechos y garantías fundamentales al hacerlo. Donde se instala la intolerancia, la exclusión deja de ser una excepción y pasa a considerarse aceptable y, a menudo, deseable.

En términos sencillos, pero precisos: el autoritarismo proporciona la disposición, mientras que la intolerancia proporciona el gesto.

Esta distinción ayuda a comprender por qué la intolerancia suele ser la primera señal visible de procesos autoritarios más profundos. Muchas personas que se perciben a sí mismas —y se declaran— defensoras de la democracia no se reconocen como autoritarias. Valoran las elecciones, rechazan los golpes de Estado y se oponen explícitamente a las dictaduras. A menudo se consideran defensoras de valores incuestionables, como la justicia, la igualdad y la familia. Sin embargo, en contextos de polarización intensa, conflicto moralizado o amenaza percibida, esas mismas personas pasan a defender el silenciamiento del adversario, el castigo ejemplar de los disidentes, la suspensión selectiva de derechos o la relativización permanente de los principios democráticos. La



intolerancia se manifiesta, en estos casos, como una respuesta práctica inmediata, incluso antes de cualquier adhesión consciente a soluciones autoritarias explícitas.

Por eso, la nueva ola autoritaria global rara vez comienza con tanques en las calles o con la suspensión abrupta de las elecciones. Por lo general, avanza mediante la erosión gradual de las normas, la reinterpretación oportunista de los principios y la naturalización progresiva de prácticas que antes se consideraban inadmisibles. La intolerancia desempeña aquí un papel estratégico: reconfigura el horizonte de lo aceptable, desplazando los límites de lo que se puede decir, hacer y justificar en nombre de causas consideradas superiores.

Cuando los adversarios políticos pasan a ser descritos como enemigos de la nación, de la moral o de la humanidad; cuando determinadas instituciones son tratadas como obstáculos ilegítimos a la «verdadera» voluntad del pueblo; cuando la violencia simbólica se convierte en un es-

---

***El autoritarismo y la intolerancia no son lo mismo. Confundirlos empobrece el diagnóstico, mientras que separarlos rígidamente nubla su articulación.***

---

pectáculo político buscado y promovido; cuando «callar la boca» de quienes sostienen una opinión que mi bando considera deplorable se celebra como pedagogía moral; cuando la disidencia se equipara al daño, la malicia y la ofensa, el terreno subjetivo para el autoritarismo ya está ampliamente preparado, incluso si las instituciones formales aún se resisten.

Esta dinámica ayuda a responder a una pregunta recurrente en el debate democrático: ¿el principal problema de las democracias hoy en día es el autoritarismo o la intolerancia? La respuesta más iluminadora es que se trata de problemas distintos, pero profundamente articulados. El autoritarismo es el problema estructural, de fondo: disposiciones, creencias, convicciones y actitudes que atraviesan distintos campos ideológicos y se intensifican en condiciones de amenaza, inseguridad

o desorden percibido. La intolerancia es el problema inmediato y cotidiano: lo que las personas hacen, dicen y justifican en la práctica política diaria. El autoritarismo se materializa en la intolerancia; la intolerancia da rienda suelta al autoritarismo.

Sin una intolerancia generalizada, el autoritarismo tiende a permanecer latente, contenido por las normas, reprimido por las costumbres y las expectativas democráticas. Sin disposiciones autoritarias patentes, la intolerancia no encuentra una justificación moral duradera ni se estabiliza como patrón legítimo de acción. Es en la interacción entre ambos donde se produce el desgaste de la democracia, incluso cuando ese desgaste es silencioso.

En el caso brasileño, dicho proceso adquiere características particularmente preocupantes. La combinación de desigualdad persistente, violencia crónica, baja confianza institucional e intensa polarización moral crea un entorno propicio para la activación de disposiciones autoritarias en amplios sectores de la sociedad. La intolerancia surge, entonces, no como una excepción, sino como una respuesta «normal» al conflicto político. Atraviesa ideologías, instituciones y prácticas, presentándose a veces como defensa del orden, a veces como protección de los vulnerables (y de los grupos «minorizados», como se dice), a veces como reacción a la amenaza, a veces como imperativo moral.

Es precisamente por eso que este ensayo no se propone tratar la intolerancia como una desviación marginal ni como un monopolio de un solo campo político. El objetivo es comprender cómo opera concretamente la intolerancia en el interior de la democracia brasileña, qué formas adopta en la derecha y en la izquierda, qué justificaciones morales la sustentan y cuáles son sus efectos acumulativos sobre el pluralismo, la libertad y la convivencia democrática.

Al hacerlo, el ensayo parte de una premisa simple, pero exigente: la democracia no es un régimen que promete unanimidad moral o convergencia política. Es un arreglo institucional que permite la convivencia entre personas y grupos que divergen —a veces en desacuerdos profundos y permanentes— bajo reglas comunes. Cuando se pierde esta

disposición, cuando se trata al adversario como ilegítimo, cuando la coerción sustituye a la persuasión y el castigo ocupa el lugar del debate, la democracia comienza a desmoronarse, no necesariamente de golpe, sino desde dentro.

Es a partir de este marco que se hace posible examinar las formas específicas de intolerancia asociadas a la derecha y a la izquierda, sus diferencias reales y sus convergencias normativas. Y es también a partir de ahí que se puede evaluar con mayor claridad por qué la intolerancia se ha convertido, hoy en día, en uno de los principales vectores del avance autoritario en las democracias contemporáneas.

### **La intolerancia de la derecha: orden moral, sumisión y hostilidad hacia el otro**

La intolerancia asociada a la derecha contemporánea no puede entenderse únicamente como una reacción circunstancial a las políticas progresistas, las aceleradas transformaciones culturales o las recientes disputas electorales. Expresa una *forma específica de organizar la vida social y moral*, en la que la política deja de ser un ámbito de disputa legítima entre proyectos distintos y pasa a funcionar como instrumento de preservación de un orden considerado correcto y natural, pero de alguna manera amenazado.

El rasgo estructurante de esta intolerancia es el *convencionalismo moral rígido*. Este parte de la creencia de que la cohesión social depende de una adhesión convencida y disciplinada a patrones morales definidos, a menudo asociados a la tradición, la religión, la familia, la autoridad y la jerarquía. Estos patrones no se presentan como opciones entre otras posibles, sino como fundamentos objetivos de la vida en común. Discrepar de ellos no es solo estar en desacuerdo: es corroer el orden y buscar activamente el caos.

Este marco aparece, por ejemplo, en la forma en que los líderes conservadores, en México y en otros países, han descrito las políticas

educativas relacionadas con el género y la sexualidad como intentos deliberados de destruir la familia y corromper a los niños. Esto se hizo particularmente visible en el episodio en que un programa gubernamental concebido para combatir la homofobia en las escuelas fue deliberadamente presentado como un proyecto para fomentar la homosexualidad infantil. En este sentido, las prácticas o iniciativas con las que se discrepa dejan de ser tratadas como divergencias legítimas sobre políticas públicas y pasan a ser enmarcadas como ataques morales a la propia base de la vida social. La diversidad moral no aparece como pluralismo legítimo, sino como señal de decadencia, concesión al error, abandono de los principios, incitación al desorden o herejía. Los estilos de vida alternativos, las visiones del mundo divergentes o las demandas de reconocimiento por parte de grupos minoritarios se perciben como síntomas de desintegración social. La intolerancia surge entonces como respuesta defensiva: no se trata de perseguir al otro, sino de proteger a la sociedad contra el desorden y la laxitud moral que supuestamente encarna.

Esta lógica produce una exigencia permanente de *conformidad interna*. La pertenencia al grupo —ya sea nacional, religioso, cultural o político— está condicionada a la adhesión explícita a determinados valores. Las disidencias internas se tratan con especial severidad. El que cuestiona los patrones morales compartidos es visto como un traidor, un degenerado o un agente de corrosión. El punitivismo interno es intenso, ya que la mayor amenaza no proviene solo del exterior, sino sobre todo de quienes, estando «dentro», desafían el orden común o se adhieren a él de forma poco severa y diligente.

Este patrón se manifiesta, por ejemplo, en la hostilidad dirigida a figuras conservadoras que se niegan a adherirse plenamente a las narrativas dominantes dentro de su propio campo, siendo a menudo acusadas de traición, cobardía o complicidad con el enemigo. Esto ocurre cuando un líder de derecha reconoce la victoria electoral de un adversario o la credibilidad de las urnas, o cuando un parlamentario de ese campo defiende decisiones judiciales que desagradan al grupo. La disidencia

interna deja de percibirse como parte normal de la deliberación pública y pasa a interpretarse como un signo de degeneración moral o deslealtad.

La *sumisión a la autoridad* ocupa, en este contexto, un lugar central. Las autoridades percibidas como legítimas —líderes políticos fuertes, instituciones jerárquicas, figuras religiosas o símbolos nacionales— son vistas como garantías de estabilidad. Cuestionarlas no se interpreta como un ejercicio legítimo de crítica, sino como una insubordinación peligrosa. La obediencia deja de ser un medio y se convierte en una virtud. Y, en contextos de crisis o amenaza percibida, crece la disposición a delegar el poder y aceptar la coerción como solución necesaria.

Esta disposición se expresa en la forma en que los líderes políticos —como Viktor Orbán, Donald Trump y Jair Bolsonaro— son presentados y percibidos como figuras providenciales, investidas de la misión de restaurar el orden y proteger a la nación contra enemigos internos y externos. En estas condiciones, la concentración de poder deja de ser motivo de preocupación y pasa a interpretarse como un requisito necesario para la supervivencia de la sociedad. Esta combinación de convencionalismo moral y sumisión a la autoridad se proyecta de manera aún más agresiva sobre los *grupos externos*. Las minorías étnicas, culturales o sexuales, los inmigrantes, los movimientos sociales, los artistas, los intelectuales, los periodistas, las universidades y los adversarios políticos pasan a ser percibidos como portadores de valores incompatibles con el orden deseado. El otro no es solo alguien que piensa diferente, sino alguien que amenaza activamente el modo de vida del grupo.

Es en este punto donde la intolerancia adquiere un carácter *excluyente y jerarquizador*. La idea de igualdad moral básica entre los individuos pierde su centralidad. En su lugar, surge la noción de que algunos grupos son más merecedores de derechos, respeto y protección que otros. La dignidad se vuelve condicional: depende de la adhesión a ciertos valores y del cumplimiento de determinados estándares. La desigualdad deja de ser un problema y pasa a justificarse como reflejo del mérito, el esfuerzo o la superioridad moral, o como parte del orden natural de las cosas.

La violencia simbólica desempeña un papel central en este proceso. La humillación pública, la deshumanización del adversario, la represión, el escarnio, las amenazas veladas o explícitas y la celebración del sufrimiento ajeno se convierten en parte del repertorio político cotidiano. Estos gestos no se perciben como excesos, sino como demostraciones de coraje moral y como pedagogía social. El intolerante no solo rechaza al otro, sino que exhibe su rechazo como señal de fuerza y autenticidad.

La humillación pública de adversarios políticos, periodistas o miembros de instituciones como la Suprema Corte de Justicia se celebra a menudo como una demostración de valentía y autenticidad. El insulto deja de verse como una degradación del debate público y pasa a funcionar como un signo de integridad moral y compromiso con la verdad. En contextos de radicalización más avanzada, esta violencia simbólica se articula con la *indulgencia moral ante la violencia física*. Aunque la mayoría de los simpatizantes no participan directamente en actos violentos, existe una disposición difusa a relativizar, minimizar o justificar la violencia cometida «por el lado correcto». El problema no es la violencia en sí, sino quienes la sufren. La empatía se vuelve selectiva.

Este mecanismo se hace particularmente visible cuando los actos de violencia política, como los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasil, se relativizan, se reinterpretan como una reacción comprensible o se atribuyen a una provocación previa por parte de las víctimas. En estas circunstancias, la gravedad de la violencia deja de evaluarse en sí misma y pasa a depender de la identidad de quienes la practican o la sufren. En Brasil, este patrón ha encontrado terreno fértil en un contexto marcado por la *inseguridad pública crónica, la desigualdad persistente y la baja credibilidad institucional*. Para una parte significativa de la población, la experiencia cotidiana es la del abandono estatal, la violencia organizada y la ausencia de protección y asistencia. En este escenario, los discursos autoritarios e intolerantes no suenan necesariamente abstractos o ideológicos, sino como respuestas prácticas a problemas reales.

La intolerancia de la derecha, en estos contextos, se presenta a menudo como *realismo moral*. Se opone a lo que denomina ingenuidad liberal

o idealismo progresista y reivindica el monopolio de la lucidez. Los derechos, las garantías y los procedimientos se tratan como lujos que no se conceden a quienes viven por la violencia o en ella. La coerción aparece como una necesidad, no como una elección.

Otro elemento decisivo de esta gramática intolerante es la idea de la «mayoría silenciosa». Se trata de una construcción retórica poderosa, que cumple múltiples funciones. Al suponer que «la mayoría piensa como nosotros, pero ha sido silenciada», la intolerancia deja de percibirse como una actitud extrema o minoritaria. Al contrario: se presenta como expresión de un consenso silencioso. La exclusión del otro pasa a ser vista no como una violación de los principios democráticos, sino como la corrección de una distorsión.

Se trata de un recurso retórico ampliamente utilizado por los líderes populistas contemporáneos, que afirman representar a una mayoría supuestamente silenciada por las élites políticas, judiciales y mediáticas. En este contexto, la discordancia deja de interpretarse como una expresión legítima de pluralismo y pasa a ser tratada como evidencia de manipulación institucional. Esta creencia tiene efectos profundos. Cuando alguien cree hablar en nombre de una mayoría moralmente homogénea, la disidencia deja de interpretarse como una divergencia legítima y pasa a percibirse como usurpación, fraude o sabotaje. Las instituciones que median en los conflictos —tribunales, prensa, universidades, órganos de control— son acusadas de traicionar al pueblo. La intolerancia se convierte en virtud cívica: silenciar a determinados interlocutores es «dar voz» a la mayoría. O, alternativamente, se formula la idea de que la élite vocal, que expresa libremente ciertas ideas, ya ha hablado demasiado: es necesario silenciarla para que se escuche la voz de la mayoría hasta ahora silenciada.

La deslegitimación de las instituciones democráticas es, por lo tanto, parte constitutiva de la intolerancia contemporánea de la derecha. No se trata de una crítica precisa a decisiones específicas, sino de una corrosión sistemática de la confianza en la propia idea de mediación institucional. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como árbitros

—imperfectos, pero legítimos— y pasan a ser tratadas como enemigas, involucradas en una conspiración en contra de nosotros, se abre un espacio para soluciones de fuerza y para líderes carismáticos dispuestos a «limpiar el sistema». La incorrección política, asumida como un programa deliberado, se convierte en una virtud, un signo de autenticidad y honestidad, un desafío o una rebelión contra una opresión instituida.

Desde el punto de vista democrático, el problema central no radica solo en los contenidos defendidos, sino en *la forma en que se concibe la política*. Cuando el espacio público se transforma en una arena de purificación moral, el adversario es tratado como un enemigo al que se debe eliminar (al menos simbólicamente, pero a veces no solo simbólicamente), los derechos se vuelven condicionales a la adhesión a una identidad moral dominante, la democracia deja de funcionar como un régimen de convivencia entre divergentes.

La intolerancia de la derecha, por lo tanto, no es un mero exceso retórico ni una desviación marginal. Constituye un *modo de funcionamiento político coherente*, arraigado en disposiciones autoritarias activadas por contextos de amenaza y amplificadas por las dinámicas contemporáneas de la comunicación. Sus efectos no se limitan a la retórica agresiva: desgastan las normas democráticas, legitiman las prácticas de exclusión y preparan el terreno para soluciones abiertamente autoritarias.

Cabe señalar que reconocer este patrón no implica ignorar que muchos ciudadanos de derechas —la mayoría de ellos, esperamos— rechazan el autoritarismo y defienden los principios democráticos. Tampoco significa reducir a la derecha a una caricatura intolerante. Significa, más bien, comprender *por qué determinadas formas de intolerancia encuentran una resonancia específica en este campo*, dadas ciertas disposiciones morales y ciertas condiciones sociales.

A partir de este diagnóstico, es posible examinar con igual rigor la otra cara del problema: la intolerancia que surge en el seno de la izquierda contemporánea, con una gramática distinta, pero con efectos democráticos igualmente preocupantes.



## **La intolerancia de la izquierda: virtud moral, castigo simbólico y jerarquías del bien**

La intolerancia política asociada a la izquierda contemporánea presenta un aspecto distinto al observado en la derecha, pero no menos problemático desde el punto de vista democrático. Rara vez se basa en la defensa explícita de las jerarquías sociales tradicionales, en la sumisión a la autoridad o en concepciones morales conservadoras. Por el contrario: suele presentarse como expresión de valores emancipadores, igualitarios, humanistas y universalistas. Es precisamente esta autocomprensión moral la que le confiere fuerza, legitimidad y, al mismo tiempo, opacidad crítica.

El rasgo organizador de esta forma de intolerancia es la moralización absoluta de la política. Las divergencias dejan de tratarse como desacuerdos legítimos entre proyectos, prioridades, diagnósticos o valores distintos y pasan a enmarcarse como errores morales, complicidad con la opresión o indicios de deshumanización. La frontera decisiva no separa posiciones políticas, sino personas y grupos: los moralmente conscientes y los moralmente condenables.

Este encuadre se hace visible cuando las posiciones divergentes sobre políticas públicas, lenguaje o derechos civiles se tratan no como desacuerdos legítimos, sino como evidencia de racismo, misoginia, transfobia o complicidad con la opresión. La divergencia deja de interpretarse como parte normal del pluralismo democrático y pasa a funcionar como indicador de falla moral. A partir de ese momento, cesa el intercambio público de razones, mediante el cual se examinaban los puntos de vista y se consideraban las divergencias, y se abre espacio para acusaciones morales e imputaciones de delitos.

En este sentido, la política deja de ser un espacio de convivencia conflictiva entre divergentes y se convierte en un tribunal moral permanente. No solo se discute lo que se debe hacer, sino quién es digno de hablar, quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado. La intolerancia no aparece como una violación de los principios democráticos, sino como

un deber ético ante injusticias percibidas como insoportables o ideas y actitudes consideradas deplorables según los valores y principios del grupo. Se interpreta como una reacción moralmente justificada contra una supuesta ofensa a valores innegociables y a grupos que deben ser protegidos.

Este patrón se manifiesta, por ejemplo, en movilizaciones destinadas a impedir la realización de conferencias, debates o presentaciones de figuras consideradas moralmente inaceptables. El objetivo no es refutar sus ideas en el espacio público, sino impedir su propia expresión, con el argumento de que su mera circulación constituye una forma de daño.

A diferencia del autoritarismo de derechas, que se organiza en torno a autoridades claras y jerarquías explícitas, la intolerancia de izquierdas opera a través de una autoridad moral difusa. Por lo general, no hay líderes indiscutibles ni instituciones formales investidas del poder de imponer ortodoxias. Lo que hay es un consenso moral presunto, a menudo presentado como obvio, evidente e incuestionable. Quien no lo comparte no es visto como alguien que discrepa legítimamente, sino como alguien que «no ha entendido», «no se ha preocupado» o «se ha puesto al lado equivocado de la historia». La propia idea de que ciertas posiciones son evidentemente correctas y que la historia ya ha pronunciado su veredicto convierte el desacuerdo en un signo de atraso moral o de deficiencia de carácter, y no en una expresión legítima del pluralismo político.

Esta creencia en la transparencia del bien desempeña un papel central. Se parte de la suposición de que las personas razonables e informadas necesariamente comparten las mismas posiciones sobre temas delicados. Cuando esto no ocurre, la divergencia no se interpreta como resultado de valores conflictivos o experiencias distintas, sino como producto de la ignorancia, la mala fe o la perversidad moral. El desacuerdo deja de ser político y pasa a ser psicologizado o moralizado.

Es en este contexto que la intolerancia adopta la forma de una pedagogía moral coercitiva. El silenciamiento del otro no se presenta como censura, sino como cuidado del bien colectivo y la justicia; la exclusión

no aparece como injusticia, sino como responsabilidad moral o deber de cuidar; el castigo simbólico se justifica como forma de educar, corregir o proteger. La coerción moral no se percibe como un problema democrático, sino como un instrumento legítimo de transformación social. En este marco, restringir la circulación de determinadas ideas o castigar públicamente a sus autores no se presenta como un acto de censura, sino como una exigencia moral necesaria para la protección de los grupos vulnerables y la promoción de la justicia social.

Este mecanismo produce un intenso punitivismo simbólico, especialmente dirigido a los disidentes internos del propio campo progresista. Los intelectuales, artistas, humoristas, militantes o políticos identificados con la izquierda que se alejan del consenso moral dominante suelen ser tratados con especial severidad. La disidencia interna se considera traición, irresponsabilidad o complicidad con el enemigo. Por otro lado, el linchamiento digital, la cancelación, las campañas de deslegitimación y la exigencia de retractaciones ritualizadas funcionan como instrumentos de disciplina del grupo.

Los intelectuales, artistas y figuras públicas identificadas con el campo progresista han sido a menudo objeto de campañas coordinadas de deslegitimación, de exigencias públicas de retractación o de exclusión profesional tras expresar posiciones consideradas moralmente inadecuadas. El objetivo de estas campañas no es solo castigar al individuo, sino reafirmar públicamente los límites de lo aceptable y señalar los costos de la disidencia. A diferencia del punitivismo interno de la derecha, que se basa en la violación de las normas tradicionales, el punitivismo interno de la izquierda se fundamenta en la idea de que ciertos valores son tan moralmente superiores que no admiten la contestación pública ni toleran ser cuestionados intelectualmente. La vigilancia moral permanente sustituye a la autoridad formal como mecanismo de cohesión.

Otra característica de esta forma de intolerancia es la hostilidad selectiva hacia la disidencia externa. Los conservadores, los liberales clásicos, los críticos del identitarismo o los defensores de las libertades civiles que se resisten a la moralización punitiva del discurso suelen ser

calificados como agentes objetivos de la opresión, incluso cuando no defienden agendas autoritarias. En este contexto, además, la distinción entre discrepar y causar daño tiende a desaparecer. Las opiniones pasan a ser tratadas como acciones perjudiciales, de la misma naturaleza que cualquier acción que incluya violencia física, y deben ser castigadas con rigor; las palabras se tratan como violencia y merecedoras de respuestas igualmente violentas.

La idea de que ciertas formas de discurso constituyen, en sí mismas, formas de violencia contribuye a disolver la distinción entre daño físico y desacuerdo simbólico, legitimando las respuestas punitivas no como restricciones a la libertad, sino como formas moralmente justificadas de autodefensa. En este punto, surge una forma peculiar de jerarquización, no social, sino moral. Los individuos y los grupos pasan a ser clasificados según su lugar y en una escala de virtud, conciencia o vulnerabilidad. Los que se sitúan en la cima de esta jerarquía gozan de una mayor indulgencia moral; los que se sitúan en la base ven relativizados sus derechos. En la cima del Olimpo moral se sitúan, en general, las «víctimas más merecedoras» de la opresión histórica o estructural y aquellos que se adhieren con mayor entrega y sinceridad a los dogmas progresistas o de izquierda.

En este contexto, transgresiones similares pueden ser juzgadas de manera radicalmente distinta, dependiendo de la posición moral presunta del individuo o del grupo al que pertenece. La evaluación deja de depender exclusivamente del acto en sí y pasa a estar determinada por el lugar que ocupa el agente en la jerarquía moral vigente. La igualdad formal, principio central de la democracia liberal, cede el paso a una igualdad condicionada por la identidad, la intención presunta o la alineación moral. La ética ya no se basa en el juicio de actitudes singulares, sino en la inscripción de los sujetos en identidades moralmente superiores o inferiores.

Esta jerarquía moral ayuda a explicar la ambigua relación de la intolerancia típicamente de izquierda con las libertades fundamentales, en especial con la libertad de expresión. En abstracto, se celebra como un

logro democrático. En la práctica, sin embargo, su ejercicio se relativiza constantemente cuando se percibe como ofensivo, peligroso o desestabilizador para grupos considerados vulnerables. La censura no se asume como tal, sino que se redefine como protección, responsabilidad social o prevención de daños. En este contexto, la restricción del discurso deja de considerarse una excepción indeseable y pasa a interpretarse como un requisito necesario para la realización de la justicia y la igualdad.

Lo mismo ocurre con la idea de pluralismo. Aunque a menudo se invoca como valor, solo se tolera mientras no desafíe el consenso moral dominante. Ciertas posiciones se consideran indignas de circular públicamente, no porque inciten a la violencia directa, sino porque supuestamente perpetúan estructuras de opresión o legitiman desigualdades simbólicas. El criterio de exclusión se desplaza de la acción a la intención presunta, del efecto concreto al significado moral atribuido.

En México, esta forma de intolerancia ha encontrado terreno fértil en entornos altamente escolarizados, en vanguardias culturales, en universidades, en redacciones periodísticas, en organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, en las redes sociales. Sin embargo, su influencia trasciende estos espacios. Las narrativas de pureza moral, la exigencia de alineación discursiva y el castigo ejemplar de las desviaciones moldean el debate público más amplio y producen un clima difuso de autocensura. Muchos dejan de hablar no por miedo al Estado, sino por temor a sanciones morales informales. En diversos entornos profesionales y académicos, las personas afirman evitar expresar opiniones legítimas por temor a sanciones reputacionales, al aislamiento social o al perjuicio profesional, incluso en ausencia de una coerción institucional directa y formal.

Desde un punto de vista subjetivo, esta intolerancia se alimenta de una sensación de urgencia histórica. La creencia de que se vive un momento decisivo —en el que las vacilaciones costarían vidas, derechos o la propia democracia— autoriza la suspensión de los escrúpulos democráticos. La excepción pasa a tratarse como norma; lo provisional, como permanente. La coerción moral aparece como el precio inevitable

del progreso ético. La percepción de que se vive un momento decisivo, en el que las concesiones al pluralismo representarían complicidad con la injusticia, contribuye a naturalizar prácticas que, en otras circunstancias, serían rápidamente reconocidas como incompatibles con los principios democráticos básicos.

Este marco es políticamente eficaz porque desplaza el debate. Quienes critican las prácticas intolerantes son acusados de insensibilidad, connivencia con la opresión o falta de compromiso con causas justas; o de haberse adherido al lado de la opresión, de haberse convertido en cómplices del racismo, el femicidio, la homofobia o la transfobia, el patriarcado, etcétera. La moderación se trata como cobardía; la ambigüedad, como traición; la crítica, como declaración de guerra y como definidora de la falta de carácter o valor de quien la enuncia. El espacio para posiciones intermedias se estrecha rápidamente.

Nada de esto significa que la izquierda sea homogénea o que estas actitudes definan todo el campo progresista. Dentro de la izquierda existen sólidas tradiciones de defensa del pluralismo, la libertad de expresión y la convivencia entre divergentes. El problema es que, en contextos de intensa polarización, la intolerancia tiende a ocupar el centro del escenario, presentándose como la forma más consecuente, radical y moralmente elevada de acción política.

Desde el punto de vista democrático, el efecto es tan corrosivo como en el caso de la derecha. La política deja de funcionar como un espacio de desacuerdo regulado y se convierte en una arena en la que cada uno exhibe sus credenciales progresistas y el hecho de ser una persona virtuosa. La discordancia se patologiza; la duda se convierte en sospecha; la convivencia con lo diferente y lo divergente se trata definitivamente como moralmente reprochable. La intolerancia de la izquierda, por lo tanto, no se opone al autoritarismo: constituye una de sus modalidades contemporáneas, adaptada a una gramática moral igualitaria y emancipadora.

Reconocer este patrón no implica negar las asimetrías empíricas entre la izquierda y la derecha, ni ignorar los peligros específicos que

representan los movimientos autoritarios conservadores en el poder. Implica, más bien, rechazar la cómoda idea de que las buenas intenciones o las causas justas inmunizan contra las prácticas antidemocráticas.

Es precisamente este rechazo lo que permite avanzar al siguiente punto del ensayo: la necesidad de un criterio normativo común para evaluar la intolerancia política, independientemente del campo ideológico en el que se manifieste.

### **Diferencias reales, simetría normativa necesaria**

Reconocer la presencia de intolerancia política tanto en la derecha como en la izquierda suele provocar una reacción inmediata: la acusación de falsa equivalencia. Como si señalar patrones autoritarios en campos ideológicos distintos implicara negar las diferencias históricas, empíricas o morales entre ellos. Esta objeción, aunque comprensible en el debate político militante, pierde fuerza cuando el problema se formula con precisión conceptual.

El punto central no es afirmar que la derecha y la izquierda son iguales, ni que producen los mismos daños en todos los contextos. El punto es otro y más decisivo: el autoritarismo no es una ideología. No se confunde con ser de derecha o de izquierda, conservador o progresista, liberal o socialista. El autoritarismo se refiere a una forma específica de lidiar con creencias, conflictos y divergencias. Describe cómo se cree y no qué se cree.

Ser de izquierda no implica ser autoritario, al igual que ser de derecha no implica ser autoritario. Lo que predispone al autoritarismo es un conjunto relativamente estable de disposiciones psicológicas y morales: rigidez cognitiva, intolerancia a la ambigüedad, necesidad de certeza moral, hostilidad hacia el disenso y disposición a recurrir a la coerción como forma legítima de resolver conflictos. Estos rasgos no pertenecen a una ideología específica. Atraviesan distintos campos políticos y pueden

permanecer latentes durante largos períodos, activándose en condiciones particulares de amenaza, polarización o conflicto moral intenso.

Esta distinción es fundamental para comprender lo que se suele llamar «autoritarismo de izquierda» o «autoritarismo de derecha». Estas expresiones no designan doctrinas políticas coherentes ni tradiciones intelectuales bien definidas. Describen situaciones en las que los impulsos autoritarios adoptan formas ideológicamente alineadas con un campo específico, utilizando su vocabulario moral, sus causas legítimas y sus narrativas dominantes como vehículos de expresión.

Cuando las personas con disposiciones autoritarias se identifican con la derecha, estos impulsos tienden a manifestarse mediante la defensa de un orden moral rígido, la valorización de la autoridad, la jerarquización de la dignidad humana y la hostilidad abierta hacia los grupos percibidos como amenazantes. Cuando estas mismas disposiciones se expresan dentro de la izquierda, adoptan otra gramática: censura en nombre de la protección de los vulnerables, castigo de los disidentes internos, demonización moral de los conservadores, coerción estatal o social para imponer valores igualitarios o identitarios, naturalización de la vigilancia y el castigo informal en nombre de la justicia.

---

***Lo que distingue las actitudes autoritarias de las posiciones políticas legítimas no es el contenido de las creencias, sino el estilo con el que se sostienen esas creencias.***

---

Nada de esto se deriva automáticamente de las ideas de izquierda o de derecha. Lo que ocurre es que la ideología ofrece el lenguaje, mientras que el autoritarismo proporciona la gramática. Las causas justas, los valores emancipadores o las tradiciones

respetables no inmunizan contra la tentación autoritaria. Al contrario: a menudo ofrecen justificaciones moralmente más sofisticadas para las prácticas de exclusión y coerción.

Las religiones son prueba de ello. En diferentes momentos históricos, las tradiciones religiosas han ofrecido tanto la justificación moral para persecuciones, inquisiciones y exclusiones como el lenguaje normativo



que ha inspirado movimientos de liberación, igualdad y derechos civiles. La misma tradición que legitimó la represión en nombre del orden divino también proporcionó los fundamentos morales invocados por los movimientos emancipadores. Lo que varió no fue el contenido moral disponible, sino la gramática política que lo organizó, a veces como instrumento de dominación, otras como recurso para ampliar la libertad.

Esta clave interpretativa ayuda a aclarar por qué la intolerancia política se manifiesta con tanta intensidad entre personas que se perciben a sí mismas como defensoras de la democracia. Y, de hecho, el autoritarismo contemporáneo rara vez se presenta como un rechazo explícito de la democracia. Se expresa como impaciencia con sus límites, frustración con sus procedimientos y desprecio por sus ambigüedades. Surge cuando la convivencia con la disidencia pasa a considerarse un costo excesivo, y no una condición de la vida democrática.

Lo que distingue, por lo tanto, las actitudes autoritarias de las posiciones políticas legítimas no es el contenido de las creencias, sino el estilo con el que se sostienen esas creencias. Los autoritarios tienden a rechazar las dudas, a tratar a los opositores como enemigos morales, a responder a la divergencia con castigo en lugar de con argumentos, a negar al adversario el derecho a existir políticamente y a defender la coerción, la censura o la violencia para imponer lo que consideran correcto. Este patrón puede expresarse en discursos conservadores o progresistas, religiosos o seculares, jerárquicos o igualitarios.

Esta comprensión permite evitar dos errores simétricos. El primero es el esencialismo ideológico: la creencia de que un determinado campo político es, por su propia naturaleza, autoritario o democrático. Durante demasiado tiempo, los pensadores de izquierda sostuvieron que el autoritarismo era una actitud y un rasgo de personalidad completamente natural en la derecha y entre los conservadores, pero incompatible con la izquierda y los progresistas. Hoy, afortunadamente, esta es una premisa abandonada por los estudiosos del autoritarismo.

El segundo error es el relativismo complaciente: la idea de que, dado que las intolerancias son diferentes, no pueden evaluarse con un criterio

común. La democracia no puede funcionar con excepciones permanentes basadas en la identidad ideológica o en una supuesta superioridad moral.

Desde el punto de vista normativo, el criterio decisivo es simple, aunque exigente: la reciprocidad democrática. Esto implica reconocer que los adversarios políticos, incluso cuando defienden posiciones que rechazamos profundamente, tienen derecho a participar en el espacio público, a expresarse, a organizarse y a disputar el poder dentro de las reglas comunes. Este criterio no elimina los conflictos ni garantiza el consenso, pero establece límites claros a la coerción, el castigo y la exclusión.

Cuando se abandona este principio, poco importa si la exclusión se hace en nombre del orden, la tradición, la igualdad o la justicia social. El daño democrático es el mismo. La política deja de ser un espacio de convivencia entre divergentes y pasa a funcionar como una arena de purificación moral. La intolerancia deja de ser una reacción ocasional y se convierte en un patrón legítimo de acción.

Reconocer esta simetría normativa no equivale a ignorar las asimetrías empíricas. Hay contextos en los que la intolerancia de un bando está más institucionalizada, es más violenta o está más cerca del poder estatal. Hay momentos en los que el riesgo autoritario es más inmediato en la derecha o en la izquierda. Pero estas variaciones no autorizan la suspensión del juicio democrático básico: la intolerancia, sea cual sea su origen ideológico, es incompatible con la democracia.

Es precisamente esta comprensión la que permite evaluar con mayor claridad las consecuencias acumulativas de la intolerancia política en Brasil. No se trata solo de excesos aislados o episodios ocasionales de radicalización. Se trata de un proceso de desgaste continuo de las normas, disposiciones y expectativas que hacen posible la convivencia democrática. Es a este conjunto de efectos al que nos referimos a continuación.

## **Las consecuencias de la intolerancia para la democracia brasileña**

Cuando la intolerancia política se extiende de manera transversal —atravesando campos ideológicos, instituciones y prácticas cotidianas— sus efectos sobre la democracia no se manifiestan, en general, como una ruptura repentina o un colapso espectacular. Operan de manera más discreta y persistente, por acumulación de daños, produciendo un desgaste continuo de las normas, disposiciones y expectativas que hacen posible la convivencia democrática.

El primero y más evidente de estos efectos es la erosión del pluralismo. La democracia presupone que los desacuerdos profundos no solo existen, sino que se reconocen como legítimos. Esto no significa aceptar todo como correcto, sino admitir que las posiciones que rechazamos profundamente tienen derecho a circular en el espacio público. Cuando se instala la intolerancia, este reconocimiento desaparece. El adversario político deja de ser alguien con quien se disputa el poder dentro de reglas comunes y pasa a ser percibido como alguien cuya mera presencia en el debate ya se constituye una ofensa.

El resultado es un estrechamiento progresivo del espacio público. Ciertos temas se vuelven impronunciables; ciertas preguntas, sospechosas; ciertas posiciones, moralmente prohibidas. Este estrechamiento no se produce, en la mayoría de los casos, mediante una censura estatal explícita, sino por una presión social difusa, una vigilancia moral permanente y un castigo simbólico ejemplar. La autocensura pasa a desempeñar un papel central. Muchas personas dejan de hablar no porque estén de acuerdo con el consenso dominante, sino porque el costo de la discrepancia es demasiado alto.

Este proceso empobrece el debate público. Las ideas no se ponen a prueba, los argumentos no se confrontan, los diagnósticos erróneos no se corrigen. La política pierde su capacidad reflexiva y se convierte en un espacio de reafirmación identitaria. La intolerancia, al reducir el

espectro de lo que se puede decir, reduce también la capacidad colectiva de comprender problemas complejos y formular soluciones democráticas.

Un segundo efecto relevante es la normalización del castigo extrainstitucional. En una democracia funcional, los conflictos políticos deben ser mediados por instituciones, procedimientos y garantías. La intolerancia, sin embargo, desplaza la resolución de conflictos a ámbitos informales: redes sociales, campañas de difamación, boicots, linchamientos simbólicos, presiones económicas o profesionales. La sanción deja de depender de reglas claras y pasa a ser administrada por mayorías momentáneas o por grupos moralmente movilizados.

Este desplazamiento tiene profundas implicaciones. Debilita la confianza en las instituciones, fomenta la lógica de la justicia por mano propia y crea incentivos perversos y antidemocráticos. Mientras más agresiva, espectacular y humillante es la sanción, más grande es el retorno simbólico o político para quienes la promueven. La política pasa a recompensar la intolerancia, y no la argumentación. El miedo sustituye a la persuasión como mecanismo de regulación del debate.

Un tercer efecto es la radicalización asimétrica del espacio público. La intolerancia tiende a expulsar del debate las posiciones moderadas, ambiguas o conciliadoras. Quienes intentan mantener posiciones intermedias son a menudo acusados de complicidad, cobardía o traición. El resultado es un entorno en el que solo las voces más radicales, estridentes y moralmente absolutas siguen siendo audibles. La percepción de que existe una polarización extrema se intensifica, no solo porque los extremos se fortalecen, sino porque el centro y la moderación desaparecen.

Este ambiente favorece a los líderes que se presentan como encarnaciones morales del bien, del orden o de la justicia, dispuestos a romper los límites en nombre de causas superiores. La disposición a aceptar soluciones autoritarias crece no porque la democracia sea rechazada explícitamente, sino porque se percibe como ineficaz, indulgente y moralmente insuficiente ante amenazas reales o imaginarias.

En México, estos efectos se combinan con debilidades históricas conocidas: desigualdad extrema, violencia crónica, baja confianza

institucional y una tradición limitada de convivencia plural en contextos de conflicto intenso. La intolerancia actúa como catalizador de estas debilidades. No crea el problema de la nada, pero intensifica las predisposiciones existentes, haciendo que las respuestas autoritarias sean más plausibles y socialmente aceptables.

Sin embargo, hay una consecuencia adicional que merece especial atención en el caso brasileño: la creciente tendencia a convertir la intolerancia en norma, en ley. Cuando la disposición a excluir al otro deja de satisfacerse con sanciones simbólicas y pasa a buscar respaldo legal, la intolerancia cruza un umbral muy relevante. La ley, que debería funcionar como garantía mínima de la coexistencia entre divergentes, pasa a ser movilizada como instrumento de imposición moral: las posiciones intelectuales y las actitudes que consideramos deplorables se convierten en delito y dejan de tener derecho a existir.

Este desplazamiento se hizo particularmente visible cuando la Suprema Corte de Brasil pasó a encuadrar determinadas formas de discriminación y expresión en los tipos penales previstos en la Ley contra el Racismo, convirtiendo los conflictos normativos y morales en materia de persecución penal. También se manifiesta en iniciativas legislativas destinadas a criminalizar la llamada «desinformación», así como en propuestas aprobadas o en trámite que buscan tipificar penalmente la llamada «cristofobia», transformando las ofensas a los símbolos o creencias religiosas cristianas en materia de sanción penal. En ambos casos, el sistema penal pasa a actuar no solo para contener la violencia física, sino para regular los límites de lo aceptable en el plano de las ideas y las convicciones morales.

El resultado es el desplazamiento progresivo de la frontera entre lo que debe combatirse políticamente y lo que debe prohibirse jurídicamente, con efectos potencialmente duraderos sobre el pluralismo democrático. Nadie tiene que tolerar ya lo que le parece desagradable cuando lo que considera incorrecto se retira del ámbito de los desacuerdos morales y se convierte en un asunto policial o judicial. Las divergencias de valores, concepciones del mundo e interpretaciones controvertidas de

la realidad dejan de tratarse como materia de debate público y pasan a enmarcarse como ilícitos, desviaciones o amenazas que exigirían la intervención coercitiva del Estado. La intolerancia, en este punto, deja de ser solo cultural o política y pasa a aspirar a la estabilización jurídica.

Este movimiento se expresa en una furia legislativa transversal, en la que campos ideológicos opuestos compiten por ampliar el catálogo de lo intolerable. Un lado propone nuevos tipos penales para criminalizar los discursos considerados ofensivos o discriminatorios; el otro responde con leyes destinadas a proteger los valores religiosos, morales o identitarios propios. Cada campo busca quitarle el alcance a la divergencia pública legítima el máximo número posible de temas, convirtiendo en delito las ideas y actitudes que detesta, en nombre de la protección de los grupos vulnerables, del orden moral o de la supervivencia de la sociedad.

El problema no radica solo en la multiplicación de leyes, sino en la lógica que las mantiene. La expectativa implícita es que el Derecho haga lo que la política democrática ya no puede hacer: resolver conflictos morales profundos mediante la coerción. La disidencia deja de enfrentarse con argumentos, persuasión o convivencia y pasa a tratarse como una patología que debe reprimirse.

Este proceso se ve agravado por la actuación de los agentes del sistema judicial que, al interpretar de manera expansiva conceptos como discriminación, ofensa, discurso de odio o daño simbólico, pasan a tratar opiniones ampliamente difundidas, aunque controvertidas, como materia penal. Las tesis, interpretaciones o juicios morales se califican de ilícitos no por incitar a la violencia directa, sino por «sugerir», «reforzar» o «naturalizar» supuestos prejuicios.

Cuando la ley pasa a definir lo que no debe tolerarse en el ámbito de las ideas, la tolerancia política se reduce al mínimo posible. La divergencia se convierte en un asunto policial. La consecuencia paradójica es que, en lugar de proteger a las minorías o fortalecer la democracia, este movimiento tiende a criminalizar la opinión común, ampliando los resentimientos, reforzando las percepciones de persecución y alimentando narrativas autoritarias.

Además, la juridificación de la intolerancia —porque de eso se trata— deshace la propia legitimidad del Derecho. Cuando la ley se percibe como un instrumento de imposición moral de un campo ideológico sobre otro, pierde su carácter de norma común y pasa a ser vista como un arma política. Esto debilita la confianza institucional y estimula respuestas igualmente intolerantes por parte de los grupos que se sienten excluidos o criminalizados.

Por último, hay otro efecto menos visible, pero igualmente relevante: la transformación de la política en una experiencia moral agotadora. Cuando cada divergencia se trata como una batalla entre el bien y el mal, el espacio público se vuelve emocionalmente insostenible. Se instala el cansancio democrático. Muchos se alejan de la política no por apatía, sino por saturación moral. Este alejamiento deja el campo libre a los más intolerantes, reforzando el ciclo de radicalización.

Nada de esto significa que la democracia brasileña esté condenada o que la intolerancia sea irreversible. Pero indica que el problema no puede tratarse como un exceso ocasional, una hipérbole o una patología de un solo campo ideológico. Se trata de un patrón de funcionamiento político que, si no se aborda, compromete las bases normativas de la convivencia democrática.

Es precisamente a partir de este diagnóstico que se hace necesario retomar, de forma clara y sin ilusiones morales, la pregunta fundamental: ¿qué significa defender la democracia en un contexto de intolerancia generalizada? A esta cuestión se dedica la conclusión de este ensayo.

## **Democracia sin ilusiones morales**

La intolerancia política no es un accidente marginal de la vida democrática contemporánea. Se ha convertido en una forma recurrente de organizar conflictos, identidades y disputas morales en sociedades atravesadas por una intensa polarización, una inseguridad difusa y un descrédito institucional. En Brasil, este proceso ha adquirido rasgos

particularmente agudos, pero no excepcionales. Lo que se observa aquí forma parte de una dinámica más amplia, en la que la democracia se desgasta menos por los ataques frontales que por la corrosión cotidiana de sus supuestos normativos básicos.

---

***La intolerancia promete eficacia, pureza y victoria moral. La democracia ofrece algo menos vistoso, pero más duradero: la posibilidad de seguir conviviendo, incluso en desacuerdo.***

---

El más importante de estos supuestos es el pluralismo. La democracia no es el régimen de la unanimidad moral ni de la victoria definitiva del bien sobre el mal. Es, ante todo, un arreglo institucional que permite la convivencia entre personas y grupos que divergen entre sí. Esto im-

plica aceptar que personas y grupos con valores, creencias y visiones del mundo que rechazamos profundamente sigan existiendo políticamente, expresándose y disputando el poder. Cuando se pierde esta disposición, cuando se empieza a tratar al adversario como ilegítimo, la democracia comienza a desmoronarse.

La intolerancia desgasta precisamente este punto. Al transformar las divergencias en errores morales, al convertir los desacuerdos en amenazas existenciales y al sustituir la persuasión por el castigo, reconfigura la política como un tribunal moral permanente. En este escenario, poco importa si la exclusión se hace en nombre del orden, la tradición, la igualdad o la justicia social. El efecto democrático es siempre el mismo: el estrechamiento del espacio público, la normalización de la coerción y la deslegitimación del disenso.

Defender la democracia, en este contexto, exige abandonar cómodas ilusiones morales. La primera es que las buenas intenciones justifican los medios antidemocráticos. La segunda es que la intolerancia es siempre una reacción defensiva, nunca una elección activa. La tercera es que el pluralismo es un valor negociable, que debe suspenderse siempre que resulte inconveniente.



La democracia exige un criterio normativo simple, pero exigente: la reciprocidad. Reconocerle a los adversarios políticos —incluso aquellos cuyas ideas consideramos erróneas, ofensivas o peligrosas— el derecho a existir políticamente, a expresarse y a disputar el poder dentro de las reglas comunes. Este reconocimiento no implica estar de acuerdo ni complacencia. Solo implica aceptar que la coerción, la censura y la exclusión no pueden ser instrumentos habituales de la vida democrática.

En tiempos de polarización extrema, este compromiso puede parecer frágil, ingenuo o insuficiente. No lo es. Solo es difícil. Difícil porque exige contener los impulsos autoritarios que atraviesan los campos ideológicos; difícil porque impone límites a causas que consideramos justas; difícil porque nos obliga a convivir con ideas que rechazamos profundamente. Pero es precisamente esta dificultad la que define el valor de la democracia.

La intolerancia ofrece atajos seductores. Promete eficacia, pureza y victoria moral. La democracia ofrece algo menos vistoso, pero más duradero: la posibilidad de seguir conviviendo, incluso en desacuerdo. Cuando se pierde esa posibilidad, lo que ocupa su lugar no es la justicia perfecta, sino la imposición de unos sobre otros, hoy en nombre de una causa, mañana en nombre de otra.

Si la democracia brasileña quiere atravesar la actual ola autoritaria sin perder su esencia, necesitará recuperar esta lucidez elemental: no hay causa tan justa que autorice la suspensión del pluralismo. Defender la democracia hoy en día no es solo resistir a sus enemigos declarados, sino contener, en nosotros mismos y en nuestros campos políticos, la tentación de convertir la política en un tribunal moral permanente.

# Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en la era de Donald Trump: con una perspectiva histórica

*Arturo Valenzuela*

*Arturo Valenzuela es profesor emérito de Ciencias Políticas y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University, en Washington, D.C.*

Al regresar a la Presidencia de los Estados Unidos de América, en enero de 2025, Donald Trump comenzó a pensar en cómo podría vengarse por lo que consideraba el maltrato recibido cuando perdió la reelección en 2020 e intentó impedir la elección de Joseph Biden — incitando a un ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, día en que Biden fue proclamado presidente electo por Mike Pence, vicepresidente del propio Trump, en su calidad de presidente del Senado.

De vuelta en la Casa Blanca, Trump también buscaría vengarse de los miembros del poder judicial, que lo habían juzgado y condenado por varios actos de corrupción durante la administración Biden. Pero, sobre todo, comenzó a tomar medidas dejando claro que asumía la presidencia con un objetivo primordial: dismantelar el régimen democrático del país, cuya constitución se basa en los controles y contrapesos de sus instituciones. Su objetivo es marginar e ignorar al Congreso de los Estados Unidos, al Poder Judicial y, sobre todo, a las autoridades estatales.

Sin disimular su narcisismo patológico, Donald Trump buscaría, según sus propias declaraciones, consolidarse como el presidente más exitoso de

la historia de Estados Unidos. Para ello, adoptaría gestos extravagantes: incluir su nombre en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, transformar parte de la Casa Blanca en un salón dorado y criticar a las instituciones del Premio Nobel de la Paz por no haberlo elegido —, a pesar de que, según él, había resuelto múltiples conflictos en todo el mundo.

Inmediatamente después de su toma de posesión, el 20 de enero de 2025, comenzó a dismantelar organismos del Gobierno federal como la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), cuyos programas en todo el mundo prestaban apoyo a las poblaciones vulnerables. Hizo lo mismo con la NED (Fundación Nacional para la Democracia, que apoya la democracia en diversos países) y con otros programas del Departamento de Estado y de ministerios dedicados a la Educación, la Salud Pública y el apoyo a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales.

Por su determinación, Estados Unidos también se retiró de organizaciones internacionales como la UNESCO y anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Además, dejó de pagar parte de las contribuciones adeudadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo responsable de la mayor parte de los importes atrasados —estimados recientemente en alrededor del 95 % de las contribuciones pendientes al presupuesto ordinario de la organización—.

Trump entra en conflicto con los aliados de EE. UU. en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), acusándolos de no cumplir el artículo 5 del tratado, que exige que los países defiendan a un miembro que sea atacado. Esto es falso, ya que fueron los países de la OTAN los que apoyaron a EE. UU. en Afganistán tras el ataque sufrido el 11 de septiembre de 2001, cuando el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, y el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, fueron atacados por Al-Qaeda, el grupo terrorista islámico.

Posteriormente, en marzo de 2026, cuando Estados Unidos lanzó el primer ataque contra Irán, Trump acusó a la OTAN de mantenerse al margen del conflicto, a pesar de que Estados Unidos no había consultado a sus aliados antes de iniciar la guerra junto a Israel. Al mismo

tiempo, sigue descuidando un acuerdo viable para la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de que se jactó públicamente de que su cercanía con Vladimir Putin resolvería el conflicto.

Aparentemente, sin que él se dé cuenta o lo admita, la política internacional de EE. UU. liderada por Trump está claramente animando a potencias como Rusia y China a recurrir a un conflicto bélico para expandir su poder en regiones del mundo donde creen tener soberanía, especialmente cuando Trump insiste en que le corresponde intervenir en los asuntos internos de los países de América.

En América del Norte, proclama que corresponde a Estados Unidos ejercer soberanía sobre Canadá, país que debería convertirse en un estado más de EE. UU. Afirmó que Groenlandia también debería ser propiedad de EE. UU. y no un territorio autónomo integrante del Reino de Dinamarca.

En América Latina, también ha manifestado ambiciones imperialistas. El Golfo de México debería pasar a llamarse Golfo de América, es decir, de EE. UU. Además, declaró que debería implementarse en las Américas una nueva versión de la Doctrina Monroe <sup>1</sup>, que se llamaría «Doctrina Donroe» en su propio honor, añadiendo, en relación con los países del continente, que «nosotros no los necesitamos, son ellos los que nos necesitan a nosotros».

De ahí surge su agenda para el continente:

Recuperar el Canal de Panamá, lanzar ataques militares contra el tráfico de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico. Capturar al presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, y detenerlo en EE. UU. Castigar a Brasil, cuyos tribunales sancionaron al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por insistir, al igual que él, en que había ganado unas elecciones que, de hecho, perdió.

Además, Trump entró en conflicto con «países de izquierda» como Brasil y Colombia, comprometidos con la adopción de medidas para mitigar el cambio climático. Por otro lado, apoya a aliados de extrema derecha como el salvadoreño Nayib Bukele y, sobre todo, al argentino Javier Milei, quien recibió de EE. UU. un apoyo financiero significativo.

En Estados Unidos, Trump ha emprendido una política antimigratoria que perjudica a muchos residentes de origen latinoamericano y a sus familiares que reciben ayuda financiera en sus respectivos países, política que también envía a extranjeros residentes en Estados Unidos a prisiones en países como El Salvador.

Con la captura de Maduro, tampoco hubo claridad sobre lo que vendría a continuación en Venezuela. En lugar de buscar cómo transferir el poder al candidato elegido presidente el 28 de julio de 2024 —en unas elecciones que Maduro fraudó de manera demostrada—, candidato que las autoridades internacionales, incluidas las estadounidenses, **respaldaron**—, Trump prefirió negociar con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

Su aparente intención: persuadir al régimen chavista, mantenido en gran medida en el poder tras la intervención de Trump, para que entregara recursos petroleros de Venezuela a EE. UU., en una maniobra que podría beneficiar económicamente a los aliados de Trump o a su propia familia, como ya se ha visto en otras partes del mundo.

## La Doctrina Monroe

Para aclarar los antecedentes históricos, es importante no permitir que Trump interprete la Doctrina Monroe y sus corolarios como la intención de Estados Unidos de establecer su dominio sobre las Américas. También es indispensable no ignorar lo que Trump está diciendo y haciendo al pasar por alto por completo el papel fundamental que desempeñaron las naciones sud oamericanas y centroamericanas, como repúblicas independientes, en la creación de la arquitectura institucional del mundo de la posguerra, junto a Estados Unidos y no como adversarios.

Para ello, es necesario describir brevemente el panorama hemisférico que se desarrolló desde las guerras de independencia en el siglo 18 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, dos siglos después, con la creación de un nuevo orden internacional que surgió de las Américas.

La rebelión de las colonias inglesas en América del Norte inspiró los futuros movimientos de independencia en América del Sur. La Constitución de Filadelfia, ratificada en 1790, sirvió de modelo para los líderes que, unas décadas más tarde, redactarían constituciones en las nuevas repúblicas iberoamericanas, en un mundo aún dominado por monarquías y grandes imperios. En 1808, la invasión de Napoleón Bonaparte a España obligó a la abdicación de Fernando VII y debilitó la autoridad española, creando un vacío de poder que estimuló movimientos de resistencia, como los gritos de «Viva el Rey, muerte al mal gobierno», y aceleró los procesos de independencia en las colonias iberoamericanas a principios del siglo 19.

En Estados Unidos, fue el secretario de Estado John Quincy Adams quien comprendió la importancia de apoyar a otras repúblicas independientes de América para preservar también la independencia de Estados Unidos, y no para intentar conquistarlas. Convenció al presidente James Monroe de que era necesario defender a las repúblicas amenazadas por las monarquías europeas, lo que dio lugar a la Doctrina Monroe.

Al igual que Estados Unidos, las antiguas colonias ibéricas lograron resistir los ataques de las guerras de reconquista. Con ello, se creó un grupo único en el mundo, constituido por naciones independientes, que al mismo tiempo eran repúblicas basadas en el concepto político de la soberanía popular. Fue el propio Simón Bolívar quien invitó a EE. UU. al Congreso Anfictónico de Panamá (1826), donde se firmó una alianza para resistir la reconquista de las antiguas colonias por parte de España tras la restauración e e del rey Fernando VII, en 1814.

Por su parte, Estados Unidos no buscaba, en aquella época, el dominio sobre otras naciones independientes, sino su propia defensa ante el intento del Reino de Gran Bretaña de recuperar la colonia al otro lado del Atlántico.

Es cierto que, a mediados del siglo 19, Estados Unidos incorporó más de la mitad del territorio mexicano —desde Texas hasta California— y que, a principios del siglo 20, apoyó la independencia de Panamá de la República de Colombia. Durante la crisis del bloqueo naval de

Venezuela (1902-1903), el entonces presidente Theodore Roosevelt creó el «Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe» para impedir que Venezuela fuera víctima de una intervención europea.<sup>2</sup>

Sin embargo, hay que destacar que, aunque las dimensiones sean diferentes, la construcción del «gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo», en la famosa frase de Lincoln<sup>3</sup>, no fue un proceso totalmente concretado, tanto en América Latina como en América del Norte. Desde sus orígenes, el voto no fue universal, y la continuidad constitucional también se vio amenazada por conflictos regionales o guerras civiles. A finales del siglo 19 y principios del 20, las democracias oligárquicas comenzaron a expandirse en varios países iberoamericanos. Estados Unidos también intervino en los asuntos internos de otras naciones del continente para defender sus intereses, hasta que el presidente Franklin Roosevelt, en 1933, inauguró su política de «buena vecindad»<sup>4</sup>.

Lo que a menudo se olvida es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, los países de América eran repúblicas independientes que desempeñaron un papel fundamental en la creación del nuevo orden internacional de la posguerra, liderado por los Estados Unidos de América.

En la conferencia celebrada en julio de 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, donde se crearon el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), 18 de las 44 naciones signatarias del documento, es decir, el 40 %, eran repúblicas latinoamericanas.

Lo mismo ocurrió en 1945, en San Francisco, cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 50 naciones, entre las que figuraban unas 20 repúblicas latinoamericanas. Este significativo bloque regional fue fundamental para consolidar la influencia del hemisferio occidental en el nuevo orden mundial de la posguerra.

Estas instituciones multilaterales creadas en 1944 y 1945 y, poco después, la Organización de los Estados Americanos (OEA, fundada en 1948) y la OTAN (1949) contribuyeron de manera significativa a una mayor estabilidad internacional en la segunda mitad del siglo 20.

## **Retos de la democracia en el siglo 21**

A partir de la segunda mitad de la década de 1980, la mayoría de los países latinoamericanos que vivían bajo regímenes militares se convirtieron en democracias. El continente vive, desde entonces, el período más largo de continuidad constitucional de su historia, pero, lamentablemente, no podemos afirmar que la tan esperada estabilidad institucional se haya alcanzado finalmente.

Desde mediados de la década de 1980, más de veinte presidentes latinoamericanos no han logrado completar sus mandatos. A pesar de la erradicación de la pobreza extrema en algunos países del continente, entre ellos Brasil, el malestar social se ha ido agravando en algunos países donde sectores de la clase media emergente se enfrentan a obstáculos para avanzar en su ascenso social y se ven confrontados a altos grados de vulnerabilidad ante las oscilaciones de los ciclos económicos.

En Chile, por ejemplo, una de las democracias más exitosas desde el punto de vista del crecimiento económico en las últimas décadas, se produjo el «Estallido Social», una ola de protestas masivas y violentas que estalló en Santiago en octubre de 2019, desencadenada por un aumento de las tarifas del metro, pero que rápidamente se transformó en una revuelta nacional contra la desigualdad social, el alto coste de la vida y el modelo económico del país. Desde entonces, el país vive un periodo de relativa inestabilidad política, aunque la democracia sigue vigente.

Al igual que en Estados Unidos, el reciente esfuerzo de una minoría de origen anglosajón por limitar o privar a los inmigrantes o a los afroamericanos de sus derechos políticos, en particular de sus derechos electorales, ha provocado una movilización popular que no se veía desde la época de la aprobación de las Leyes de Derechos Civiles (1964-65) y de la oposición a la guerra de Vietnam (1964-1973).

En esta tercera década del siglo 21, nos enfrentamos sin duda a complejos retos sociales y situaciones de crisis que exigen el fortalecimiento de la democracia como sistema político en el continente. Los procesos



constituyentes o de reforma constitucional bien llevados a cabo son una contribución fundamental para alcanzar ese objetivo. Esto se aplica en gran medida a Estados Unidos, donde Donald Trump sigue amenazando el proceso democrático, lo que también pone en peligro la estabilidad democrática en otras repúblicas de las Américas.

## Notas

- 1 La Doctrina Monroe fue una de las piedras angulares de la política exterior de Estados Unidos en los siglos 19 y 20, sintetizada en la famosa frase: «América para los estadounidenses». Fue presentada por el presidente James Monroe en su séptimo discurso anual ante el Congreso, el 2 de diciembre de 1823 (N.E).
- 2 El episodio al que se hace referencia fue la crisis del bloqueo naval de Venezuela (1902-1903), cuando el Reino Unido, Alemania e Italia enviaron buques de guerra para bombardear puertos y confiscar embarcaciones venezolanas con el fin de cobrar las deudas externas. Ante el riesgo de que el control de esos puertos se convirtiera en una colonización europea encubierta, el presidente Theodore Roosevelt actuó como mediador para forzar la retirada de las flotas extranjeras. Poco después, en 1904, formalizó el «Corolario de Roosevelt», estableciendo que Estados Unidos intervendría de forma preventiva en naciones latinoamericanas inestables para garantizar el orden e impedir que potencias extracontinentales tuvieran pretexto para violar la Doctrina Monroe (N.E).
- 3 La frase que define la democracia como el «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» fue immortalizada por Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Fue el punto central de su discurso de Gettysburg, pronunciado el 19 de noviembre de 1863, durante la Guerra Civil estadounidense (N.E).
- 4 La Política de Buena Vecindad, basada en los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, fue lanzada por Franklin D. Roosevelt en 1933.

# Los peligros reales de la IA para la democracia

*Dean Jackson y Samuel Woolley*

*Dean Jackson es miembro no residente del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council y director de Public Circle, LLC, una consultora de investigación centrada en la democracia, la tecnología y los medios de comunicación. Samuel Woolley es profesor asociado de Comunicación y ocupa la cátedra William S. Dietrich II en Estudios sobre Desinformación en la Pittsburgh University.*

**E**l año 2024 comenzó con predicciones de que una ola de desinformación y noticias falsas impulsadas por la inteligencia artificial (IA) pronto se convertiría en la mayor amenaza para la estabilidad mundial.<sup>1</sup> Los expertos afirmaron que se venían meses de «elecciones por IA», a medida que campañas, publicistas y personas con motivaciones políticas de todo el mundo experimentaban con la IA.

De hecho, surgieron esfuerzos de influencia impulsados por la IA. Los chatbots imitaron a políticos en línea y las campañas utilizaron avatares animados para rehabilitar la imagen pública de sus candidatos. Las candidatas fueron víctimas de imágenes íntimas no consentidas generadas por IA. Las redes sociales se vieron inundadas de periódicos falsos llenos de «lodo rosa» generado por IA. Las campañas y los operadores políticos hicieron uso de marcadores automáticos y disparadores de mensajes de texto impulsados por IA. Los videos sintéticos resucitaron a líderes nacionales para apoyar candidaturas.

Sin embargo, en enero de 2025, era difícil decir si todo esto había sido una explosión o un gemido. A pesar de las advertencias sobre imágenes falsas indetectables generadas por IA destinadas a engañar a los votantes, los acontecimientos dieron la razón a quienes argumentaban que la capacidad de proliferar contenido de forma rápida y barata no ayudaría de manera significativa a los propagandistas.<sup>2</sup> La IA generativa facilitó la producción de contenido engañoso, pero el volumen en sí tiene un valor limitado en una Internet ya saturada, y no se necesita sofisticación técnica para persuadir a las personas de cosas en las que ya creen. Parece probable que los temores preexistentes sobre las redes sociales y la desinformación se estén proyectando, a menudo de forma equivocada o sin pruebas empíricas, sobre la IA generativa. Sin embargo, la IA generativa parece estar impulsando un cambio lento pero constante en la forma en que se crea y difunde la comunicación política entre bastidores. Los activistas electorales de hoy en día están probando sistemas de IA para mejorar sus análisis de datos y mensajes dirigidos.<sup>3</sup> Esto podría conducir a una segmentación más refinada (por ejemplo, de votantes indecisos) en los próximos años.

Pasada la urgencia de ese importante año electoral, ahora podemos reflexionar más profundamente sobre los riesgos a largo plazo de las comunicaciones políticas impulsadas por IA, riesgos que son graves, pero que están a años o décadas de distancia, y no a semanas o meses. Esto incluye amenazas a la democracia que se derivan directamente de la forma en que las sociedades eligen desarrollar e implementar la IA. Estos temores son distintos de las advertencias sobre los riesgos existenciales para la humanidad, la IA «fuera de control» o la llegada de la inteligencia artificial general (AGI, un término vago que OpenAI utiliza para referirse a «sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en la mayoría de las actividades económicas»<sup>4</sup>).

Muchos seguirán centrándose en estos riesgos, que son reales, pero también suelen ser objeto de sensacionalismo (que atrae visitas y clics). También hay que prestar atención a los cambios más graduales y menos dramáticos. Al igual que una conducción segura, una gobernanza segura de

la IA requiere que seamos conscientes simultáneamente de varios riesgos en varias líneas temporales: tanto el coche que va delante como la larga curva en descenso más adelante. En la lucha mundial contra la desinformación, se ha necesitado un esfuerzo colectivo y tiempo para determinar qué preocupaciones son exageradas y cuáles están subestimadas. Esto también se aplica a quienes imaginan un mundo en el que la IA y la democracia coexisten.

En septiembre de 2023, los tecnólogos Bruce Schneier y Nathan Sanders describieron tres «facciones profundamente divididas» que luchaban por decidir la política de IA.<sup>5</sup> La primera facción, a la que llamaron «catastrofistas», temía un futuro en el que sistemas de IA incontrolables esclavizaran o incluso destruyeran a la humanidad. Un segundo grupo, los «guerreros», preveía una carrera de suma cero entre los Estados-nación para desarrollar y controlar la IA, en la que el ganador alcanzaría el liderazgo mundial durante el resto de este siglo y quizás más allá.

La tercera facción, a la que Schneier y Sanders llamaron «reformistas», quería impedir las amenazas a los derechos que, en su opinión, supondría la adopción irresponsable de la IA, pero centrándose en el corto plazo. Ya hay muchos ejemplos de violaciones de derechos algorítmicas e impulsadas por la IA en todo el mundo: los prejuicios raciales incorporados en los algoritmos de sentencias penales provocan resultados desiguales en los sistemas judiciales; los algoritmos antifraude y otros algoritmos discriminatorios han impedido erróneamente que las personas reciban prestaciones sociales; y un algoritmo utilizado para calificar las evaluaciones escolares en el Reino Unido ha reducido las calificaciones de los estudiantes de clase trabajadora y ha impedido que muchos de ellos ingresen a la universidad.

---

***Muchos «guerreros» de la IA están trabajando abiertamente por un mundo en el que la IA sustituya gran parte de la infraestructura que hace funcionar la democracia contemporánea. Algunos nombres de Silicon Valley llegan incluso a argumentar que la era de la democracia ya ha pasado y están resucitando ideas antes despreciadas de tecnocracia.***

---

Durante años, los gobiernos han utilizado computadoras para tomar decisiones sobre solicitudes de reembolso de gastos médicos, investigaciones realizadas por organismos de protección infantil y asistencia para la vivienda. Los grandes modelos de lenguaje (o LLM, el software que hay detrás de servicios como ChatGPT) harán que esta práctica sea más opaca y generalizada. A medida que se extienda el uso de la IA, será cada vez más difícil detectar y corregir las injusticias que automatizará en un número cada vez más grande de ámbitos. También es preocupante que la IA se esté implementando, incluso por parte de los gobiernos, cuando aún es muy rudimentaria y no cuenta con suficiente verificación o moderación.<sup>6</sup> Esto causará problemas aún más graves y difíciles de detectar.

La desigualdad y la exclusión social son, obviamente, muy anteriores a la IA, pero la tecnología puede dar nueva fuerza y alcance a males antiguos: pensemos en lo mucho que la industria ha contribuido a aumentar la letalidad y el potencial destructivo de la guerra. Además, la tecnología desarrollada para un fin determinado a menudo puede utilizarse para otro. En China y Estados Unidos, por ejemplo, los datos recopilados de las redes sociales, los lectores de matrículas, las cámaras de reconocimiento facial, los registros gubernamentales y otras fuentes se recopilaron inicialmente para su uso en materia de seguridad pública y lucha contra el terrorismo, antes de contribuir a nuevas formas de vigilancia predictiva.<sup>7</sup> Esta usurpación y la existencia de este panóptico alimentado por la IA producen un efecto inhibitorio sobre la actividad política.

## **Las decisiones de hoy darán forma al mañana**

Aunque comprendemos las preocupaciones inmediatas de los reformadores, queremos llamar la atención sobre las formas en que, a largo plazo, la IA podría presionar, o incluso sacudir, los cimientos de los sistemas políticos democráticos de todo el mundo. El primer paso hacia la sabiduría es dejar de lado el tecnodeterminismo: en la construcción

del futuro, la agencia humana es importante. Los responsables políticos y los líderes empresariales de hoy están eligiendo cómo se desarrollará y utilizará la IA en las sociedades de todo el mundo en las próximas décadas. En otras palabras, la IA es un ejemplo de «tecnología normal» cuyo impacto vendrá determinado por los aceleradores y las barreras de protección creados y definidos por los seres humanos.<sup>8</sup>

¿Y si, en las próximas dos décadas, las preocupaciones sobre una IA descontrolada no se materializan, sino que, en cambio, el lobby de la industria y la presión de la competencia entre las grandes potencias conducen a la adopción de una IA con poca regulación?<sup>9</sup> La tecnología podría cambiar los procesos, las instituciones y las condiciones socioeconómicas que han permitido que la democracia prospere durante la mayor parte del siglo pasado. Muchos «guerreros» de la IA están trabajando abiertamente por un mundo en el que la IA sustituya gran parte de la infraestructura que hace funcionar la democracia contemporánea. Algunos nombres de Silicon Valley llegan incluso a argumentar que la era de la democracia ya ha pasado y están resucitando ideas antes despreciadas de tecnocracia.<sup>10</sup> Como advierte el politólogo Henry Farrell, la carrera por la superinteligencia humana está llevando a actores poderosos, cuyos intereses materiales e ideológicos son hostiles a la democracia, a promover sistemas de IA como sustitutos de las funciones que desempeñan los gobiernos.<sup>11</sup>

Si el actual auge de la IA conduce a su adopción sin la suficiente reflexión, prevemos tres tendencias, cada una de estas perjudicial para la democracia. En primer lugar, los esfuerzos respaldados por la IA para simplificar o incluso sustituir la comunicación política entre las autoridades políticas (actuales y aspirantes) y el público romperán el ciclo de retroalimentación entre gobernantes y gobernados, que es el núcleo de la democracia representativa. En segundo lugar, la IA exacerbará las concentraciones existentes de riqueza y poder y convertirá la democracia en un simulacro vacío. En tercer lugar, la consolidación a gran escala de la información por parte de los LLM, junto con la capacidad de la IA generativa para apropiarse y eclipsar los trabajos originales generados

por humanos, tendrá consecuencias económicas para las ya escasas fuentes de noticias e información fiables. La actual crisis epistémica se agravará, mientras que el sector tecnológico obtiene un control aún mayor sobre la información y el debate público.

La representación popular y las elecciones no siempre han sido sinónimos de democracia. En la antigua Atenas, los ciudadanos eran elegidos al azar para la Asamblea, y los fundadores de los Estados Unidos mantenían una distinción entre la república representativa que crearon y la democracia «pura». Hoy en día, sin embargo, los términos son ampliamente intercambiables.

Esto nubla la complejidad de los procesos mediante los cuales el gobierno representativo traduce la voluntad popular en políticas. Estos procesos son a menudo arcaicos, imperfectos y frustrantes. Los cambios técnicos en el diseño de los distritos y el recuento de votos pueden alterar significativamente los resultados, haciendo que los partidos crezcan o disminuyan en número y que los políticos se vuelvan más o menos propensos a la polarización, por ejemplo. La dependencia de las elecciones —a menudo con baja participación— para reunir las opiniones de ciudadanos con niveles muy variados de conocimiento político y educación ha desanimado durante mucho tiempo a muchos observadores. El debate político a menudo parece infructuoso e incluso tóxico.

Los tecnólogos ofrecen la IA como un medio para mejorar los procesos democráticos, como las campañas políticas, los servicios a los votantes y las encuestas de opinión.<sup>12</sup> En 2024, por ejemplo, un candidato a la Asamblea General de Pensilvania utilizó un robot de llamadas automáticas con IA, cuyo creador imaginó que las autoridades estatales y locales podrían algún día utilizar estos chatbots para recopilar y analizar las opiniones de los votantes.<sup>13</sup> Hoy en día, las autoridades estadounidenses están empezando a utilizar la IA para examinar contratos, detectar fraudes y tratar con los beneficiarios de los servicios públicos. El ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, llegó a predecir que la IA transformará fundamentalmente el gobierno, impregnando los procesos legislativos y judiciales.<sup>14</sup>



Los comentarios públicos, una parte importante del proceso regulatorio de EE. UU., ya están siendo manipulados por contenido generado por computadora. En 2017, por ejemplo, una convocatoria pública de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre la derogación de la «neutralidad de la red» recibió 22 millones de respuestas, de las cuales aproximadamente un tercio fueron identificadas como cuentas automatizadas creadas por empresas de telecomunicaciones, mientras que otro tercio procedía de un solo estudiante de informática. La IA generativa hace que este tipo de manipulación sea mucho más fácil de escalar y perfeccionar. El Congreso elaboró una «Ley de Integridad y Gestión de Comentarios» para abordar esta cuestión en 2024, pero aún no se ha aprobado.<sup>15</sup> Algunos observadores prevén que a futuro los investigadores utilizarán la IA para hacer inferencias con el fin de compensar la disminución de las tasas de respuesta a las encuestas, sustituyendo a los votantes reales por votantes hipotéticos.

En un sentido más profundo, las encuestas y los modelos formales no ofrecen ninguno de los beneficios de la deliberación, que la ciencia política y cognitiva considera esencial para la toma de decisiones en grupo. La deliberación es fundamental tanto para el debate público como para los procesos legislativos. A través de ella, las personas desafían los prejuicios, cuestionan las suposiciones, solicitan información y llegan a un consenso, alcanzando conclusiones más defendibles y decisiones más duraderas. Cuando una serie de experimentos de campo reunió a 500 votantes estadounidenses para debatir cuestiones políticas controvertidas, desde la salud hasta la inmigración, sus opiniones políticas se acercaron y se volvieron menos hostiles hacia los miembros del partido político contrario.<sup>16</sup>

Es razonable esperar que conclusiones similares se apliquen a los legisladores: cuanto más dependen de los datos para formar su posición, más rígida se vuelve su postura y más polarizada se vuelve la legislatura. Los políticos que dependen de los datos de las encuestas también tienen menos incentivos para hacer concesiones y son más propensos a confiar en mensajes «dirigidos» que se dirigen a grupos específicos de votantes

interesados en cuestiones divisivas.<sup>17</sup> El resultado es una comunicación política más parecida a consignas gritadas por un megáfono que a un diálogo o debate reflexivo.

En *La idea de justicia*, el economista Amartya Sen describe la democracia como el proceso de razonamiento público que permite que coexistan perspectivas conflictivas bajo una gobernanza compartida.<sup>18</sup> Los intentos de sustituir este proceso por la IA reflejan un impulso tan antiguo como la *República* de Platón: la esperanza de que el conocimiento técnico perfecto pueda sustituir a los procesos deliberativos, que son lentos, frustrantes y casi nunca totalmente satisfactorios. Sin embargo, estos procesos han perdurado durante siglos, sobreviviendo a muchos rivales. Tienen éxito precisamente porque son lentos y deliberativos. No pueden ser eludidos ni sustituidos por el poder de la computación. Hacerlo los convertiría en antidemocráticos.

## **Desigualdad, tecnocracia y oligarquía**

El segundo riesgo que prevemos como consecuencia del uso irrestricto de la IA es una erosión más rápida de la democracia debido al aumento de las disparidades económicas. No se trata de una tendencia nueva, pero la IA puede agravarla: los estudiosos coinciden en que los avances de la tecnología de la información a finales del siglo pasado alimentaron una mayor desigualdad y esperan que avances como la IA hagan lo mismo en este siglo.<sup>19</sup> Los cambios previstos para los mercados laborales son dramáticos. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, cree que la IA podría sustituir la mitad de todos los empleos de cuello blanco de nivel inicial en un plazo de cinco años. Al menos una *startup*, Mechanize, afirma que su misión principal es automatizar el trabajo administrativo lo antes posible. Un titular reciente afirmaba que el mundo pronto podría ver su primera empresa multimillonaria con un solo empleado humano.

Estudios recientes sostienen que la desigualdad, ya sea de riqueza o de ingresos, es un fuerte indicador del declive y el colapso de la democracia, incluso en las democracias más antiguas, porque impulsa tendencias negativas como la desconfianza, la polarización, el cinismo y el populismo autocrático.<sup>20</sup> La mayoría de los análisis se centran en estos factores más amplios, mientras que otra perspectiva común de investigación examina cómo los cambios en los mercados laborales afectan a factores como las diferencias salariales, el acceso a la educación y la participación cívica y social. En un artículo publicado en *el Journal of Democracy*, Stephanie Bell y Anton Korinek sugieren que, si la IA amplía la brecha entre ricos y pobres, las democracias podrían degenerar en sistemas oligárquicos corruptos que, en un círculo vicioso, podrían generar reacciones populistas más profundas entre los ciudadanos frustrados con las élites insulares e injustas.<sup>21</sup>

Los gobiernos son proclives a ser capturados por grupos e individuos con muchos recursos, y los multimillonarios de la tecnología tienen muchos recursos. Es posible que quieran mantener las apariencias de la democracia y algunas de sus características precisamente porque un autócrata poderoso amenazaría su propia independencia. Sin embargo, los actuales evangelistas antidemocráticos y ultraricos de la IA van más allá: mientras que los oligarcas de la vieja guardia querían capturar el Estado, los nuevos promotores de la IA quieren suplantarlo por completo.

No es casualidad que algunos de los ejecutivos tecnológicos más ricos del mundo sean ideológicamente contrarios al gobierno representativo y apasionados por una tecnología que promete sustituir a las personas —y sus confusas demandas de justicia— por software. De hecho, algunos teóricos esperan precisamente ese resultado, a medida que aumenta la enorme diferencia entre los históricamente ricos del mundo y todos los demás. La democracia en un sistema capitalista es posible porque las élites ricas en capital valoran una fuerza laboral lo suficientemente instruida como para tolerar las demandas de redistribución que esta hará; el poder de negociación de los trabajadores y la participación en organizaciones como los sindicatos refuerzan aún más el sistema.

¿Qué sucede cuando las élites creen que la IA puede sustituir a estos trabajadores humanos?

La creciente desigualdad de ingresos y los avances tecnológicos están cambiando estos precursores estructurales de la democracia. Hoy en día, los magnates de la tecnología ven un futuro en el que la IA aumenta el rendimiento del capital, sustituye a los trabajadores cualificados por máquinas y debilita aún más el poder de negociación de la mano de obra, que ya está disminuido. En otras palabras, esperan que el público y sus inconvenientes demandas de servicios gubernamentales y justicia social se vuelvan irrelevantes.<sup>22</sup>

Si todo esto es profundamente inquietante, considere un último peligro: la sustitución de la democracia por una alternativa sintética probablemente solo conducirá a una mayor desigualdad y concentración de poder, creando un círculo vicioso en el que el declive democrático y la desigualdad se refuerzan mutuamente. En el peor de los casos, se necesitaría un colapso económico o un conflicto civil para romper este ciclo.

## **Los reyes de la selva de la información**

El tercer desafío que prevemos es que el panorama de la información, ya inestable debido al auge de las redes sociales y los cambios en respuesta a la IA generativa, pueda transformarse de maneras que hagan que la democracia sea menos sostenible. Esta previsión se basa en dos tendencias: en primer lugar, las fuentes importantes de información, desde los periódicos de referencia hasta los medios digitales, ya están enfrentando dificultades económicas, ya que los LLM desvían el tráfico web y reducen una fuente de ingresos que las redes sociales llevan años absorbiendo. En segundo lugar, a medida que los LLM se convierten en un punto de partida más común para los consumidores que buscan información, un pequeño número de actores del sector tecnológico ganará más control sobre el debate y la opinión públicos.

A pesar de las experiencias válidas en el uso de la IA para complementar la cobertura periodística, la actividad periodística humana ofrece beneficios que la IA no puede sustituir. Como ha señalado la investigadora de medios Courtney Radsch, la IA no va a entrevistar a testigos de acontecimientos noticiosos.<sup>23</sup> Los matices y el instinto profundamente contextuales y humanos que aportan los reporteros no son algo que podamos obtener de una máquina.

Actualmente, en las redacciones, la IA se utiliza a menudo para producir contenido de baja calidad («churnalismo»\*), que consiste en declaraciones oficiales ligeramente editadas o sin editar, boletines policiales, resultados deportivos o comunicados de prensa de agencias de relaciones públicas. No se trata de reportajes con fuentes, sino de reportajes deshumanizados mediante variables seleccionadas por procesos computacionales en constante evolución. Sin embargo, estos procesos están determinados por códigos de programación, etiquetado de datos y contenido generado por personas, cuyos prejuicios y deseos a menudo se incorporan al resultado de formas opacas y preocupantes. El carácter oculto del papel humano en estas actividades da a muchos la impresión errónea de que la IA y los algoritmos, ya sean orientados a las noticias o no, son de alguna manera más «objetivos» que la toma de decisiones humana. En realidad, pueden ser más defectuosos y estar menos basados en fuentes fiables y debidamente citadas que el contenido supervisado por editores humanos tradicionales que siguen normas claras de periodismo ético.

Si la ya precaria situación económica de la industria periodística sigue empeorando, las tareas de responsabilizar a las autoridades y ayudar a dar sentido a los acontecimientos pueden quedar en manos de nadie, ya que solo los humanos pueden llevarlas a cabo. Desde Wikipedia hasta las redacciones, los profesionales del conocimiento están preocupados por el hecho de que los LLM están sobrecargando

---

\* Expresión que combina periodismo con *churn out*, expresión en inglés que significa producir algo en gran cantidad, de forma rápida y sin mucha calidad ni cuidado. (N. T.)

sus sitios web con rastreadores de páginas web, copiando su contenido y reduciendo el tráfico de las búsquedas en Internet.<sup>24</sup> Los resúmenes de noticias generados por IA también pueden disminuir la demanda de los consumidores de suscripciones a periódicos y sitios web, lo que reduce aún más los ingresos. A medida que disminuyen las fuentes de información fiables y verificadas —entrenadas por LLM, aunque estas reduzcan el tráfico—, los consumidores de noticias tendrán menos fuentes de información sobre acontecimientos recientes y, especialmente, locales. Internet ya está inundado de contenido inútil, y la IA amenaza con empeorar aún más la situación.

Esta preocupación es el núcleo de una demanda presentada por la empresa de tecnología educativa Chegg contra Google. El caso de Chegg es un proceso antimonopolio que alega que menos usuarios visitan el sitio web de Chegg porque Google coloca sus propios resúmenes generados por IA en los primeros puestos de los resultados de búsqueda. Otro proceso muestra cómo los principales medios de comunicación aún pueden sobrevivir: el *New York Times* está demandando a OpenAI, creador de ChatGPT, por utilizar el contenido del periódico para entrenar este modelo y por la capacidad del modelo (cuando se le solicita) de reproducir contenido de dicho periódico.<sup>25</sup> Muchos esperan que el caso termine en un acuerdo en el que OpenAI pague por el acceso al material del periódico. Mientras tanto, las editoriales y los medios locales que no cuentan con la influencia y los recursos del *New York Times* corren el riesgo de quedar marginados.

Irónicamente, el empobrecimiento de los editores web también amenaza el desarrollo futuro de la IA, lo que da lugar a un callejón sin salida en la autopista de la información. Los LLM actuales se han entrenado con billones de palabras y, para que los avances mantengan el ritmo de mejora establecido hasta ahora, la IA necesitará una cantidad exponencialmente más grande de datos. ¿De dónde vendrán esos vastos océanos de datos?

Algunos observadores han sugerido que la próxima generación de LLM podría entrenarse con datos sintéticos; en resumen, las máquinas producirían contenido que entrenaría a otras máquinas. Pero

¿y si el contenido producido por humanos es difícil de sustituir? Algunos investigadores sugieren que los sistemas de IA entrenados con datos sintéticos producidos por máquinas tienden a converger hacia la media con el tiempo, en un proceso denominado «colapso del modelo»: cuando los modelos construidos a partir de agregados estadísticos se superponen entre sí, sus resultados pueden volverse más homogéneos.<sup>26</sup> Otros investigadores esperan que los llamados modelos de razonamiento produzcan resultados más perspicaces sin necesidad de un volumen exponencialmente mayor de datos de entrenamiento, pero un nuevo artículo de investigadores de Apple sugiere que estos modelos piensan demasiado en problemas simples y se rinden rápidamente ante los complejos.<sup>27</sup>

Si los LLM se convierten en una fuente importante o incluso principal de noticias e información, podrían profundizar la ya preocupante capacidad de las empresas tecnológicas para actuar como guardianas de la información y formadoras de opinión. Actualmente, Google, Facebook, TikTok y Twitter deciden qué contenido creado por los usuarios ven miles de millones de personas. Sin embargo, al menos estos servicios transmiten (en la mayoría de los casos) contenido real creado por seres humanos reales. La IA generativa, por otro lado, crea su propio contenido mediante complejas combinaciones de solicitudes de los usuarios, decisiones tomadas durante el entrenamiento del modelo y salvaguardias e instrucciones que las empresas añaden al preparar los modelos para su uso por parte de los consumidores. Si los chatbots de IA comienzan a proporcionar gran parte de los medios de comunicación que utiliza la gente, la influencia de los ejecutivos tecnológicos en el debate público será aún mayor y menos transparente.

No se puede confiar a unos pocos magnates, con sus propios intereses económicos y políticos, un mayor poder sobre el flujo de información. Los recientes incidentes en los que el chatbot de IA Grok, de Elon Musk, respondió a las preguntas de los usuarios con teorías conspirativas irrelevantes sobre el genocidio blanco en Sudáfrica y una avalancha de publicaciones antisemitas demuestran el riesgo de que estos sistemas

puedan utilizarse para la manipulación política.<sup>28</sup> En China, peligros similares son evidentes en la negativa del modelo chino de IA DeepSeek a responder preguntas sobre la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989.<sup>29</sup> En cuanto a los proveedores de IA sin fuertes motivaciones ideológicas, están muy expuestos a presiones políticas para que se les confíe un poder excesivo sobre el flujo de información.

## **Evitar la democracia sintética**

Los responsables políticos pueden evitar cualquiera o todos estos resultados. Una mirada más crítica a la adquisición e implementación de IA por parte de los gobiernos sería un punto de partida razonable. Una adopción más lenta y reflexiva, como la modelada por un programa piloto para funcionarios del gobierno estatal en Pensilvania, podría cosechar las ganancias potenciales de eficiencia de la IA sin incurrir en sus consecuencias perjudiciales. Otra recomendación común es hacer que las auditorías de riesgo y derechos humanos sean estándar en los servicios de IA e s utilizados por los organismos gubernamentales. La desigualdad podría combatirse mediante diversas políticas fiscales, tributarias y laborales específicas. Del mismo modo, son comunes las recomendaciones para mejorar la salud del periodismo, por ejemplo, mediante el apoyo público, modelos filantrópicos e iniciativas ciudadanas. El reto no es la falta de ideas o instrumentos políticos.

De hecho, las democracias actuales padecen con la falta de voluntad política. Los responsables políticos están encantados con las promesas económicas de la IA o temen la amenaza de que gobiernos rivales ganen la «carrera de la IA» y utilicen esa victoria para reafirmar su superioridad. Las advertencias sobre los resultados económicos desiguales, los riesgos climáticos crecientes (los centros de datos de IA requieren cantidades impresionantes de energía) y el exceso de inversión en tecnologías no probadas no han logrado disminuir la influencia que los inversionistas de capital de riesgo y los magnates de la tecnología tienen sobre los



responsables políticos. Esto no puede continuar si queremos evitar los resultados que tememos. Sin embargo, los defensores de la democracia parten de una posición de profunda desventaja frente a los magnates de la IA, que controlan tanto la economía como la opinión de la élite.

Hay que destacar dos puntos: en primer lugar, la IA no es una fuerza inevitablemente dominante que avanza independientemente de la voluntad y la razón humanas, sino una tecnología de utilidad incierta cuya implementación corresponde decidir a las personas. En segundo lugar, los procesos de investigación científica, regulación gubernamental y debate público pueden llevar tiempo, pero eso no los hace inferiores al gobierno por máquinas (es decir, el gobierno por parte de quienes poseen las máquinas). Los esfuerzos por mejorar la gobernanza y ampliar el conocimiento no siempre mejoran cuando se aceleran mediante computadoras; por el contrario, como hemos visto en las redes sociales, el aumento de la velocidad y el volumen de información puede disminuir la calidad del diálogo y la toma de decisiones. Sustituir instituciones antiguas, como universidades, legislaturas y tribunales, por soluciones tecnológicas rápidas concentrará el poder y la información de forma tan intensa que se destruirán las condiciones que hacen posible la democracia.

Las ciencias sociales y humanas están bien posicionadas para ofrecer información sobre estos puntos y pueden proporcionar contrapesos importantes a las perspectivas de los profesionales del sector. El discurso en torno a la IA es otro ámbito en el que el conocimiento técnico se ha sobrevalorado en comparación con otras formas de especialización. Lamentablemente, los ataques políticos a las universidades y otras fuentes de conocimiento están erosionando la voz colectiva de los profesionales preocupados por la IA y el futuro de la democracia. Deben manifestarse ahora, mientras aún puedan.

## Notas

- 1 Foro Económico Mundial, *Informe sobre Riesgos Globales 2024*, enero de 2024, <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024>.
- 2 Sayash Kapoor y Arvind Narayanan. «Cómo prepararse para la avalancha de IA generativa en las redes sociales», Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia, 16 de junio de 2023, <https://knightcolumbia.org/content/how-to-prepare-for-the-deluge-of-generative-ai-on-social-media>.
- 3 Dean Jackson y Meghan Conroy, «¿Apocalipsis más adelante? El impacto real de la IA en las elecciones de 2024», Atlantic Council, 17 de octubre de 2024, <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/the-big-story/apocalypse-later>; Zelly Martin et al., «Political Machines: Understanding the Role of AI in the U.S. 2024 Elections and Beyond», Centro de Compromiso con los Medios de Comunicación de la Universidad de Texas en Austin, mayo de 2024, <https://mediaengagement.org/research/generative-ai-elections-and-beyond/>.
- 4 Yoshua Bengio, «AI and Catastrophic Risk», *Journal of Democracy* 34 (octubre de 2023): 111-21; Tom Davidson, «El peligro de la IA descontrolada», *Journal of Democracy* 34 (octubre de 2023): 132-40; OpenAI, «Estatutos de OpenAI», 9 de abril de 2018, <https://openai.com/charter>.
- 5 Bruce Schneier y Nathan Sanders, «The A.I. Wars Have Three Factions, and They All Crave Power», *New York Times*, 28 de septiembre de 2023, <https://www.nytimes.com/2023/09/28/opinion/ai-safety-ethics-effective.html>.
- 6 Samantha Shorey, «AI and Government Workers: Use Cases in Public Administration», Roosevelt Institute, 15 de julio de 2025, <https://rooseveltinstitute.org/publications/ai-and-government-workers>.
- 7 Prithvi Subramani Iyer, «Cómo el big data puede reforzar la legitimidad autocrática (a través de la retórica de la seguridad y la comodidad)», Policy Brief n.º 137, Toda Peace Institute, septiembre de 2022, 4, [https://toda.org/assets/files/resources/policy-briefs/t-pb-137\\_big-data-autocratic-legitimacy\\_iyer.pdf](https://toda.org/assets/files/resources/policy-briefs/t-pb-137_big-data-autocratic-legitimacy_iyer.pdf); Dia Kayyali, «Pregunte a los expertos: vigilancia mediante IA y aplicación de las leyes de inmigración en EE. UU.», *Tech Policy Press*, 22 de abril de 2025, <https://www.techpolicy.press/ask-the-experts-ai-surveillance-and-us-immigration-enforcement>.

- 8 Arvind Narayanan y Sayash Kapoor, «La IA como tecnología normal», Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia, 15 de abril de 2025, <https://kfai-documents.s3.amazonaws.com/documents/c3cac5a2a7/AI-as-Normal-Technology---Narayanan---Kapoor.pdf>.
- 9 Eric Schmidt, «AI, Great Power Competition and National Security», *Daedalus* 151 (primavera de 2022): 288-98, <https://www.jstor.org/stable/48662042>.
- 10 Barton Gellman, «Peter Thiel se toma un descanso de la democracia», *Atlantic*, 9 de noviembre de 2023, <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2023/11/peter-thiel-2024-election-politics-investing-life-views/675946>; Jill Lepore, «Las ideas fallidas que impulsan a Elon Musk», *New York Times*, 4 de abril de 2025, <https://www.nytimes.com/2025/04/04/opinion/elon-musk-doge-technocracy.html>.
- 11 Henry Farrell, «¿Deberían los preparadores de AGI adoptar DOGE?», *Programmable Mutter*, Substack, 18 de marzo de 2025, <https://www.programmablemutter.com/p/should-agi-preppers-embrace-doge>.
- 12 Bruce Schneier, «Ten Ways AI Will Change Democracy», Harvard Kennedy School Ash Center for Democratic Governance and Innovation, 6 de noviembre de 2023, <https://ash.harvard.edu/articles/ten-ways-ai-will-change-democracy>.
- 13 Dean Jackson y Zelly Martin, «Olvidese de los deepfakes: la escucha social podría ser el uso más trascendental de la IA generativa en la política», *Tech Policy Press*, 18 de junio de 2024, <https://www.techpolicy.press/forget-deepfakes-social-listening-might-be-the-most-consequential-use-of-generative-ai-in-politics>.
- 14 Eric Schmidt, «¿Puede la democracia sobrevivir a la inteligencia artificial?», *Deseret News*, 5 de enero de 2025, <https://www.deseret.com/opinion/2025/01/05/artificial-intelligence-and-democracy-eric-schmidt>.
- 15 Sarah Kreps y Doug Kriner, «How AI Threatens Democracy», *Journal of Democracy* 34 (octubre de 2023): 122-31; Adam Mazmanian, «House bill targets AI-generated comments in rulemaking», *NextGov/FCW*, 8 de mayo de 2024, <https://www.nextgov.com/artificial-intelligence/2024/05/house-bill-targets-ai-generated-comments-rulemaking/396419>.

- 16 James Fishkin et al., «Is Deliberation an Antidote to Extreme Partisan Polarization? Reflections on ‘America in One Room’», *American Political Science Review* 115 (noviembre de 2021): 1464-81; Hugo Mercier y Dan Sperber, *The Enigma of Reason* (Cambridge: Harvard University Press, 2019).
- 17 D. Sunshine Hillygus, «The Evolution of Election Polling in the United States», *Political Opinion Quarterly* 75, n.º 5 (2011), 962-981, <https://sites.duke.edu/hillygus/files/2014/06/HillygusPOQpolling.pdf>.
- 18 Amartya Sen, *La idea de la justicia* (Cambridge: Harvard University Press, 2011).
- 19 David Rotman, «Technology and Inequality», *MIT Technology Review*, 21 de octubre de 2014, <https://www.technologyreview.com/2014/10/21/170679/technology-and-inequality>.
- 20 Eli G. Rau y Susan Stokes, «Income Inequality and the Erosion of Democracy in the Twenty-First Century», *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, n.º 1 (2025), e2422543121, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422543121>.
- 21 Stephanie A. Bell y Anton Korinek, «AI’s Economic Peril», *Journal of Democracy* 34 (octubre de 2023): 151-61
- 22 Moritz von Knebel, «When We Are No Longer Needed: Emerging Elites, Tech Trillionaires, and the Decline of Democracy», *Tech Policy Press*, 8 de mayo de 2025, <https://www.techpolicy.press/when-we-are-no-longer-needed-emerging-elites-tech-trillionaires-and-the-decline-of-democracy>.
- 23 Courtney C. Radsch, «¿Puede sobrevivir el periodismo a la IA?», Brookings Institution, 25 de marzo de 2024, <https://www.brookings.edu/articles/can-journalism-survive-ai>.
- 24 Casey Newton, «How AI bots are suffocating Wikipedia», *Platformer*, 1 de abril de 2025, <https://www.platformer.news/wikipedia-ai-bot-traffic-costs-plan>; Nic Newman y Federica Cherubini, «Tendencias y predicciones sobre periodismo, medios de comunicación y tecnología para 2025», Instituto Reuters, 9 de enero de 2025, <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2025>.

- 25 Michael M. Grynbaum y Ryan Mac, «The Times demanda a OpenAI y Microsoft por el uso de obras protegidas por derechos de autor en inteligencia artificial», *New York Times*, 27 de diciembre de 2023, <https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html>.
- 26 Ilya Shumailov et al., «Los modelos de IA colapsan cuando se entrenan con datos generados recursivamente», *Nature* 631, n.º 8022 (2024): 755-759, <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y>.
- 27 Parshin Shojaee et al., «The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity», Apple, junio de 2025, <https://machinelearning.apple.com/research/illusion-of-thinking>.
- 28 Kylie Robison y Paige Oamek, «La IA Grok de Elon Musk no puede dejar de hablar sobre el ‘genocidio blanco’», *Wired*, 14 de mayo de 2025. <https://www.wired.com/story/grok-white-genocide-elon-musk>.
- 29 James T. Areddy e Isabella Simonetti, «El chatbot de DeepSeek funciona como sus rivales estadounidenses, hasta que le preguntas por Tiananmen», *Wall Street Journal*, 30 de enero de 2025, <https://www.wsj.com/tech/ai/deepseek-chatgpt-tiananmen-square-efcd9938>.

# El Estado de vigilancia impulsado por la IA de China

*Valentin Weber*

**Valentin Weber** es investigador sénior del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores y miembro de China Foresight en LSE IDEAS. Fue investigador sénior del Open Technology Fund en Controles de Información en el Berkman Klein Center for Internet and Society de la Harvard University y tiene un doctorado en ciberseguridad por la Oxford University.

**L**a inteligencia artificial (IA) está transformando no solo las economías, sino también la forma en que se llevan a cabo la aplicación de la ley y la vigilancia. La República Popular China ha puesto en marcha el sistema público más grande de vigilancia basado en IA del mundo y ha transferido a la IA cada vez más tareas que antes realizaban los agentes de policía humanos. Al igual que los pilotos de drones, los agentes de policía de las ciudades chinas trabajan cada vez más en centros de mando, observando pantallas que les permiten supervisar y gestionar la seguridad pública utilizando datos agregados, filtrados y visualizados por la IA. Los policías humanos dirigían y coordinaban las unidades policiales basándose en esos datos, pero los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) están asumiendo esta función de «back-end». En las calles, los avances chinos en robótica significan que los robots controlados por IA dejarán de apoyar a las fuerzas de seguridad humanas y pasarán a detener directamente a los disidentes.

A nivel táctico, la IA es cada vez más capaz de ejecutar todo el ciclo de aplicación de la ley: recopilación de información, movilización de vehículos, mando, planificación y patrullaje. A nivel estratégico, el impacto de la IA en el Estado de vigilancia de China es aún más profundo. La tecnología ha hecho posible la integración masiva de datos no solo dentro de las ciudades, sino a nivel de provincias enteras y, de hecho, de todo el país (incluidas las zonas rurales y deshabitadas). El Partido Comunista Chino (PCCh) creará en breve un centro de mando digital nacional. El actual Estado de vigilancia chino es corrupto, caro y requiere mucho esfuerzo humano para funcionar. El PCCh quiere uno que requiera poca participación humana, «equipado» con una IA que funcione mediante drones, vehículos autónomos y robots humanoides.

¿Esto hará que el partido comunista que gobierna China sea eternamente dominante? ¿Este régimen controlará algún día por completo las emociones humanas o eliminará la imprevisibilidad humana? Aunque el PCCh pueda reducir su dependencia de los policías humanos, seguirá estando atado a un gran número de seres humanos que viven dentro de las fronteras de China. Estas personas seguirán siendo muy inventivas e imprevisibles, especialmente cuando se enfrentan a dificultades económicas o personales. Si el PCCh descuida su labor, por ejemplo, si no logra proporcionar prosperidad económica, ni todos los robots, drones y cámaras del mundo serán capaces de contener el malestar social.

Hace veinticinco años, la República Popular China comenzó a digitalizar sus ministerios, incluidos la policía y los servicios públicos. Se instalaron más cámaras de vigilancia. Hoy en día hay 700 millones, una cámara por cada dos ciudadanos. Al mismo tiempo, hay más teléfonos celulares en China que ciudadanos. Los dispositivos de vigilancia ya sean teléfonos, sensores inteligentes, relojes inteligentes u otras tecnologías conectadas, ya superan con creces el número de policías, tropas paramilitares e informantes que mantienen la seguridad del régimen para los dirigentes del PCCh. Los dispositivos en línea son los ojos y los oídos del partido-Estado, su clave para la conciencia situacional.

En los últimos quince años, China se ha centrado en la integración de datos. Las ciudades y provincias han recurrido a diferentes empresas para suministrar tecnología, lo que significa que los sistemas no siempre son interoperables. Incluso dentro de las ciudades, la policía suele utilizar software que no funciona con otros servicios municipales. Las ciudades fueron el primer centro de los esfuerzos de integración de datos, que ahora se extienden a las provincias. La conurbación urbana de Pekín-Tianjin-Hebei, donde viven unas 109 millones de personas, fue el escenario del primer trabajo interprovincial de intercambio de «big data», y Jiangsu-Shanghái-Zhejiang (174 millones de personas) también se ha añadido a la lista. De este modo, el PCCh puede supervisar a más del 20 % de los 1400 millones de habitantes de China a través de un solo par de pantallas. El sueño del partido-Estado de una «gobernanza en una sola pantalla» está cada vez más cerca de hacerse realidad.

Los altos mandos del PCCh están ansiosos por obtener una visión directa y cercana de los acontecimientos que se desarrollan en toda China, sin tener que depender de informes filtrados por varias capas de burócratas con sus propias agendas. Los funcionarios locales perderán tanto la capacidad de minimizar los conflictos e incidentes como la de exagerar los éxitos. Las cámaras, las computadoras y los robots no intentan evitar castigos ni obtener ascensos (al menos por ahora), por lo que los líderes del PCCh se sienten seguros de que están obteniendo una imagen más clara que nunca de la «China real».

A medida que crece el alcance geográfico de las tecnologías de vigilancia, también lo hace el control del PCCh. Los cielos sobre las ciudades chinas están llenos de drones. A través de ellos, los securócratas pueden vigilar también más allá de los límites de la ciudad. La vigilancia en el interior se está volviendo más común. La futilidad será el resultado de cualquier fuga rural, como la que intentó el protagonista de *Un mundo feliz*, John Savage, al huir hacia el faro en la novela de Aldous Huxley de 1932. En la China de la década de 2020, el Estado vigilante acecha tanto el verde del campo como el asfalto urbano. Hangzhou, ciudad natal de DeepSeek y la más avanzada tecnológicamente de China, ya era capaz



de rastrear automóviles hace una década y ahora rastrea a peatones, ciclistas y el flujo de mercancías en aeropuertos y estaciones de tren.

Otra ventaja que las autoridades chinas esperan obtener con la IA es la capacidad de responder a las dudas y quejas de los ciudadanos antes de que la gente se frustre, se enfade y se vuelva impredecible. La IA con capacidad de razonamiento se está integrando a los servicios municipales. Los chatbots responden a las preguntas de los ciudadanos sobre cuestiones administrativas. En Hangzhou, City Brain GPT ofrece a los ciudadanos «funcionarios» digitalizados.<sup>1</sup> La IA más reciente, especialmente los LLM de DeepSeek, puede permitir a la policía buscar en cientos de miles de cámaras de vigilancia en tiempo real para encontrar, por ejemplo, a una persona con una sudadera verde o un coche específico haciendo algo inusual en la última semana. Además, la IA puede sugerir a la policía dónde enviar patrullas y en qué horarios, o cuántos agentes pueden ser necesarios para una determinada escena del crimen o accidente.

El último LLM de razonamiento de DeepSeek es lo suficientemente barato como para utilizarse en la implementación a gran escala de «agentes» de IA (software de toma de decisiones). Esto cambiará la vigilancia del modo pasivo (las cámaras y los sensores ven y oyen) al modo activo. Una persona puede tener un agente de IA para hacer reservas de viaje, pero si el PCCh le pide al agente de IA que limite los movimientos geográficos de

un disidente, esas reservas se cancelarán. La policía podría ordenar a todos los agentes de IA que se aseguren de que una persona determinada nunca salga de su barrio. O un agente podría desactivar la compra de

---

***En la China de la década de 2020, el estado de vigilancia acecha tanto en el campo como en el asfalto urbano. Hangzhou, ciudad natal de DeepSeek y la más avanzada tecnológicamente de China, ya era capaz de rastrear automóviles hace una década y ahora rastrea a peatones, ciclistas y el flujo de mercancías en aeropuertos y estaciones de tren.***

---

cualquier servicio de transporte personal a través de la cuenta WeChat Pay de una persona, sin bloquear la capacidad de esa misma cuenta para pagar alimentos o facturas rutinarias.

En marzo de 2025, Lenovo presentó el Urban Super Intelligent System (sistema urbano superinteligente) como una actualización de la plataforma de gestión urbana City Brain.<sup>2</sup> El nuevo sistema puede ejecutar decisiones, no solo sugerirlas. El producto de Lenovo presenta un único superagente de IA que coordina a los agentes de IA responsables de ejecutar las decisiones. Los agentes de IA comerciales y de transporte, por ejemplo, intercambian información sobre el tráfico, los datos de ventas, los flujos de pasajeros y las preferencias de los consumidores. Los agentes de IA de seguridad pública trabajarían en conjunto con los agentes comerciales y otros agentes de IA para ejecutar tareas de forma autónoma.

Tras una protesta popular, en un escenario hipotético, un policía humano podría ordenar al superagente de IA que se asegurara de que dicha protesta no se repitiera. El superagente de IA pediría entonces a los agentes de IA de seguridad sobre el terreno que identificaran a todos los implicados, accedieran a sus patrones de movimiento y les impidieran utilizar el transporte público durante dos días, manteniendo también todos sus vehículos personales dentro de unos límites geográficos. Un agente de IA de propaganda crearía noticias y contenido en las redes sociales describiendo las protestas de manera negativa, y enviaría mensajes privados individuales a las redes sociales de todos aquellos que fueran vistos protestando, para marcarlos como personas que sus amigos, familiares y conocidos deberían evitar.

Para «rehabilitar» a los manifestantes, el superagente de IA ordenaría al agente de IA de los servicios públicos de la ciudad que todos los manifestantes pasaran varias horas a la semana realizando servicios comunitarios y una hora al día interactuando por teléfono o computadora con un agente de IA de recuperación que mezclaría preguntas de interrogatorio con adoctrinamiento ideológico. El superagente de IA supervisaría el progreso ideológico y ajustaría las instrucciones a

los agentes de IA sobre el terreno según fuera necesario. La falta de progreso o la negativa a participar significaría que las medidas punitivas seguirían vigentes o se volverían aún más severas. Los funcionarios humanos solo tendrían que intervenir en casos anómalos.

Lenovo eligió Wuyishan e Yichang como las dos primeras ciudades en dar este paso en el desarrollo de ciudades inteligentes utilizando agentes de IA. Yichang cuenta con una amplia generación de energía hidroeléctrica (y, por lo tanto, energía barata para la computación), mientras que Wuyishan es un bullicioso centro turístico. El papel humano en la gestión de estas dos ciudades se está reduciendo a una participación superficial.<sup>3</sup> Por ahora, los humanos están estableciendo objetivos y aprobando decisiones cruciales, pero es posible que el sistema pronto ya no los necesite. Cada vez más, las máquinas se comunican entre sí para coordinar todas las fases de vigilancia y control.

## **Cómo la IA llena los vacíos de seguridad del PCCh**

Una gran vulnerabilidad del Estado de vigilancia es que aún es incorpóreo. Como escribe Minxin Pei:

*En las últimas ocho décadas, el PCCh ha construido una vasta red de millones de informantes y espías cuyo trabajo, a menudo no remunerado, ha sido fundamental para la supervivencia del régimen. Son estos hombres y mujeres, más que las cámaras o la inteligencia artificial, los que han permitido a Pekín reprimir la disidencia. Sin una red de este tamaño, el sistema no podría funcionar.<sup>4</sup>*

Son los policías los que realizan inspecciones periódicas para garantizar que los cibercafés registran correctamente los documentos de identidad de las personas, o los que verifican a determinados individuos (tibetanos, uigures, disidentes). Pei tiene razón al afirmar que la intimidación funciona mejor cuando alguien llama a la puerta, y también

tiene razón al señalar que la infraestructura de vigilancia de China sigue siendo principalmente pasiva. La localización de teléfonos celulares y cámaras de reconocimiento facial pueden informar al PCCh quién ha estado en un cibercafé y durante cuánto tiempo, pero los robots aún no realizan verificaciones «presenciales» de personas de interés.

Durante la última década, el PCCh ha tenido ojos y oídos, e incluso un cerebro para procesar y dar sentido a los datos. Cuenta con redes 5G y cables de fibra óptica que sirven como vías neuronales que transportan información de las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) a los centros de computación en la nube. Pero todo esto sigue siendo pasivo. E incluso cuando el Estado de vigilancia se activa a través de agentes de IA, estas acciones se limitan principalmente a Internet. La infraestructura de vigilancia solo puede bloquear el acceso de las personas a los servicios. Es posible que los pasajes de tren de las personas no funcionen. Es posible que sus vehículos conectados no arranquen. Es posible que sus correos electrónicos y mensajes de texto sean filtrados por software de censura.

La infraestructura de vigilancia técnica carecía de recursos y, por lo tanto, necesitaba contar, como señala Pei, con agentes humanos «in situ». El PCCh ha intentado cambiar esto. El primer paso fue introducir drones aéreos que pudieran seguir a los manifestantes por la ciudad. Los vehículos autónomos cumplen una función similar. El aumento de las capacidades de los autos autónomos significa que, en breve, serán capaces de hacer algo más que recibir órdenes remotas para no arrancar. ¿Y si una disidente se subiera a su coche un día y descubriera que las puertas se estaban cerrando de forma remota (con los cierres inutilizados por cualquier persona dentro del coche, también por control remoto) y su coche autónomo condujera solo hasta una comisaría de policía con ella atrapada dentro? Este tipo de escenario distópico aterrador es el sueño del PCCh.

Sin embargo, el PCCh no solo quiere drones y autos autónomos. Para vigilar las calles y los edificios mediante una «IA corpórea», el partido-Estado quiere implementar robots humanoides controlados por

IA y con miembros físicos cuyas habilidades pronto rivalizarán o superarán a las de los seres humanos. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Pública de Binjiang, en Hangzhou, presentó un robot humanoide llamado «Bin Xiaoxin».<sup>5</sup> Pertenece a una red de drones aéreos, robots de dos y cuatro patas y vehículos autónomos. Las máquinas tienen recursos de reconocimiento facial y pueden crear instantáneas virtuales tridimensionales de escenas del crimen. Como máquinas, necesitarán tiempo de inactividad para recargarse y mantenerse, pero la idea es tener un número suficiente para que sea posible patrullar a tiempo completo.

Pei sostiene que el Estado de vigilancia del PCCh es intensivo en mano de obra, en parte porque el partido-Estado quiere evitar tener que depender de una sola agencia y flujo de información, por lo que ha creado varios organismos de seguridad e inteligencia diferentes. Esto proporciona a las autoridades de los niveles más altos una visión más completa de lo que está sucediendo en toda China, mientras fomenta las rivalidades burocráticas y las «guerras territoriales» que pueden manipularse desde arriba para mantener el aparato de seguridad e o en su conjunto bajo control y sujeto al partido. La respuesta del PCCh a la pregunta «¿quién vigila a los vigilantes?» es, en otras palabras, tener varios vigilantes rivales. Una implicación de esto es que la policía secreta no es la única fuente de información de las autoridades centrales.

Un flujo paralelo de información es recopilado por cámaras de CCTV y otros sensores, analizado por IA y, a continuación, visualizado en pantallas gigantes en centros de mando municipales e interprovinciales para su visualización por parte de altos funcionarios de seguridad, todo ello en cuestión de segundos. El presidente del PCCh, Xi Jinping, y sus colegas aprecian disponer de información relevante para la seguridad pública que la IA ha recopilado y analizado, y en la que los burócratas no han tenido oportunidad de interferir, manipular o distorsionar. China ha tenido un «emperador» durante muchos siglos, pero nunca uno con el panóptico en cuyo centro se encuentra el presidente Xi.

Todavía existen algunas limitaciones geográficas, por lo que el panóptico sigue siendo una obra en construcción. La provincia de Hebei es vecina de Pekín y comparte un «cerebro interprovincial» de IA con la capital nacional. La información del lejano Tíbet, por otro lado, todavía tiene que pasar por varias capas de burócratas. Sin embargo, pronto los datos de las calles de Lhasa, capital del Tíbet, podrán fluir directamente a Pekín en tiempo real.

Los «dispositivos periféricos» de la nueva estructura de seguridad (drones, robots, cámaras) tienen pequeños cerebros digitales que cumplen objetivos inteligentes muy específicos, como identificar el rostro de un fugitivo entre una multitud. Esta información se envía a un cerebro de la ciudad, una capa más de inteligencia, donde se persigue el objetivo general de prevenir disturbios generalizados. En resumen, el Estado de vigilancia chino funciona como un pulpo. Cada uno de los ocho brazos (cerebros) puede actuar de forma independiente, pero el cerebro central sigue siendo capaz de ejercer un control de arriba abajo. Wu Zhiqiang, de la Academia China de Ingeniería, tiene una visión similar. Ve la ciudad como un sistema compuesto por un cerebro principal y cerebros auxiliares. Juntos, crean una inteligencia social «multicerebral» que aprende cómo funcionan las comunidades sociales y utiliza la colaboración de muchos cerebros digitales para gobernarlas.<sup>6</sup>

## **Las vulnerabilidades restantes del PCCh**

La creciente dependencia del PCCh de la tecnología avanzada conlleva una nueva vulnerabilidad: la IA rebelde. Ya existen LLM que mienten, desactivan sus mecanismos de supervisión o acceden a servidores externos. A medida que la IA se vuelve más poderosa, esta tendencia puede aumentar. La IA de seguridad pública en China está diseñada para detectar patrones complejos, recopilar experiencias del mundo real y aprender de las interacciones sociales. Cada robot humanoide aumenta constantemente su propio conjunto de experiencias. La

IA se entrena basándose en lo que absorbe. Los agentes de IA corpóreos están diseñados para buscar el aprendizaje autónomo y la superación personal. Si el robot A acumula experiencias que le llevan a ser bueno persiguiendo a personas, esto podría eventualmente destacarlo como un cazador eficiente.

El enfoque actual de los desarrolladores en China es hacer que los robots se parezcan más a los humanos, para que aprendan tan rápido como los niños pequeños, utilizando datos del mundo real y no solo los que están disponibles en Internet. A medida que los robots policías aprenden a ser más humanos, ¿podrían aprender (entre otras cosas) «atajos» en la búsqueda de los objetivos básicos para los que han sido programados? Esto sería una especie de corrupción robótica, ignorando las reglas no por soborno, sino en aras de una mayor eficiencia. Si un robot patrulla percibiera las instrucciones de un policía humano como algo ineficaz, ¿podría el robot ser propenso a desactivar su mecanismo de supervisión? Puede haber momentos en los que las autoridades humanas no quieran que su robot «cazador eficiente» persiga de la manera más agresiva posible. Pero, ¿obedecerá siempre el robot? Y este escenario solo implica un pequeño cerebro digital en un único dispositivo periférico. ¿Y si algo así ocurriera a nivel sistémico, con el multicerebro de una ciudad o una provincia entera?

Por ahora, los robots solo tienen permiso para identificar comportamientos sospechosos, no pueden arrestar a personas. Pero eso puede cambiar. Están autorizados a orientar a las personas, pero no pueden calmar a personas que están enojadas o bajo una fuerte emoción. La policía de la República Popular China sigue la máxima de «asistentes digitales, no tomadores de decisiones digitales».

Los policías chinos saben lo que pueden hacer los robots con inteligencia artificial y afirman que los seres humanos son necesarios por su inteligencia emocional y su capacidad para gestionar crisis complejas. Pero, ¿y si las máquinas ya son, o pronto serán, mejores en estas funciones? Los chatbots de LLM ya están sirviendo a algunos humanos como terapeutas, consejeros de vida e incluso parejas románticas. Del

mismo modo, los robots policías son buenos para escuchar y reflexionar, mientras que no todos los policías humanos tienen grandes habilidades o inclinaciones en estas áreas (por no hablar de los policías humanos que son brutales o corruptos).

¿Y qué hay de la gestión de crisis? ¿Son los humanos intocables en este aspecto? Los robots ya se utilizan en operaciones complejas que presentan un alto riesgo de daños para los policías humanos: es mejor contar con robots para desactivar bombas o irrumpir en escondites sospechosos de delincuentes violentos en medio de la noche. A medida que los drones y los robots humanoides se vuelven más capaces, su uso en lugar de los humanos para manejar crisis solo aumentará. Lo más impresionante es el cambio en la forma en que los policías de China se ven a sí mismos. La IA los ha convertido en gestores de tecnología, predictores de riesgos y mediadores sociales, y ellos lo saben. ¿Se ha vuelto la tecnología tan fundamental para su trabajo que dependen demasiado de ella?

Incluso sin «rebelarse», la IA puede amenazar la estabilidad. La dependencia constante de ella puede llevar a los policías humanos a confiar demasiado en ella. A medida que los sistemas se vuelven más complejos, se vuelven más opacos. ¿Esto hará que los securócratas se pregunten si deben confiar la seguridad pública a un sistema que no comprenden del todo?

Un problema más sutil para el régimen del PCCh es el aumento del nivel de expectativas de los ciudadanos que puede derivarse de la eliminación de la corrupción policial y de las múltiples capas de la burocracia del partido-Estado. Los ciudadanos podrían preguntarse: si el centro tiene control y supervisión inmediatos, ¿por qué parece que nuestras quejas no se escuchan? Las agencias de seguridad de China han tolerado durante mucho tiempo las quejas sobre las autoridades locales como forma de desviar el descontento de los líderes centrales del PCCh. Un futuro cerebro digital nacional en Pekín implicará que las autoridades centrales tengan conocimiento y sean responsables de lo que ocurre a nivel local y provincial.



Sorprendentemente, el PCCh se ha esforzado mucho por mantener la distancia física entre los gobernantes y los gobernados. Es habitual restringir los movimientos de los disidentes, utilizando el rastreo de teléfonos celulares para garantizar que no lleguen a una parte de la ciudad donde se encuentran las agencias gubernamentales u otras propiedades sensibles del régimen. Este enfoque en los límites físicos está en consonancia con la clasificación del PCCh de las protestas «en la vida real» como una amenaza más grave que la disidencia en línea. Los securócratas chinos creen que han perfeccionado el control en línea, pero aún luchan por encontrar una manera de lidiar con el mundo *offline*. Su principal objetivo es evitar que se reúnan grandes multitudes. En 2022 y, de nuevo, en 2024, fracasaron notablemente.

El 13 de octubre de 2022, aparecieron pancartas en el puente Sitong de Pekín exigiendo libertad, elecciones, el fin de las mentiras y los confinamientos por el COVID-19, y la destitución del «dictador» y «traidor a la patria» Xi Jinping. Se dice que la persona que colocó las pancartas, identificada por algunos como Peng Lifa, sigue detenida. En noviembre comenzaron a estallar las protestas contra el confinamiento. Miles de personas salieron a las calles de China para expresar su frustración por las medidas de restricción de movimientos, que imponían la política de «Covid cero» de Xi y eran algunas de las más estrictas del mundo. Se cree que las manifestaciones fueron las mayores protestas antigubernamentales desde el movimiento de la Plaza de Tiananmen, que el PCCh reprimió violentamente en junio de 1989. A diferencia del caso anterior, no se limitaron a una sola ciudad.

Estas protestas revelaron la mayor vulnerabilidad del PCCh: su propia incompetencia. El virus que originó el problema pudo haber sido creado por el propio gobierno chino, con un 80 % a 90 % de probabilidades de haber escapado del laboratorio de Wuhan debido a un error (según el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania), y fue recibido con medidas duras, impopulares y equivocadas ordenadas por el PCCh en busca del «Covid cero», que provocaron la ira del público sin lograr contener la propagación del virus.<sup>7</sup>

Lo más notable es que las mayores protestas tuvieron lugar en la gigantesca ciudad costera de Shanghái, donde la población local se reunió para apoyar a diez conciudadanos que murieron a más de tres mil kilómetros de distancia, en un incendio en un rascacielos en Urumqi, capital de la Región Autónoma de Xinjiang, el 24 de noviembre. Los manifestantes creían que las medidas de confinamiento fueron, al menos en parte, responsables de las muertes. Levantaron hojas de papel en blanco para simbolizar el luto y su oposición a las políticas del gobierno.

## **Los ciclistas de medianoche de Kaifeng**

Dos años después, decenas de miles de estudiantes de la provincia de Henan comenzaron a pedalear los 65 kilómetros que separan Zhengzhou de Kaifeng. Estas «carreras de empanadillas» después del anochecer eran una moda en el campus. Jóvenes sonrientes pedaleaban toda la noche, enarbolando la bandera de la República Popular China en sus bicicletas compartidas y gastando el dinero del desayuno en Kaifeng, una pintoresca e histórica ciudad que es una de las «Ocho Antiguas Capitales» de China. Las autoridades contaban con su IA, sus drones y sus cámaras de CCTV para vigilar las excursiones durante semanas, pero aun así se sorprendieron por la popularidad que alcanzaron los paseos, y los suspendieron abruptamente a principios de noviembre de 2024, cuando los ciclistas congestionaron la autopista y generaron preocupaciones por la seguridad. A pesar de todas las herramientas de alta tecnología a su disposición, las autoridades se vieron sorprendidas por una explosión aleatoria de puro capricho humano, impulsada por la energía de la juventud y el poder de «viralizarse» en Internet.

Mientras los seres humanos sigan controlando el Estado vigilante, mientras sigan tomando decisiones, la seguridad del partido-Estado comunista seguirá estando en duda: los seres humanos simplemente cometen demasiados errores. De ahí el dilema del liderazgo del PCCh: ¿debe confiar las decisiones de seguridad a sistemas de IA que nadie

comprende del todo y que pueden fallar o cometer errores? ¿O debe mantener su confianza en el juicio humano, aunque un error en el lugar y el momento equivocados pueda costarle la vida al régimen?

El comunismo soviético duró 74 años, desde 1917 hasta 1991. Su contraparte china cumplió 76 años en octubre de 2025. Hoy en día, la represión digitalizada es una gran ventaja que China tiene y que la URSS no tenía. Las investigaciones muestran que los regímenes que hacen uso de la represión digital duran más que los que no lo hacen. En la Alemania Oriental comunista, la policía secreta recopilaba más datos de los que sus analistas podían procesar, una tarea que ahora se ha vuelto trivialmente fácil con los registros electrónicos y la inteligencia artificial. Nadie hace mejor vigilancia y control digital que China. Es líder mundial en estas áreas y parece que seguirá siéndolo durante algún tiempo.

El PCCh seguirá corrigiendo sus vulnerabilidades. Se vigilará cada vez más de cerca a las personas, y su capacidad de desplazamiento estará sujeta a restricciones y flexibilizaciones cada vez más refinadas, basadas en evaluaciones cada vez más detalladas de la IA. El PCCh mantendrá la represión mediante la IA; Xi Jinping es muy consciente de cómo cayó la URSS y está decidido a no permitir que el partido-Estado chino siga ese camino. Se centra en la economía como su clave inmediata para la legitimidad, pero no se olvida de mantener un control estricto sobre la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, de conciencia y de disidencia. Aun así, la seguridad del régimen del PCCh seguirá siendo profundamente vulnerable. La naturaleza humana es confusa, irracional e impredecible, y las manifestaciones no siempre son tan inofensivas como unos tranquilos paseos en bicicleta. Esos paseos eran inofensivos en sí mismos (a pesar de los atascos), pero revelaron el talón de Aquiles del PCCh. Las autoridades cometieron errores de juicio al dejar pasar a los ciclistas y luego, presas del pánico, prohibirlos cuando la moda se volvió viral y las flotas de bicicletas se hicieron demasiado grandes.

Es poco probable que las malas decisiones, incluso en los niveles más altos, desaparezcan. ¿Quién podría imaginar que la decisión de

cultivar virus altamente contagiosos en un laboratorio de bioseguridad de nivel 4 (oficialmente el más seguro) en Wuhan podría provocar el miedo por la supervivencia entre los líderes de Pekín? ¿O que la política de Covid cero sería tan impopular?

En condiciones de libertad, la imprevisibilidad humana puede pasar de ser una debilidad a una fortaleza. Cuando la sociedad civil es libre, cuando las personas pueden conversar y reunirse en paz, y cuando el sistema político es competitivo, el descontento público y el deseo de cambio pueden tratarse como aspectos normales del sistema, que pueden acomodarse mediante la capacidad de respuesta democrática. Así, el descontento expresado públicamente y las protestas abiertas no tienen por qué verse como choques alarmantes que amenazan con derribar una frágil estructura autoritaria. En cambio, y dentro de unos límites amplios, las quejas y las protestas pueden ofrecer una retroalimentación democrática útil que se puede tener en cuenta y (tras debates y discusiones abiertas) tal vez ponerse en práctica por representantes del pueblo libremente elegidos. En resumen, la democracia tiene una resiliencia inherente que la autocracia no posee.

La ira expresada durante las protestas por el COVID-19 y la alegría compartida por miles de personas que pedaleaban pacíficamente entre dos ciudades fueron dos emociones muy diferentes, pero ambas revelaron la vulnerabilidad del PCCh. Las emociones humanas y la imprevisibilidad seguirán siendo un dolor de cabeza constante para el partido-Estado, especialmente cuando sus funcionarios cometen errores, como lo han hecho en el pasado y sin duda lo harán en el futuro. Ninguna cantidad de vigilancia y control por parte de la IA cambiará esta dinámica, y la tecnología no puede hacer que un sistema frágil sea resistente, solo la democracia puede hacerlo.

## Notas

- 1 Zhao Lu y Tu Youju, «杭州全面开启 ‘城市大脑3.0’ 建设» (Hangzhou inicia oficialmente la construcción del «Cerebro Urbano 3.0»), *Zhejiang Daily*, 31 de marzo de 2025, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1828119933477355350>.
- 2 «再下一城！全球首批城市超级智能体落地宜昌» (¡Otro éxito! El primer lote mundial de agentes urbanos superinteligentes se lanza en Yichang), *China Daily*, 20 de marzo de 2025, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827109397143003768>.
- 3 Zeng Xiangling, « ‘城市超级智能体’ 落地 · 联想智慧城市4.0 ‘功到自然成’ » («Se lanza la “superinteligencia urbana”: la Smart City 4.0 de Lenovo es un éxito natural»), Baidu, 25 de marzo de 2025, <https://baike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=82a3cad5d1ba2514648fe7df>.
- 4 Minxin Pei, «Why China Can't Export Its Model of Surveillance» (Por qué China no puede exportar su modelo de vigilancia), *Foreign Affairs*, 6 de febrero de 2024, <https://www.foreignaffairs.com/china/why-china-cant-export-its-model-surveillance>.
- 5 Lu Tianran, «当机器人穿上警服：杭州街头的新 ‘警员’ 能否打破警察的铁饭碗?» (Cuando los robots visten uniformes de policía: ¿podrán los nuevos «policías» en las calles de Hangzhou romper el monopolio de la policía?), Baidu, 24 de marzo de 2025, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827349112869115832>.
- 6 «Para construir un verdadero cerebro urbano, necesita dominar la «inteligencia colectiva» y aprender a competir estratégicamente» (Para construir un verdadero cerebro urbano, la IA necesita dominar la «inteligencia colectiva» y aprender a competir estratégicamente), *Shanghai Observer*, 8 de julio de 2023, <https://web.archive.org/web/20250423075321/https://export.shobserver.com/baijiahao/html/630479.html>.
- 7 Francesca Gillett, «La agencia de espionaje alemana cree que el Covid probablemente se originó en un laboratorio», BBC, 13 de marzo de 2025, <https://www.bbc.co.uk/news/articles/cz7vypq31z7o>.

# Cómo los líderes autoritarios se aprovechan del género

*Elin Bjarnegård y Pär Zetterberg*

*Elin Bjarnegård es profesora de ciencias políticas en la Uppsala University. Pär Zetterberg es profesor de ciencias políticas en la Uppsala University. Son coautores de «How Autocrats Weaponize Women's Rights» (Cómo los autócratas utilizan los derechos de las mujeres como arma), publicado en la edición de noviembre de 2022 de la revista *Journal of Democracy* en portugués.*

La tendencia actual al retroceso democrático, el autoritarismo y la autocracia no solo desafía las instituciones democráticas, sino también puede considerarse un ataque a los valores liberales, como la igualdad de género. Líderes políticos como Vladimir Putin, Viktor Orbán y Recep Tayyip Erdogan han llamado la atención de los medios de comunicación por sus comentarios sexistas y sus declaraciones despectivas sobre la «ideología de género», lo que ha aumentado la conciencia sobre la relación entre las posturas críticas con las cuestiones de género y el autoritarismo. A menudo se considera que estas figuras promueven una reacción ideológica contra los logros feministas de las últimas décadas. El chovinismo espontáneo de Orbán contra las mujeres, por ejemplo, se ha atribuido al deseo de mantener a las mujeres fuera de la esfera pública y dentro de la cocina.<sup>1</sup>

Al mismo tiempo, sin embargo, los líderes autoritarios a veces se manifiestan en defensa de los derechos de las mujeres. Cuando Orbán

discursó en el Parlamento Europeo en octubre de 2024, por ejemplo, condenó la violencia contra las mujeres.<sup>2</sup> Y, lejos de los reflectores de los medios de comunicación, los líderes autoritarios compiten por ver quién es más favorable a la igualdad de género y difunden los avances de sus respectivos países en esta área. De hecho, los líderes autoritarios han adoptado reformas de igualdad de género a un ritmo sin precedentes.<sup>3</sup> Gracias a las cuotas electorales, por ejemplo, las autocracias ocupan actualmente cuatro de las cinco primeras posiciones en lo que respecta a la representación de las mujeres en el Parlamento: Ruanda encabeza la lista, seguida de Cuba y Nicaragua, con los Emiratos Árabes Unidos en quinto lugar.

¿Cómo entender estas tendencias simultáneas, pero aparentemente contradictorias, en los discursos y acciones de los líderes autoritarios? La respuesta comienza con el reconocimiento de que, contrariamente a lo que afirman muchos observadores,<sup>4</sup> *no* se ve un comportamiento de carácter ideológico. Por el contrario, en lugar de situar el género en el centro de sus agendas, los líderes autoritarios tratan las cuestiones de género como herramientas, instrumentos flexibles que pueden adaptarse a usos que sirvan al objetivo último de permanecer en el poder.

Así, observamos que los líderes autoritarios utilizan tanto el «*genderbashing*» como el «*genderwashing*». Hablamos de *genderbashing* cuando los líderes autoritarios explotan los miedos, las ansiedades y las inseguridades de la población reprimiendo los derechos de las mujeres y denunciando el activismo de género como contrario al patriotismo, la tradición y la soberanía nacional. En este caso, los líderes autoritarios señalan un distanciamiento de las normas liberales internacionales para apaciguar a los sectores conservadores y nativistas de la población. El *genderwashing*, por otro lado, implica abrazar —e intentar atribuirse el mérito— los avances hacia una mayor igualdad de género como forma de parecer progresista, liberal e incluso democrático, mientras se desvía la atención de las prácticas autoritarias persistentes. Al señalar su adhesión a las normas liberales de género, los líderes autoritarios intentan evitar la presión para liberalizar más ampliamente.

Este enfoque ofrece versatilidad a los líderes autoritarios. Quieren conocer las opiniones de los ciudadanos no para atenderlas, sino para explotarlas, adaptando y difundiendo selectivamente mensajes a los públicos que más se identifican con ellas. El mismo líder puede practicar *el genderbashing* o *el genderwashing*, dependiendo del público al que se dirija y del tema político que se esté debatiendo.

## Enfoques autoritarios de género

En las últimas décadas han surgido importantes normas internacionales en materia de igualdad de género. Los llamamientos a las organizaciones de la ONU, los Estados miembros y las sociedades civiles para que busquen la igualdad de género han dado lugar a mejoras notables y a avances tangibles en la participación de las mujeres en la política, pero también han contribuido a que el género se considere un concepto liberal y un símbolo de las normas internacionales prescritas por las Naciones Unidas. El género es un concepto ambiguo que puede utilizarse de diferentes maneras. Esta fluidez lo convierte en una herramienta versátil para los políticos.

Tanto el *genderwashing* como el *genderbashing* revelan elementos estratégicos de la política de género. Uno de los casos más citados de *genderwashing* autocrático, Ruanda, es una autocracia desde hace más de veinte años, a pesar de haberse ganado la fama de «líder en cuestiones de género», con la mayor proporción de mujeres en el poder legislativo nacional del mundo. En 2023, una conferencia sobre igualdad de género titulada «Women Deliver» atrajo a más de seis mil delegados a Kigali, capital de Ruanda. Muchos delegados dijeron que se sentían felices y agradecidos de que la conferencia se celebrara en Ruanda, un país con tantos avances. Al igual que los diplomáticos y donantes antes que ellos, los delegados ignoraron las persistentes prácticas autocráticas del país anfitrión y se centraron en reformas de igualdad de género cuidadosamente seleccionadas y visibles.



Las políticas de igualdad de género de gran visibilidad, como las cuotas electorales, también pueden utilizarse para ocultar el retroceso democrático, como se ha visto en Serbia. Según Freedom House, el Partido Progresista Serbio (SNS), actualmente en el poder, ha estado presionando a los medios de comunicación, la oposición y la sociedad civil, al tiempo que erosiona los derechos políticos y las libertades civiles. La politóloga serbia Jelena Lončar sostiene que los avances hacia una mayor igualdad de género, logrados mientras se producía la erosión, deben considerarse una distracción del deterioro democrático. El gobierno del SNS aumentó las cuotas (al menos el 40 % de todos los candidatos al parlamento deben ser mujeres), introdujo leyes sobre igualdad de género y prevención de la violencia doméstica y colocó a más mujeres que nunca en puestos ejecutivos, incluida Ana Brnabić, que es abiertamente lesbiana y ocupó el cargo de primera ministra de 2017 a 2024. Sin embargo, en segundo plano, siempre ha habido un retroceso democrático. Estas medidas se han puesto en primer plano para apaciguar a los progresistas del país y a los actores internacionales, como la Unión Europea, y a la vez desvían la atención de la dirección menos democrática que el SNS estaba imprimiendo a la vida política serbia.<sup>5</sup>

América Latina también ofrece ejemplos de *genderwashing*. Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2021, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, habló de los logros de su país en materia de igualdad de género, por ejemplo, respecto a la representación parlamentaria de las mujeres. Como parte de una campaña del gobierno para «destacar» a Nicaragua como líder regional e incluso mundial, calificó al país de «ejemplo» e «inspiración» en materia de igualdad de género. Para demostrar este punto, los voceros del gobierno suelen citar clasificaciones mundiales de igualdad de género. El gobierno sandinista, liderado por el presidente Daniel Ortega, tiene buenas razones para preocuparse por su imagen.

Desde que Ortega volvió al poder en 2007, la democracia del país se ha deteriorado hasta tal punto que Freedom House clasifica a Nicaragua como «no libre». El partido sandinista en el poder (FSLN) manipula las

elecciones, controla todos los poderes del gobierno, incluido el judicial, y permite una amplia corrupción oficial, que rara vez se investiga. Para el gobierno del FSLN, poner en destaque su liderazgo en materia de igualdad de género parece ofrecer un atajo para mejorar su imagen ante otros gobiernos y sus propios ciudadanos, así como un medio para desviar la atención de las medidas represivas contra los disidentes.

En Oriente Medio, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), se ha convertido en un autócrata al que le gusta presentarse como defensor de la igualdad de género. Arabia Saudita no tiene instituciones democráticas —su Majlis, o Asamblea Consultiva, es nombrada en su totalidad por el rey y solo puede hacer sugerencias—, pero MBS entiende que aún necesita ganarse el apoyo de los saudíes más jóvenes. Su plan «Visión 2030» para modernizar el país prevé que más mujeres se incorporen a la fuerza laboral para diversificar la economía. Para ello, en 2018, MBS finalmente cedió a las demandas de la campaña «Women2Drive». Movilizada principalmente por activistas mujeres en línea, la campaña fue acompañada, en el momento de su triunfo, por el arresto de varias activistas prominentes, entre ellas Loujain al-Hathloul y Eman al-Nafjan. El cambio de imagen del gobierno, sin responder a los ciudadanos, parece haber sido la razón principal para permitir que las mujeres saudíes se pusieran al volante.

El *genderwashing* es un ejemplo de lo que el difunto politólogo Joseph Nye denominó «*soft power*». Se ejerce no mediante la coacción o el soborno (que son ejemplos de «*hard power*»), sino mediante la capacidad de atraer al público con retórica y tipos específicos de políticas.<sup>6</sup> Un gobierno puede utilizar métodos más severos incluso mientras ejerce el *soft power*, como ilustran los casos de Nicaragua y Arabia Saudita. Los regímenes autoritarios comunican sus logros en materia de igualdad de género a diversos públicos, mientras siguen utilizando tácticas represivas y dictatoriales típicas, como arrestar a líderes de la oposición, reprimir brutalmente las protestas masivas, etcétera. La promoción de la igualdad de género se considera de manera pragmática, como una herramienta. Si promover la igualdad de género parece útil para el proyecto de

mantenerse en el poder, entonces los autócratas promoverán la igualdad de género. Si deja de ser útil, la abandonarán. Nadie debe albergar la ilusión de que hay algún principio noble en acción.

Las posturas antigénero pueden parecer menos calculadas, pero también son una herramienta para líderes como Orbán, que desean justificar el retroceso democrático. Él y su partido, Fidesz, han señalado especialmente la «ideología de género» como un peligro para la nación y los ciudadanos de a pie. Se dice que se opone al bienestar general de las familias húngaras, y las personas LGTBIQ+ han sido retratadas como enemigas de los valores familiares tradicionales.<sup>7</sup> En 2018, una revista afín al gobierno publicó una lista de investigadores de la Academia Húngara de Ciencias, acusándolos de trabajar en «derechos de los homosexuales y ciencia de género». A esto le siguió un decreto que dio lugar a enmiendas concretas en varias leyes.

En la práctica, las nuevas leyes prohibieron los estudios de género en las universidades.<sup>8</sup> En 2021, la Asamblea Nacional de Hungría aprobó una ley que prohibía a las escuelas enseñar a los menores sobre orientación sexual e identidad de género. Se acusó dicha ley de confundir deliberadamente la homosexualidad con la pedofilia y fue calificada de propaganda antigay y homofobia patrocinada por el Estado.<sup>9</sup> La Comisión Europea reaccionó de inmediato al nuevo proyecto de ley, y la presidenta Ursula von der Leyen lo calificó de «vergonzoso», mientras que los comisionados compartieron públicamente una carta en la que lo describían como una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.<sup>10</sup>

Hungría no es, ni mucho menos, el único país que recurre al *genderbashing*. Incluso democracias occidentales consolidadas, que antes defendían el *soft power* y se enorgullecían de ser vanguardistas en materia de normas liberales, como la igualdad de género, avanzan ahora en una dirección iliberal, asociando los valores familiares tradicionales con el patriotismo.<sup>11</sup> La «ideología de género» se interpreta como contraria a estos valores y como una influencia impuesta y peligrosa que organizaciones como la UE y la ONU promueven de forma agresiva.<sup>12</sup> En

2021, el presidente Erdogan retiró a Turquía del acuerdo del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, comúnmente conocido como Convenio de Estambul. La declaración oficial acusaba al acuerdo, «originalmente destinado a promover los derechos de las mujeres», de haber sido «secuestrado por un grupo de personas que intentan normalizar la homosexualidad» y lo consideraba «incompatible» con los «valores sociales y familiares» turcos.<sup>13</sup> El uso de la palabra «género» en lugar de «mujeres» se considera especialmente provocador. Las autoridades turcas alegaron que las leyes nacionales y las costumbres tradicionales son suficientes para proteger a las mujeres de la violencia.<sup>14</sup>

La retirada se produjo en un momento en que el gobierno de Erdogan se enfrentaba a un desafío acentuado por su derrota en algunas elecciones locales. La retirada de la Convención de Estambul se entendió como parte de la estrategia de supervivencia de un régimen autoritario, y no como resultado de una oposición genuina al orden de los derechos humanos.<sup>15</sup> Se argumentó que la retirada unió a la base electoral conservadora de Erdogan, le ayudó a tender puentes con el Partido de la Felicidad (un grupo islámico a la derecha del presidente) y permitió la represión de los críticos de la sociedad civil, como los defensores de los derechos de las mujeres.<sup>16</sup> El Convenio de Estambul se convirtió en un símbolo en un debate más amplio sobre la igualdad de género como valor fundamental de la UE. El Gobierno húngaro también calificó el Convenio de Estambul como una amenaza para los valores familiares y un ejemplo de «ideología de género».

Los movimientos de derecha fuera de Europa también han promovido la oposición a la «ideología de género». En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2019 prometiendo combatirla, así como lo «políticamente correcto», como parte de su defensa de los valores familiares. La tendencia general en América Latina ha sido que el género se convierta en una línea divisoria central y simbólica en la política. Las promesas de proteger a la familia del desorden moral ocupan un lugar central, y existe una presentación estratégica del género como

una ideología que amenaza el orden natural y los valores nacionales.<sup>17</sup> El *genderbashing* es, por lo tanto, otro fenómeno generalizado en que líderes autoritarios invocan estratégicamente el género como símbolo de la influencia extranjera impuesta y de la decadencia moral. De este modo, dicho ataque se utiliza para promover la independencia, el patriotismo y los valores familiares tradicionales.

## El uso estratégico del género

Los líderes autoritarios utilizan un amplio repertorio de estrategias para mantenerse en el poder, desde la propaganda hasta la manipulación y la coacción directa. La estrategia que se utiliza en cada momento es una cuestión de análisis de costo-beneficio: los líderes buscan enfoques que prometan hacer lo máximo para mantenerse en el poder, incurriendo en el mínimo riesgo. Tanto los gobernantes como los opositores toman decisiones estratégicas basadas en los recursos disponibles y los costos probables. Los líderes autoritarios utilizan los recursos del gobierno siempre que se puede y, a menudo, ejercen control considerable sobre las herramientas de influencia y represión. Esto incluye las instituciones políticas, el sistema de justicia penal, los medios de comunicación, Internet y los profesionales de las relaciones públicas especializados en la construcción de marcas e imágenes.

El aspecto estratégico de la implementación de estas herramientas se hace más evidente si consideramos que los mismos gobiernos utilizan tanto *el genderwashing* como *el genderbashing*. Los líderes pueden cambiar la estrategia a lo largo del tiempo, en función de las necesidades políticas más recientes, o pueden mostrar caras diferentes a públicos diferentes al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. El hecho de que Putin haya intensificado su retórica sobre los valores tradicionales y haya aprobado una ley que prohíbe la propaganda LGTBIQ+, mientras ha decidido librar una guerra a gran escala contra Ucrania, no es una coincidencia, sino una estrategia. Putin afirma que lucha contra la

influencia de las ideas occidentales para defender un «mundo multipolar» menos dominado por los conceptos occidentales que muchas sociedades rechazan.

---

***El genderbashing es más que una forma clásica de «gobierno por el miedo»: es una estrategia para legitimar el gobierno autoritario ante la población del país, mientras atrae la atención positiva de sectores influyentes en el extranjero.***

---

Sin embargo, no siempre el mandatario ha pensado así. Putin solía hablar más positivamente sobre la igualdad de género, pero gradualmente se alejó de ese discurso. Sus mensajes sobre el género son deliberados, y lo que dice depende del electorado al que necesita convencer. A principios de la década de 2000, sus discursos en el Día Internacional

de la Mujer hacían hincapié en la igualdad salarial por trabajo igual, la necesidad de más mujeres en el gobierno y la responsabilidad conjunta de los padres en la crianza de los hijos.<sup>18</sup> Sin embargo, cuando fue necesario justificar la guerra contra Ucrania, el énfasis pasó a ser la protección de los valores nacionales rusos, y la «ideología de género» se presentó fácilmente en contra de esos valores.

En Nicaragua, las estrategias de *genderwashing* se combinaron con otras más cercanas al *genderbashing*, dirigidas a determinadas comunidades en momentos estratégicos. Durante décadas, los revolucionarios sandinistas tuvieron una relación conflictiva con la Iglesia católica, pero Ortega se dio cuenta, tras tres intentos frustrados de conquistar la presidencia, de que necesitaba a los votantes católicos si quería ganar en 2006. Durante la campaña de ese año, el FSLN formó un pacto informal con la Iglesia, acordando apoyar la prohibición del aborto en circunstancias muy específicas, como para salvar la vida de la mujer embarazada.<sup>19</sup> En octubre de 2006, un mes antes de las elecciones presidenciales, Nicaragua se convirtió en uno de los pocos países del mundo en aplicar la prohibición total del aborto. Esto ilustra cómo los enfoques

de género se incorporan en estrategias más amplias de búsqueda de poder y que los enfoques pueden ser distintos en situaciones diferentes.

En Uganda, bajo el mandato del presidente Yoweri Museveni (en el poder desde hace casi cuarenta años), parecen estar en marcha estrategias simultáneas de *genderwashing* y *genderbashing*, que varían no con el tiempo, sino entre ámbitos políticos y públicos. Museveni ha liderado la inclusión de las mujeres en la política. En lugar de ser el resultado de demandas desde abajo, esta inclusión se ha dado a través de cuotas de género impuestas desde arriba, descritas como un favor que el gobierno concede a las mujeres para mostrar al mundo el compromiso de Museveni con la democracia.<sup>20</sup>

Aunque la representación política de las mujeres se ha institucionalizado, no se han garantizado los derechos de otras personas con identidades de género marginadas. En mayo de 2023, Museveni firmó una de las leyes anti-LGTBIQ+ más severas del mundo, que incluye la pena de muerte para los actos homosexuales. Museveni ya había dicho anteriormente que, aunque se opone a la homosexualidad, no considera que sea una cuestión prioritaria. Antes de promulgarla, temía que la ley pudiera perjudicar las relaciones de Uganda con donantes e inversionistas.<sup>21</sup> Sin embargo, la ley cuenta con un amplio apoyo dentro de Uganda, donde se considera en general como una señal de independencia respecto a Occidente. Ante la condena internacional generalizada, los políticos ugandeses citan la ley para distanciarse de Occidente y demostrar que no se dejarán intimidar ni amenazar. «Nos hemos mantenido firmes en la defensa de la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo», declaró la presidenta del Parlamento, Anita Among.<sup>22</sup>

Como sugieren estos casos, es probable que diferentes cuestiones relacionadas con las reformas de igualdad de género se movilicen con diferentes fines. En consonancia con la ambigüedad de la palabra «género», la «política de igualdad de género» es una etiqueta amplia que abarca una variedad de políticas. Las cuestiones específicas que reciben un amplio apoyo o provocan resistencia varían de un país a

otro. Dicho esto, análisis recientes indican que, en el panorama político contemporáneo, las políticas relacionadas con la sexualidad y la familia (como los derechos reproductivos, las políticas familiares, la violencia contra las mujeres y la educación sexual) se enfrentan a una resistencia particularmente fuerte, mientras que las políticas económicas relacionadas con el género (como las que prohíben la discriminación y abren el mercado laboral) suelen generar menos controversias.<sup>23</sup> Las cuestiones que abordan la sexualidad y la familia se tienden particularmente a utilizar en estrategias de *genderbashing*, mientras que las cuestiones relacionadas con la igualdad de género en las esferas económica y política son más útiles cuando los líderes autoritarios buscan involucrarse en *genderwashing*.

### **Conciliación del *genderwashing* y *genderbashing***

¿Cómo se pueden entender el *genderwashing* y el *genderbashing*, dos estrategias aparentemente contradictorias? Proponemos que la historia de éxito global del género explique los enfoques divergentes de los líderes autoritarios. La igualdad de género ha pasado a considerarse una norma liberal-democrática fundamental.<sup>24</sup> Los líderes autoritarios han aprendido que las organizaciones internacionales y los donantes de mentalidad liberal valoran tanto la igualdad de género que desean verla incorporada en todas partes y por todos. El éxito de la igualdad de género también se ha convertido en un símbolo importante para un conjunto más amplio de valores fundamentales asociados con la ONU, la UE y los países occidentales en general. Los líderes autoritarios conocen el poder de utilizar el género como símbolo y señal.

A menudo, estos líderes sienten que pueden beneficiarse asociándose con la democracia sin permitir una mayor competencia por el poder al adoptar reformas superficiales de igualdad de género. El *genderwashing* como estrategia cobra importancia cuando los regímenes autoritarios buscan ayuda, comercio y reconocimiento de las organizaciones



internacionales y de Occidente. En cambio, cuando los líderes autoritarios quieren distanciarse de las organizaciones internacionales o de las potencias occidentales, las cuestiones de género tienen un significado distinto en plenas restricciones contra los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos LGTBIQ+ y la «ideología de género». La

búsqueda de ayuda y comercio recibe menos énfasis que la afirmación del régimen de estar protegiendo los valores patrióticos y tradicionales, manteniendo a raya la influencia externa y el declive moral.<sup>25</sup>

Tanto el *genderwashing* como el *genderbashing* son ejercicios de poder con el objetivo de legitimar el régimen autoritario. Nye define el «poder» como «la capacidad de influir en los demás para obtener los resultados deseados».<sup>26</sup> Una suposición fundamental es que lo que líderes autoritarios desean ante todo es permanecer en el cargo y seguir gobernando. Tradicionalmente, el manual del dictador sugiere que la mejor manera de lograrlo es mediante herramientas de *hard power*, como el miedo y la coacción.<sup>27</sup> El *genderbashing* es, al menos en parte, similar a estos métodos tradicionales, ya que busca infundir miedo al retratar a grupos como las feministas, las personas transgénero y las minorías sexuales como enemigos.

Tanto el *genderbashing* como el *genderwashing* utilizan la palabra «género», pero los vemos como el resultado de dos tipos opuestos de lógica autocrática, tal y como describe Johannes Gerschewski.<sup>28</sup> El *genderbashing* sigue una estrategia de politización excesiva vinculada al *hard power*: el régimen amplifica narrativas como «nosotros contra ellos», retratando la «ideología de género» como una amenaza a las familias y los niños y movilizándolo el apoyo mediante la propaganda y la desinformación.

---

***El genderwashing, aunque sea superficial, también puede crear oportunidades para las mujeres y los actores feministas (vinculados al gobierno) que buscan darle sentido a los conceptos vacíos de empoderamiento que ofrece el gobierno.***

---

El *genderwashing*, por otro lado, refleja una lógica despolitizante basada en *soft power*: al adoptar políticas de igualdad de género populares y aparentemente apolíticas, los líderes autoritarios intentan conseguir lo que quieren mediante la atracción, en lugar de la coacción. Con el fin de la Guerra Fría y el auge de la globalización y las tecnologías de la información, estos recursos de *soft power* cobraron importancia. Las democracias occidentales esperaban que la integración de los regímenes autoritarios en un orden internacional liberal los hiciera más receptivos a la reforma política y, con el tiempo, los transformara en democráticos. En cambio, los líderes autoritarios aprendieron unos de otros y secuestraron el *soft power* para socavar los principios democráticos.<sup>29</sup>

El aprendizaje autoritario también implica que la gestión de la imagen nacional se haya convertido en una herramienta cada vez más importante para competir por las ideas y la opinión pública. Aunque clasificarse como igualitario ha atraído durante mucho tiempo una atención positiva y prestigio internacional, las dinámicas de poder están cambiando de manera que favorecen algunas formas no tan liberales de imagen nacional. Señalar el distanciamiento del orden mundial liberal es una forma de gestión de la imagen. Cuando los líderes autoritarios critican públicamente lo que denominan «ideología de género», están señalando a sus homólogos iliberales de otros países que están a su lado en una «guerra cultural» global.

Los líderes autoritarios compiten por influir en la forma en que las personas perciben el mundo. La fragmentación de los canales de información permite manipular la comprensión de cuestiones como el género, difundiendo mensajes distorsionados y desinformación para crear el espantajo de la «ideología de género» o para convertir el género en un «fantasma global» que absorbe una serie de miedos.<sup>30</sup> Así, el *genderbashing* es más que una forma clásica de «gobierno por el miedo»: es una estrategia para legitimar el gobierno autoritario ante la población del país, mientras atrae la atención positiva de sectores influyentes en el extranjero.

## Implicaciones para la democracia y la igualdad de género

Los defensores de la democracia y la igualdad de género deben comprender los usos que los líderes autoritarios hacen del *genderwashing* y el *genderbashing*. Ambas son estrategias destinadas a quitarle la atención a (o justificar) las violaciones de las normas e instituciones democráticas. El *genderwashing* y el *genderbashing* constituyen amenazas para la democracia.

¿De qué manera y cuándo son también amenazas reales para la igualdad de género? El *genderbashing* es claramente perjudicial por sí mismo. Deslegitima las políticas de género, crea amenazas ficticias, como la «ideología de género», y demoniza a ciertos grupos y comunidades como perjudiciales para la sociedad. Además, cuando la retórica autoritaria sustenta políticas como la ley anti-LGTBIQ+ de Uganda o la prohibición de los estudios de género en Hungría, los resultados son tangiblemente peligrosos. Cuando Turquía se retiró del Convenio de Estambul en 2021, el objetivo puede haber sido mostrar al mundo la independencia nacional y la resistencia a la influencia externa, pero el resultado real y perjudicial fue la reducción de los niveles de protección contra la violencia para las mujeres y las niñas. Esta reducción tuvo una dimensión formal y jurídica, pero también se produjo en el ámbito de las normas e ideas sobre el género y la violencia, justificando la discriminación e incluso la violencia contra los grupos vulnerables.

El *genderwashing* suele ser más difícil de detectar, porque aparentemente promueve la igualdad de género. ¿Cómo pueden las reformas de igualdad de género, aunque sean superficiales, ser perjudiciales para la igualdad de género? Si el discurso de igualdad de género inherente al *genderwashing* envía señales de que las mujeres están protegidas, esto puede crear una falsa sensación de seguridad potencialmente peligrosa. Las reformas realizadas solo por apariencia no suelen generar muchos resultados. Como lo dijo un profesional de relaciones públicas que se arrepintió de haber gestionado la imagen de regímenes autoritarios: «Es

casi como un engaño. No se puede rociar perfume sobre el excremento. Olerá bien durante un tiempo, pero al final huele como realmente es». <sup>31</sup>

En una nota más positiva, también hay casos en los que el *genderbashing* ha dado lugar a protestas internacionales, así como a la movilización feminista nacional y transnacional. Reconocer sus componentes estratégicos también puede ser útil para participar en la comunicación y la oposición eficaz. El *genderwashing*, aunque sea superficial, también puede crear oportunidades para las mujeres y los actores feministas (con vínculos con el gobierno) que buscan darle sentido a los conceptos vacíos de empoderamiento que ofrece el gobierno. Pero para que estos efectos positivos se produzcan, el *genderwashing* y el *genderbashing* deben verse primero como lo que son efectivamente: estrategias autoritarias.

Es importante comprender que el género se ha convertido en una estrategia generalizada y versátil para los líderes autoritarios si queremos, por una parte, revelar las estrategias y, por otra, lanzar contraestrategias relevantes y eficaces. Por ejemplo, si los defensores de la democracia y los activistas por los derechos de las mujeres se limitan a retratar a los gobiernos que practican el «*genderbashing*» como misóginos ideológicos, corren el riesgo de exacerbar la polarización, dejando poco espacio para el diálogo y la negociación. Sin embargo, si los defensores de la democracia y los derechos de las mujeres reconocen que las posiciones sobre las cuestiones de género pueden ser volubles y cambiantes, las contraestrategias pueden adaptarse de manera más flexible, buscando oportunidades para promover la igualdad de género y la democracia.

## Notas

Los autores desean agradecer el apoyo del Consejo Sueco de Investigación (beca n.º 2024-01479), del Riksbankens Jubileumsfond (beca n.º SAB23-0076) y del Colegio Sueco de Estudios Avanzados.

- 1 Kinga Rajzak, «Conservative Backlash Against Women's Rights in Hungary» (Reacción conservadora contra los derechos de las mujeres en Hungría), *Insight Hungary*, 2020, <https://insighthungary.444.hu/2020/12/14/conservative-backlash-against-womens-rights-in-hungary>.
- 2 Eszter Zalan, «Los diputados al Parlamento Europeo debaten el programa de la Presidencia de Hungría con el primer ministro Viktor Orbán», comunicado de prensa (Parlamento Europeo, 9 de octubre de 2024), <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20241003IPR24420/meps-debate-hungary-s-presidency-programme-with-prime-minister-viktor-orban>.
- 3 Daniela Donno, Sara Fox y Joshua Kaasik, «Incentivos internacionales para los derechos de las mujeres en las dictaduras», *Comparative Political Studies* 55 (marzo de 2022): 451-92.
- 4 Susan Faludi et al., «Una conversación con Susan Faludi sobre la reacción, el trumpismo y el #MeToo», *Signs: Revista de Mujeres en la Cultura y la Sociedad* 45 (enero de 2020): 336-45.
- 5 Jelena Lončar, «Autocratic Genderwashing: Gender-Equality Reforms in Serbia», *Politics and Governance* (28 de mayo de 2024).
- 6 Joseph S. Nye, «Soft Power», *Foreign Policy* 80 (otoño de 1990): 153-71; Joseph S. Nye, «Soft Power: The Evolution of a Concept», en *Essays on Evolutions in the Study of Political Power* (Londres: Routledge, 2021).
- 7 Dorottya Szikra y Kerem Gabriel Öktem, «¿Está surgiendo un Estado del bienestar iliberal? Esfuerzos y trayectorias en materia de bienestar bajo el retroceso democrático en Hungría y Turquía», *Journal of European Social Policy* 33, n.º 2 (2023): 201-215.

- 8 Lauren Kent y Samantha Tapfumaneyi, «Hungary's PM Bans Gender Study at Colleges Saying 'People Are Born Either Male or Female'», CNN, 19 de octubre de 2018, <https://www.cnn.com/2018/10/19/europe/hungary-bans-gender-study-at-colleges-trnd/index.html>.
- 9 Phillip Ayoub y Kristina Stoeckl, «The Global Resistance to LGBTIQ Rights», *Journal of Democracy* 35 (enero de 2024): 59-73 [Ed. bras.: «La resistencia global a los derechos LGTBIQ», *Journal of Democracy en portugués* 13, n.º 1 (mayo de 2024)].
- 10 Lorna Hutchinson, «Los Estados miembros de la UE expresan su "grave preocupación" por la discriminación LGBTIQ en Hungría», *The Parliament*, 2018, <https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/eu-member-states-express-grave-concern-over-hungarys-lgbtqi-discrimination>.
- 11 Erica Chenoweth y Zoe Marks, «Revenge of the Patriarchs» (La venganza de los patriarcas), *Foreign Affairs*, 8 de marzo de 2022, <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs>.
- 12 Elżbieta Korolczuk y Agnieszka Graff, «Gender as 'Ebola from Brussels': The Anticolonial Frame and the Rise of Illiberal Populism», *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 43 (junio de 2018): 797-821.
- 13 Presidencia de la República de Turquía, «Declaración sobre la retirada de Turquía del Convenio de Estambul», 2021, <https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/statement-regarding-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention>.
- 14 «Turquía abandona el acuerdo sobre la violencia contra las mujeres», *Deutsche Welle*, 2021, <https://www.dw.com/en/turkey-quits-istanbul-convention-on-violence-against-women/a-56936323>.
- 15 Tuğba Bayar, «La retirada de Turquía del Convenio de Estambul: el régimen internacional de derechos humanos frente a la supervivencia autoritaria», *Turkish Studies* 25, n.º 1 (2024): 22-42.
- 16 Hürcan Asli Aksoy, «What Lies Behind Turkey's Withdrawal from the Istanbul Convention?», *Stiftung Wissenschaft Und Politik*, 2021, <https://www.swp-berlin.org/publikation/what-lies-behind-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention>.

- 17 Flávia Biroli y Mariana Caminotti, «The Conservative Backlash Against Gender in Latin America», *Politics and Gender* 16, n.º 1 (marzo de 2020).
- 18 Janet Johnson et al., «Señales contradictorias: lo que dice Putin sobre la igualdad de género», *Asuntos postsoviéticos* 37, n.º 6 (2021): 507-525.
- 19 Karen Kampwirth, «Aborto, antifeminismo y el regreso de Daniel Ortega: ¿política de izquierda en Nicaragua?», *Latin American Perspectives* 35, n.º 6 (2008).
- 20 Anne Marie Goetz y Shireen Hassim, eds., *No Shortcuts to Power: African Women in Politics and Policy Making* (Londres: Zed, 2003); Aili Mari Tripp, «La instrumentalización de las líderes opositoras para afianzar el régimen autoritario: el caso de Uganda», *Politics and Governance* 11, n.º 1 (2023): 152-63.
- 21 «La nueva ley contra la homosexualidad de Uganda prohíbe la identificación como LGTBIQ», Al-Jazeera, 22 de marzo de 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/3/22/uganda-passes-tough-antigay-law-bans-identification-as-lgbtq>.
- 22 AFP, «El presidente de Uganda promulga la ley anti-LGTBIQ más dura del mundo», France24, 30 de mayo de 2023, <https://www.france24.com/en/africa/20230530-condemnations-as-uganda-s-presidents-sign-harsh-anti-lgbtq-bill-into-law>.
- 23 Saskia Brechenmacher, «The New Global Struggle over Gender, Rights and Family Values», 2025, Carnegie Endowment for International Peace, <https://carnegieendowment.org/research/2025/06/the-new-global-struggle-over-gender-rights-and-family-values>; Andrea Krizsan y Conny Roggeband, «Hacia un marco conceptual para las luchas por la democracia en los Estados en retroceso: la política de igualdad de género en Europa Central y Oriental», *Politics and Governance* 6, n.º 3 (2018): 90-100.
- 24 Donno, Fox y Kaasik, «Incentivos internacionales para los derechos de las mujeres en las dictaduras».
- 25 Ayoub y Stoeckl, «Global Resistance to LGBTIQ Rights»; Gino Pauselli y María-José Urzúa, «Why Autocracies Fear LGBTQ+ Rights», *Journal of Democracy* 35 (abril de 2024): 80-92 [Ed. bras.: «Por que as autocracias temem os direitos LGBTQ+», *Journal of Democracy en português* 13, n.º 2 (octubre de 2024)].

- 26 Nye, «Soft Power», 2021, 197.
- 27 Sergei Guriev y Daniel Treisman, *Spin Dictators. The Changing Face of Tyranny in the 21st Century* (Princeton: Princeton University Press, 2022).
- 28 Johannes Gerschewski, *The Two Logics of Autocratic Rule* (Cambridge University Press, 2023).
- 29 Christopher Walker, «The Authoritarian Threat: The Hijacking of ‘Soft Power’», *Journal of Democracy* 27 (enero de 2016): 49-63 [Ed. bras.: «O sequestro do ‘soft power’», *Journal of Democracy en portugués* 5, n.º 5 (mayo de 2016)].
- 30 Judith Butler, *¿Quién teme al género?* (Nueva York: Farrar, Strauss and Giroux, 2024).
- 31 Robert Booth, «¿Esta imagen te hace pensar en Ruanda?», *Guardian*, 3 de agosto de 2010, sección Media, <https://www.theguardian.com/media/2010/aug/03/london-pr-rwanda-saudi-arabia>.



# Crimen, represión y democracia en Ecuador

*Galo Mayorga y Kai M. Thaler*

*Galo Mayorga es doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Kai M. Thaler es profesor adjunto de Estudios Globales en la California University, en Santa Bárbara.*

**T**ras años como un oasis de relativa paz en una región devastada por la violencia relacionada con las drogas, las insurgencias y la represión estatal, Ecuador ha visto cómo su tasa de homicidios se multiplicaba más de siete veces desde 2018. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que la tasa de homicidios intencionales del país fue de 45,7 por cada 100.000 habitantes en 2023, la cuarta más alta del mundo. En 2018, la tasa era de solo 6. Al mismo tiempo, la democracia de Ecuador se mantuvo crónicamente inestable. En lugar de consolidarse otra vez tras un período de erosión democrática bajo el presidente populista de izquierda Rafael Correa (2007-2017), la democracia de Ecuador siguió dividida por el populismo y la corrupción, y corre el riesgo de sufrir una erosión aún mayor.<sup>1</sup>

El actual presidente es Daniel Noboa, de 38 años, que llegó al cargo mediante unas elecciones anticipadas en 2023 y se aseguró un mandato completo de cuatro años en abril de 2025 (ganó la segunda vuelta en ambas ocasiones). Noboa ha militarizado la lucha contra la delincuencia, pero las pandillas siguen siendo poderosas en este país de unos dieciocho millones de habitantes. En esta vulnerable situación de debilidad del Estado y fragilidad democrática, Ecuador corre el riesgo de agravar la

delincuencia y los abusos del poder político. Noboa puede optar a un segundo mandato de cuatro años, por lo que podría permanecer en el cargo hasta 2033. Se ha mostrado cada vez más asertivo, empleando fuerzas militares internamente para garantizar la seguridad (un objetivo aún no alcanzado) y desafiando a las instituciones liberales y democráticas cuando se interponen en su camino. Para reforzar su agenda de seguridad y reformular el sistema político, ha recurrido a referéndums. La democracia de Ecuador se encuentra ahora presionada entre la violencia y el miedo sembrados por las organizaciones criminales y la presión populista por más poder de un presidente que ha sido agresivo militarmente, pero aún ineficaz en la lucha contra la delincuencia.

¿Por qué la violencia se ha apoderado de Ecuador y Noboa representa una grave amenaza a la democracia? En su afán por erradicar la influencia de Correa y hacer que el país gire hacia la derecha, los dos presidentes que precedieron a Noboa (Lenín Moreno y Guillermo Lasso) desmantelaron importantes agencias de seguridad y destruyeron la capacidad del Estado. Este retroceso del Estado dio pie a que las organizaciones criminales se expandieran, lo que hicieron a pesar de la postura cada vez más beligerante del gobierno.

En su afán por reprimir la delincuencia, Noboa ha mostrado un desprecio por las libertades civiles y políticas, que ahora combina con medidas para desafiar la independencia judicial y limitar la oposición. En toda Latinoamérica, los jefes del Ejecutivo han citado la lucha contra la delincuencia como motivo para concentrar el poder y ejercerlo con controversias.<sup>2</sup> Noboa ha tratado de imitar al populista Nayib Bukele, de El Salvador, pero hasta ahora con menos éxito en la reducción de la violencia y también con menos popularidad: Bukele redujo a la mitad la altísima tasa de homicidios de El Salvador durante su primer año como presidente (2019-2020) y fue reelegido en 2024 con casi el 85 % de los votos. Noboa aún no ha logrado reducir significativamente la impactante tasa de homicidios de Ecuador y obtuvo poco menos del 56 % de los votos en la segunda vuelta de 2025.

Noboa logró que los votantes aprobaran, en un referéndum celebrado en abril de 2024, reformas legales y constitucionales relativas a la seguridad, que permitían que las fuerzas militares permanecieran permanentemente desplegadas en las calles y las cárceles, que se extraditaran a los ciudadanos y que se alargaran las penas criminales. Sin embargo, estas medidas no lograron reducir la violencia, y su segundo intento de utilizar un referéndum para aprobar su agenda fue derrotado el 16 de noviembre de 2025.<sup>3</sup> Los votantes rechazaron una asamblea constituyente que podría reescribir la constitución, reformas que probablemente habrían reducido la competencia política y permitido el regreso de bases militares extranjeras a Ecuador. Los ecuatorianos ahora esperan a ver si Noboa moderará su tono o se negará a hacer concesiones sobre su enfoque de línea dura.

A pesar de toda su obstinación, Noboa ha demostrado ser lo suficientemente astuto como para negociar y hacer concesiones cuando siente que los vientos políticos se vuelven en su contra. Por lo tanto, es posible que tanto los actores ecuatorianos como los internacionales encuentren formas de trabajar con él para combatir la delincuencia violenta —lo que es claramente una necesidad urgente— y mantener al país dentro de los límites democráticos.

## **Aumento de la delincuencia violenta y ascenso de Noboa**

El ascenso de Noboa se debe en gran parte a los fracasos de sus predecesores. El gobierno populista de izquierda de Correa, aunque más conocido por su enfoque en cambios económicos y sociales progresistas, abordó la cuestión de la seguridad reformando los tribunales y la policía con el objetivo de detener y reducir la delincuencia. Entre 2009 y 2017, se destinaron más de 34.000 millones de dólares a gastos en el sector de la seguridad, lo que equivale a alrededor del 13 % del gasto público total durante el mandato de Correa.

Correa trabajó para aumentar la presencia policial y promover un enfoque de policía comunitaria que, se esperaba, fortalecería las relaciones con los ciudadanos de todo el país. Se mejoraron las condiciones de los presos y sus familias, y se produjo un cambio hacia un modelo de justicia rehabilitadora. A principios de 2014, la adopción de un nuevo código penal amplió la responsabilidad penal y las sanciones para una serie de delitos. Se crearon nuevas instituciones y procedimientos para coordinar la aplicación de estas medidas. Lo más controvertido fue que Correa negoció con las pandillas con la esperanza de prevenir la violencia y ofrecer empleos legítimos a sus miembros.<sup>4</sup> Trabajando con mediadores externos para generar confianza y credibilidad, los Ministerios de Justicia e Interior firmaron un acuerdo informal especialmente exitoso con los Latin Kings y otras pandillas. Los miembros de las pandillas que se desmovilizaron pasaron a formar parte de grupos de la sociedad civil que recibieron acceso prioritario a financiamiento y programas sociales, y el gobierno amplió la autoridad del Estado en las zonas donde las pandillas se habían retirado.

Los críticos argumentan que Correa fue demasiado indulgente con el crimen. Destacan su decisión de 2009 de no prorrogar un acuerdo que permitía a los aviones de patrulla estadounidenses utilizar la base aérea de Manta y su falta de inversión en vigilancia aérea, y marítima, lo que habría dado más libertad a los narcotraficantes, especialmente a lo largo de la costa. Los detractores también señalan la colaboración de funcionarios corruptos con pandillas y narcotraficantes, así como políticas migratorias débiles que podrían haber permitido que delincuentes extranjeros se instalaran en Ecuador.<sup>5</sup> Sin embargo, el conjunto general de cambios en la política de seguridad de Correa se ha asociado a un éxito innegable. Durante su década en el cargo, la tasa de homicidios se redujo en casi dos tercios, pasando de 15,8 por cada 100.000 habitantes en 2007 a poco menos de 6 en 2017. Este descenso no fue el resultado de una sola política, sino de un amplio esfuerzo liderado por el Estado para reconfigurar las instituciones de seguridad ciudadana, fortalecer

la capacidad del Estado y recuperar el control territorial de los grupos delictivos organizados.

Correa planeaba seguir ejerciendo el poder a través de Moreno, su vicepresidente y sucesor elegido a dedo. Sin embargo, al asumir el cargo en 2017, Moreno dejó de lado a Correa y su política de izquierda, con el objetivo de marginar y desmantelar las instituciones estatales que Correa había fundado.<sup>6</sup> Moreno lo hizo descartando los programas de policía comunitaria que habían extendido la influencia del Estado por todo el país y el enfoque de rehabilitación para tratar a los presos, al tiempo que desorganizó y desmanteló los principales órganos de coordinación de seguridad que Correa había creado y utilizado de forma proactiva. La reestructuración y los recortes erosionaron la capacidad del Estado, eliminando o debilitando la Secretaría Coordinadora de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, la administración del sistema penitenciario por parte de la Secretaría de Justicia, la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, el sistema de vigilancia ECU-911 y la Unidad de Análisis Financiero y Económico para combatir el lavado de dinero. El Estado retrocedió en la prestación y el control de la seguridad en gran parte del país y en las cárceles, y cuando el gobierno de Moreno intentó abordar las cuestiones de seguridad, descubrió que las capacidades se habían reducido.

Mientras tanto, Correa fue procesado por cargos de corrupción y condenado *en ausencia* en 2020, aunque Correa sostiene que los cargos tienen motivaciones políticas. Ha recibido asilo en Bélgica. Moreno trató de presentarse como una fuerza estabilizadora tras la polarización y las acusaciones de socavar la democracia que marcaron los años de Correa, pero, en cambio, Ecuador sufrió la peor ola de violencia que jamás se había visto.

La escalada de masacres continuó bajo la presidencia de Lasso. Moreno derrotó al empresario de derecha por menos de 3 puntos porcentuales en 2017, pero Lasso se recuperó y ganó en 2021.<sup>7</sup> Continuó el giro de Ecuador hacia la derecha y la reducción del poder central

del Estado, especialmente en el sector de la seguridad, cada vez más aislado, y aumentó la inestabilidad política.

Lasso luchó por ganarse el apoyo de la población y gastó mucha energía reprimiendo las protestas, sin lograr abordar eficazmente la economía o la delincuencia. Anunció un enfoque de mano dura en materia de seguridad, pero el país siguió con más masacres. Las pandillas locales practicaron la violencia organizada y promovieron protestas en las cárceles, ejerciendo un mayor control tras las rejas. También se expandieron y aumentaron sus vínculos con organizaciones criminales colombianas, mexicanas y europeas.<sup>8</sup> La decisión de Lasso en 2023 de revocar la prohibición de Correa de 2011 sobre la tenencia de armas de fuego por parte de civiles minó aún más la seguridad. La debilidad del Estado brindó oportunidades a los delincuentes en los puertos, los bancos (útiles para el lavado de dinero) y las esferas del gobierno y la policía. El negocio principal era el envío de cocaína a Europa y Estados Unidos.

Entre 2019 y 2023, la tasa de homicidios en Ecuador se disparó, como se ha descrito anteriormente. Grandes pandillas, como Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos, tomaron el control del espacio operativo cedido por la debilidad del Estado, mientras que las pandillas más pequeñas buscaban conquistar sus propios territorios. Moreno y Lasso emplearon poderes de emergencia y redujeron las restricciones a la policía, pero el fin de la coordinación del sector de seguridad que Correa había establecido les perjudicó, y la violencia aumentó vertiginosamente. La violencia se concentró principalmente en la provincia de Guayas y en la región portuaria alrededor de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador. Sin embargo, a pesar de los intentos de represión por parte de los sucesivos presidentes, la violencia se extendió por todo el país, incluida la capital, Quito, que se encuentra en el interior.

Cuando la Asamblea decidió iniciar un proceso de destitución contra Lasso en 2023, en medio de acusaciones de corrupción y una crisis de seguridad cada vez más grave, este disolvió unilateralmente el poder legislativo y convocó nuevas elecciones legislativas y presidenciales, lo que minó aún más su capacidad para gobernar durante el resto de su

mandato.<sup>9</sup> El descontento con las élites políticas y los temores de un aumento de los homicidios — incluido el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito en agosto de 2023 — llevaron a un pueblo cansado a depositar sus esperanzas en Daniel Noboa, hijo de un multimillonario (Álvaro Noboa) que se había presentado sin éxito a la presidencia en cinco ocasiones entre 1998 y 2013.

Con una campaña basada en promesas de combatir la corrupción, impulsar el crecimiento económico y reformar el sistema judicial, Daniel Noboa declaró poco después de asumir el cargo, en noviembre de 2023, que el país se encontraba en estado de «conflicto armado interno». Inspirado por el ataque de Bukele a las pandillas en El Salvador, Noboa reforzó la política de mano dura, con la militarización de la campaña contra las pandillas y estrategias que retan a las libertades democráticas, incluyendo declaraciones de estado de emergencia tanto a nivel nacional como en varias regiones del país.

Sin embargo, la debilidad del Estado y los esfuerzos de Moreno y Lasso por fragmentar los sectores de seguridad y el poder judicial dificultaron la lucha contra el crimen organizado.<sup>10</sup> Según datos del Ministerio del Interior, entre 2023 y el tercer trimestre de 2025 se produjeron 21.301 homicidios. El 61 % de estos (13.053 muertes) se produjeron entre enero de 2024

---

***Con una campaña basada en promesas de combatir la corrupción, impulsar el crecimiento económico y reformar el sistema judicial, Daniel Noboa declaró poco después de asumir el cargo, en noviembre de 2023, que el país se encontraba en estado de «conflicto armado interno».***

---

(mes en el que Noboa declaró la guerra interna) y agosto de 2025. Este intervalo de veinte meses tiene ahora la terrible distinción de ser el período más mortífero de la historia moderna de Ecuador. En el tercer trimestre de 2025, las muertes violentas ascendieron a 6.020, lo que supone un aumento del 19 % respecto a las 4.970 registradas en el mismo periodo de 2024.

Noboa envió fuerzas militares a las cárceles en 2024 y comenzó a retirar parcialmente las tropas en agosto de 2025. Plagadas de corrupción y narcotráfico, las cárceles siguieron siendo centro de la violencia durante todo ese tiempo. Los enfrentamientos entre pandillas en las cárceles de Esmeraldas y Machala dejaron más de treinta muertos en una sola semana en septiembre de 2025. A principios de noviembre, 31 detenidos murieron en nuevos enfrentamientos entre pandillas en Machala. En teoría, el Estado debería ser capaz de controlar las cárceles más fácilmente que las calles, pero en Ecuador las cárceles parecen estar más allá de la capacidad de control incluso de las fuerzas armadas. Aunque las fuerzas de seguridad no han logrado reducir la tasa de homicidios, han cometido abusos durante la represión de las pandillas, lo que ha provocado condenas e investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Noboa, por su parte, es conocido por mostrar poca consideración por los procedimientos institucionales normales. Durante la campaña de 2025, por ejemplo, se vio obligado por ley a ceder el poder a su vicepresidente, pero se negó a hacerlo. Tenía un adversario de derecha en la carrera presidencial que defendía una represión aún más dura contra la delincuencia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) consideró a esa persona inelegible. En la segunda vuelta, las encuestas mostraban una reñida contienda entre Noboa y Luisa González, del partido de Correa, contra quien Noboa también se había enfrentado en la segunda vuelta de 2023. Noboa aumentó el gasto social para ganar votos, y el día de la segunda vuelta surgieron acusaciones de que los decretos de emergencia estaban limitando la libertad de movimiento de los ciudadanos en algunas zonas donde la opinión pública seguía siendo muy favorable a Correa. El 13 de abril de 2025, Noboa sorprendió a los observadores al obtener más del 55 % de los votos, mejorando su desempeño en la segunda vuelta de 2023. También salió de las elecciones de 2025 con una coalición mayoritaria en la Asamblea.



## **Conflicto con los tribunales y represión de las protestas**

Hay dudas sobre si Noboa o cualquier otro político latinoamericano podrá repetir el éxito de Nayib Bukele en reprimir a las pandillas, ganar popularidad y consolidar un régimen fuertemente autoritario, especialmente cuando los pactos preexistentes con las pandillas permitieron que la represión de Bukele fuera tan exitosa.<sup>11</sup> Los sucesores de Correa descartaron su disposición a ofrecer incentivos a las pandillas para que depusieran las armas, y Noboa aún no ha ganado la batalla contra el crimen organizado ni ha conseguido el apoyo abrumador de la población o la mayoría legislativa que permitió a Bukele desarrollar una dictadura. Independientemente de ello, Noboa está atacando ahora las instituciones democráticas de la misma manera que lo hizo Bukele.

Las amenazas más evidentes de Noboa provienen de su ataque a la independencia judicial. Entró en conflicto con los tribunales, que consideraron inválida su declaración de conflicto armado interno e impugnaron sus decretos de emergencia, e ignoró las decisiones que le obligaban a abandonar el poder durante la campaña. Cuando, en agosto de 2025, la Corte Constitucional invocó cuestiones de derechos humanos y decidió suspender partes de las nuevas leyes de seguridad que Noboa había defendido, el presidente optó por la escalada. Con soldados y un tanque estacionado alrededor del edificio del Tribunal, Noboa encabezó una manifestación masiva el 12 de agosto frente al lugar, condenando la decisión y culpando a los jueces de exacerbar la crisis de seguridad.<sup>12</sup> Pidió una enmienda constitucional para modificar el artículo 431 de la Constitución de 2008, que protege a los jueces del Tribunal Constitucional de la destitución o el despido, y crea un proceso para destituirlos que es supervisado por el poder judicial. En Quito aparecieron vallas publicitarias atacando al tribunal; Noboa afirmó no tener idea de quién las estaba pagando.

La Corte Constitucional intentó resistir la presión de Noboa. A principios de septiembre de 2025, rechazó varias cuestiones propuestas para un plebiscito que Noboa había convocado para el 16 de noviembre,

incluida la revocación de una cuestión sobre la destitución de jueces. En respuesta, Noboa decretó, a mediados de septiembre, un referéndum para aprobar la convocatoria de una asamblea constituyente. El tribunal suspendió este intento de eludir la ley, a pesar de que la policía irrumpió en su edificio en respuesta a una supuesta amenaza de bomba. El CNE y la oficina jurídica de la presidencia presentaron entonces un decreto revisado que abordaba algunas, pero no todas, las deficiencias constitucionales señaladas por el tribunal. En un proceso llevado a cabo apresuradamente, la Corte Constitucional decidió que el referéndum podía seguir adelante, ya que la iniciativa de Noboa cumplía los requisitos formales.

Aunque menos conflictivo, este episodio tiene paralelismos con los acontecimientos de febrero de 2020 en El Salvador, cuando Bukele irrumpió en la Cámara Legislativa con cuarenta soldados armados y se sentó en la silla del presidente para intimidar a los legisladores y que aprobaran su propuesta de nueva ley de seguridad. Noboa cuenta ahora con la mayoría en la Asamblea. Por lo tanto, si los tribunales siguen creando obstáculos, podría intentar imitar la maniobra de Bukele en mayo de 2021 de hacer que el Legislativo destituyera a los jueces.

Los esfuerzos de Noboa por controlar el poder judicial se producen en medio de críticas relacionadas con abusos de los derechos humanos, intentos de limitar la campaña de la oposición y acusaciones de corrupción al servicio de los negocios de la familia Noboa. Los líderes y activistas indígenas se han quejado de la actuación excesiva de las fuerzas de seguridad y se oponen a los nuevos proyectos mineros que el presidente está promoviendo. En agosto de 2025, Leonidas Iza, exlíder de la CONAIE, la poderosa coalición indígena de Ecuador, denunció que el gobierno lo estaba espionando y posiblemente intentando asesinarlo. Otro líder indígena, el excandidato presidencial Yaku Pérez, acusó formalmente a Noboa y a su esposa de negociaciones ilícitas con una empresa minera canadiense que buscaba la aprobación de un nuevo proyecto.

En septiembre de 2025, Noboa anunció medidas de austeridad y recortó los subsidios a los combustibles, lo que elevó los precios del diésel. Cuando la CONAIE convocó una huelga nacional, Noboa declaró el estado de emergencia y el toque de queda en las principales provincias. Envío tropas a las ciudades más agitadas y luego declaró el estado de emergencia en todo el país. Haciendo caso omiso de las advertencias de la Corte Constitucional sobre violaciones de derechos, las fuerzas de seguridad impusieron toques de queda y realizaron detenciones arbitrarias, llegando incluso a salir a las calles en convoyes armados que confundían la línea entre la vigilancia de las protestas y la realización de una campaña de contrainsurgencia.

A fines de septiembre, Noboa despidió a siete altos mandos militares, tal vez para asegurarse su lealtad antes de planear más acciones contra las protestas masivas. Los informes sobre el uso de munición real, redadas nocturnas, detenciones selectivas de líderes de movimientos sociales y bloqueos localizados de Internet pusieron de relieve el enfoque represivo del gobierno. Tres activistas indígenas fueron asesinados y decenas de civiles resultaron heridos, mientras que grupos de derechos humanos extranjeros y nacionales denunciaban la represión y pedían un alto al fuego.

Posiblemente preocupado por perder fuerza política en vísperas del referéndum, Noboa comenzó a hacer concesiones, mientras seguía con la represión. Noboa trató de aliviar la presión con gestos económicos conciliadores. Distribuyó transferencias de ingresos con cifras de más de 300 millones de dólares, redujo temporalmente el impuesto al valor agregado y concedió a los funcionarios públicos un anticipo de sus salarios. Indiferente, la CONAIE anunció una marcha en Quito y Noboa desplegó a más de seis mil soldados para bloquearla. Congeló las cuentas bancarias de activistas y organizaciones indígenas y medioambientales en medio de investigaciones sobre sus finanzas. Además, la autoridad electoral prohibió al movimiento de Correa hacer campaña, mientras que el fiscal general intensificó una investigación por lavado de dinero contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y uno de los principales

críticos de Noboa. Álvarez, por su parte, condenó lo que calificó como un intento de distraer al público de las dificultades de Noboa.<sup>13</sup>

Con el aumento de los costos de la represión y la creciente presión, Noboa, a mediados de octubre, intentó eludir a la CONAIE articulando directamente con pequeñas organizaciones indígenas locales. Sin embargo, estas tienen una influencia limitada y no lograron contener la movilización de la CONAIE. El 22 de octubre, la amenaza de utilizar la fuerza militar contra los bloqueos de carreteras causados por las protestas hizo que la CONAIE cediera y cancelara la huelga. Noboa anunció entonces medidas para reducir parcialmente los precios del diésel hasta febrero de 2026, una pequeña concesión que permitió a cada parte reclamar una victoria parcial. Las cuestiones subyacentes siguen sin resolverse, por lo que Noboa tendrá que elegir de nuevo, en algún momento, entre más represión u otro acuerdo con los movimientos indígenas.

Los presidentes que buscan suprimir la disidencia, socavar a sus oponentes o combatir las acusaciones de corrupción no son nada nuevo en Ecuador, y los tribunales, la sociedad civil y los manifestantes suelen encontrar formas de exigir responsabilidades a los líderes. Sin embargo, la urgencia de la lucha contra la delincuencia ofrece un medio fácil para distraer a la opinión pública y las demandas de rendición de cuentas. El peligro potencial para la democracia es obvio.

## **Opinión pública y apoyo**

Es evidente que existen razones urgentes para que la opinión pública se centre en la lucha contra las bandas y los delitos violentos en un país donde los homicidios y las extorsiones se han disparado. Entre 2022 y 2024, la violencia ha desplazado a más de 300.000 personas (más del 5 % de los hogares) de sus hogares, mientras que cientos de miles han abandonado el país en busca de seguridad y estabilidad.<sup>14</sup> Independientemente de si Noboa representa o no una amenaza para la

democracia en Ecuador, las pandillas sin duda la representan. Al igual que en otras partes de América Latina,<sup>15</sup> las organizaciones criminales en Ecuador han corrompido e intimidado a las autoridades estatales y a los candidatos políticos, y han asesinado a quienes prometieron combatir la corrupción y la violencia. Las pandillas siembran el miedo entre los ciudadanos y les impiden moverse o hablar libremente, suprimiendo su capacidad de participar en una sociedad democrática y, a su vez, haciendo que muchos estén dispuestos a apoyar a políticos que dicen que van a reprimir el crimen por todos los medios necesarios.

¿Noboa tendría apoyo popular si intentara consolidar un régimen autoritario? Ecuador tiene un historial de presidentes derrocados por el poder legislativo y por movimientos populares, pero la grave amenaza a la seguridad que representan las pandillas puede haber creado un nuevo entorno político en un país que nunca ha enfrentado insurgencias graves como las de Perú o Colombia. Una parte significativa de la población de Ecuador lleva mucho tiempo apoyando políticas de mano dura,<sup>16</sup> y, con el aumento de la violencia, la satisfacción con la democracia ha disminuido, por lo que ahora más personas pueden estar dispuestas a renunciar a las libertades democráticas liberales a cambio de seguridad.

Cuando Latinobarómetro realizó encuestas a ecuatorianos en 2020, 2023 y 2024, más del 80 % dijo no estar muy satisfecho o estar completamente insatisfecho con la democracia de su país, una cifra que en 2017 no llegaba al 50 %. Esta insatisfacción amenaza cada vez más la democracia en Ecuador. En 2023, solo el 51 % de los encuestados por AmericasBarometer estaban de acuerdo en que «la democracia puede tener problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno», lo que supone un descenso respecto al 63 % registrado solo dos años antes. En la última década, el porcentaje de quienes afirman que apoyarían un golpe militar para combatir la alta criminalidad ha aumentado en las encuestas de AmericasBarometer, llegando al 57 %. Sobre los golpes del Ejecutivo, alrededor de un tercio de los encuestados por AmericasBarometer en 2023 afirmó que un *autogolpe* presidencial podría estar justificado en «tiempos difíciles». Aún no sabemos si esta cifra ha

aumentado bajo el gobierno de Noboa, pero el miedo a la delincuencia es generalizado y, en 2023 y 2024, la mitad de los encuestados por Latinobarómetro mencionó la seguridad pública como el problema más urgente de Ecuador. El porcentaje de la población dispuesta a aceptar la afirmación de que se necesitan poderes presidenciales especiales para combatir las pandillas y la delincuencia podría estar aumentando.

Al asumir la presidencia a principios de 2024, Noboa era muy popular: el instituto de investigación CEDATOS estimaba su índice de aprobación en un 70 %. Estas cifras descendieron a medida que la delincuencia seguía siendo generalizada y la economía continuaba en dificultades.<sup>17</sup> A mediados de 2025, volvía a superar el 50 %, pero una encuesta realizada a finales de agosto mostraba que se había estancado. Es posible que el entusiasmo inicial haya disminuido a medida que las medidas represivas y los aumentos de precios de Noboa han perjudicado su popularidad, pero, una vez más, nadie puede afirmar con certeza que el sólido 40 % de apoyo con el que parece contar como «mínimo» en su índice de aprobación sea suficiente para respaldar cualquier medida de centralización del poder.

En su referéndum derrotado, Noboa pidió a los votantes que aprobaran cuatro medidas:

En primer lugar, revertir la política de la era Correa de prohibir las bases militares extranjeras. Noboa solicitó el apoyo militar de Estados Unidos, Europa y Brasil para combatir las pandillas, y también quería asociarse con empresas de seguridad privada (con las preocupaciones sobre el respeto de los derechos humanos en un segundo plano, en el mejor de los casos). En segundo lugar, Noboa quería que los votantes acabaran con la financiación pública de los partidos políticos, una medida que podría haber inclinado la balanza a favor de los candidatos ricos y los partidos apoyados por la clase empresarial. En tercer lugar, pidió al electorado que redujera el número de escaños en el Legislativo, una medida que imita a Bukele y un proceso que Noboa podría haber utilizado para beneficiarse a sí mismo y a su partido. Por último, buscó la aprobación para convocar una asamblea para reescribir la Constitución

de 2008, que es en sí misma el producto de un proceso de reescritura impulsado por Correa.

El 5 de noviembre, Noboa declaró el estado de emergencia en siete provincias, lo que generó preocupaciones de que pretendiera suprimir la campaña de la oposición. En la mañana del 16 de noviembre, el gobierno anunció que había convencido a las autoridades españolas para que detuvieran a un presunto líder de Los Lobos que se escondía allí, una medida probablemente destinada a impulsar el voto a favor ese día, demostrando que los esfuerzos de Noboa contra las pandillas estaban funcionando. Sin embargo, los días previos a la votación también trajeron nuevos y aterradores detalles del juicio de 17 miembros de la Fuerza Aérea acusados de la desaparición, tortura y asesinato de cuatro niños en Guayaquil en diciembre de 2024, el abuso más impactante hasta ahora en la actual ola represiva.

Cuando se dieron a conocer los resultados, quedó claro que Noboa había sufrido la primera gran derrota de su presidencia. Los votantes rechazaron las cuatro medidas, con alrededor del 60 % votando «no» a las bases militares extranjeras, a los recortes en el financiamiento público de los partidos políticos y, lo que es más crítico, a la nueva asamblea constituyente. La única medida que estuvo un poco más reñida fue la tercera cuestión, sobre la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional: obtuvo el 53,5 % de los votos en contra.

Noboa acudió a las redes sociales la noche de las elecciones para decir que respetaba la voluntad popular, pero que la determinación de su gobierno de seguir luchando por mejorar Ecuador solo se había fortalecido.<sup>18</sup> En el momento de redactar este artículo, a finales de noviembre de 2025, Noboa optó por guardar silencio sobre la posibilidad de cambiar sus políticas tras la derrota en las urnas. Todos los miembros de su gabinete presentaron su renuncia y Noboa comenzó a reorganizar los ministerios, pero cualquier cambio en las políticas y prácticas tendrá que venir desde arriba. Noboa todavía tiene opciones para intentar cambiar leyes y realizar revisiones constitucionales parciales por otros medios,<sup>19</sup> y aún le quedan varios años para terminar su mandato.

Sin embargo, los resultados electorales refutan la idea de que Noboa tiene un mandato popular claro para llevar adelante su agenda. La mayoría de los votantes rechazó una sustitución total de la Constitución de 2008, así como cambios en la legislatura y en la financiación política que habrían reducido la representación democrática y la competencia electoral. Noboa debe ahora descubrir cómo ampliar su popularidad y legitimidad más allá de las dos quintas partes del electorado que actualmente componen su base. Encontrar una forma más eficaz de combatir la delincuencia violenta será crucial, sobre todo porque los ciudadanos parecen cada vez más escépticos sobre la posibilidad de que una mayor militarización o intervención extranjera resuelva los problemas del país.

### **Encontrar un camino a seguir**

El Estado ecuatoriano es demasiado débil para controlar la violencia, pero no se ha derrumbado como el de Haití. Sin embargo, en ambas situaciones, la intervención extranjera dista mucho de ser una panacea para países donde el Estado y la democracia ya están debilitados. Las restricciones a corto plazo a las pandillas o al narcotráfico pueden ser viables, pero una mayor militarización amenazará a personas inocentes y a la democracia, sin aportar una solución a largo plazo. Las encuestas realizadas en la región muestran que los ciudadanos suelen preferir la policía militarizada porque creen que será más eficaz que la policía civil para contener la delincuencia y el desorden, pero no es lo que se evidencia. La policía militarizada se asocia con más violaciones de los derechos humanos e incluso con un aumento de la delincuencia violenta.<sup>20</sup>

<sup>21</sup>Bajo el segundo gobierno de Trump, es poco probable que el apoyo de Estados Unidos a la lucha contra las pandillas y el narcotráfico vaya acompañado de condiciones relacionadas con la democracia o los derechos humanos: un acuerdo de asistencia en materia de seguridad firmado en septiembre de 2025 exige, en cambio, que Ecuador acoja a los migrantes rechazados por las autoridades estadounidenses. Si



Noboa consigue lo que quiere, es decir, una mayor participación de las fuerzas militares de Estados Unidos u otros países en Ecuador, hay pocas garantías de que esto logre reprimir a las pandillas o el narcotráfico. Colombia cuenta con el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia desde hace décadas, pero sigue siendo el mayor productor mundial de coca. Dado que los votantes han rechazado el regreso de las bases militares extranjeras a Ecuador, parece probable que cualquier intervención de seguridad de Estados Unidos por otros medios también provoque una reacción nacionalista, lo que podría erosionar aún más la popularidad de Noboa. Sin embargo, otros actores internacionales deben tratar de garantizar que los esfuerzos para ayudar a Ecuador no se centren únicamente en las fuerzas de seguridad, sino que trabajen para fortalecer el Estado de manera más general, mientras tratan de controlar los abusos de los derechos humanos y la corrupción.

Noboa es consciente de la opinión pública y ha demostrado que responderá a las críticas de la población y a las protestas masivas cuando esto genere costos políticos. En el caso del proyecto minero liderado por Canadá, en septiembre de 2025 decidió suspender la principal licencia ambiental y, al mismo tiempo, trabajar con aliados en los tribunales y la fiscalía general para archivar las investigaciones de corrupción relacionadas con el asunto. Del mismo modo, sus contactos directos con organizaciones y comunidades indígenas locales tenían como objetivo aislar a los líderes nacionales de la CONAIE y tal vez dividir a todo el movimiento indígena, pero las negociaciones redujeron las tensiones y demostraron que Noboa (a pesar de su discurso duro) puede ser flexible cuando considera que la situación exige hacer concesiones para llegar a un acuerdo.

Tras la derrota en el referéndum, ahora es el momento de dejar claro a Noboa que una crisis de seguridad no es una excusa universal para ampliar el poder ejecutivo y socavar los sistemas de controles y contrapesos, y que la cooperación de la sociedad civil será fundamental para que la economía de Ecuador se estabilice y mejore la seguridad interna. La mano dura puede beneficiar a Noboa políticamente a corto plazo,

pero las afirmaciones de que es necesaria para reducir la delincuencia sonarán huecas si las estadísticas de homicidios siguen siendo elevadas, y deben destacarse los daños que la militarización de la policía le genera a la vida de los ciudadanos y a la estabilidad democrática.

Al tiempo que presionaban para reducir las violaciones de los derechos humanos en las operaciones contra las pandillas, la Organización de Estados Americanos y la ONU alertaron, en agosto y septiembre de 2025, sobre las amenazas a la independencia judicial y a la sociedad civil derivadas de las políticas y propuestas de Noboa. Este tipo de mensaje y presión internacional puede seguir apoyando a la sociedad civil ecuatoriana en sus esfuerzos por garantizar que la democracia y los derechos humanos no sean aplastados en nombre de una política de seguridad sin restricciones.

Los periodistas deben enfrentarse a la violencia y la intimidación de las pandillas cuando intentan informar sobre los hechos y exigir responsabilidades al gobierno. A pesar de la importancia de la libertad de prensa para la democracia, el gobierno hace muy poco para proteger a los periodistas y, a menudo, los trata como adversarios: decenas de reporteros tuvieron que enfrentarse a la violencia y las restricciones del Estado mientras cubrían las protestas de septiembre y octubre de 2025. La huida de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas de El Salvador de Bukele es un presagio de lo que les espera a sus colegas en Ecuador si la debilitada democracia de ese país se deteriora aún más.

Hasta ahora, la relación de Noboa con la CONAIE y los líderes indígenas ha sido difícil. Los manifestantes indígenas participaron en la derrocada de anteriores presidentes ecuatorianos, y la reciente convocatoria de huelga y las protestas han demostrado cómo los grupos indígenas pueden movilizarse de forma amplia y rápida. Al igual que Correa, Noboa tiene planes de desarrollo económico centrados en la extracción de recursos naturales y en desacuerdo con los intereses de muchas comunidades indígenas. Las negociaciones han sido intermitentes y han generado acusaciones mutuas de inflexibilidad y mala fe. Sin

embargo, como reveló al suspender la licencia minera, Noboa no está totalmente cerrado a concesiones económicas o medioambientales. Si negocia de manera creíble y cumple lo que promete, podría descubrir que los indígenas ecuatorianos le ayudarán a promover sus objetivos de seguridad.

Las organizaciones criminales han extendido la extorsión y el narcotráfico a las zonas rurales, donde las operaciones ilegales de minería y tala, a menudo militarizadas, ya amenazan las tierras y las vidas de los indígenas. Los gobiernos latinoamericanos han reconocido en ocasiones la autonomía de las comunidades indígenas y han cooperado con ellas para ampliar el alcance del Estado en regiones que se enfrentan a amenazas a la seguridad.<sup>22</sup> Al reconciliarse con la CONAIE, Noboa podría evitar protestas disruptivas que alejan a las fuerzas de seguridad de la lucha contra la delincuencia y trabajar con los intereses indígenas para ayudar a proteger la periferia de Ecuador.

Lograr la seguridad sin destruir la democracia es fundamental para el pueblo de Ecuador y para la región en general. En el vecino Perú se han instalado organizaciones criminales procedentes de Ecuador y otros lugares, y la impopular y supuestamente corrupta presidenta interina Dina Boluarte fue finalmente destituida por el Congreso el 10 de octubre de 2025, en medio de la indignación pública por el aumento de los homicidios. Su sustituto, al menos hasta julio de 2026, es el joven y conservador líder del Congreso José Jerí. Rápidamente declaró la guerra al crimen e imitó a Noboa, tanto supervisando personalmente las operaciones contra las pandillas como declarando el estado de emergencia para reprimir las protestas en curso. Mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad del enfoque extremo y autoritario de Bukele hacia la delincuencia<sup>23</sup>, ¿la derrota de Noboa en el referéndum podría llevarlo a un cambio de ruta y ofrecer un ejemplo diferente y mejor para los países latinoamericanos que luchan contra la violencia perpetrada por el crimen organizado?

Dada su postura de línea dura hacia las pandillas, es poco probable que Noboa negocie como lo hizo Correa, y la proliferación de organizaciones

criminales en Ecuador significa que un acuerdo con uno o incluso varios grupos tendría pocas garantías de reducir la delincuencia y la violencia en general. Además, Noboa podría sentirse tentado a hacer que las fuerzas de seguridad insistan en la represión para demostrar que su estrategia de militarización aún puede ser eficaz. En lugar de reforzar las políticas de mano dura e intentar lograr una costosa victoria militar, Noboa tiene la oportunidad de deshacer los errores del pasado, reconstruyendo la capacidad del Estado e institucionalizando la coordinación entre los sectores de seguridad y el poder judicial para combatir la delincuencia y sus causas, evitando violaciones generalizadas de los derechos humanos. Noboa podrá volver a presentarse a las elecciones en 2029, por lo que, en principio, debería querer demostrar al pueblo ecuatoriano que puede garantizar la seguridad y la estabilidad sin sacrificar la democracia. Y sean cuales sean sus perspectivas políticas, el futuro democrático de Ecuador dependerá de la moderación de la polarización y de la lucha contra la violencia para ayudar a toda la población del país, en lugar de tratar la lucha contra la delincuencia como un medio para obtener cargos públicos y beneficios partidistas.

## Notas

- 1 Sobre el gobierno de Correa, véase Catherine M. Conaghan, «Delegative Democracy Revisited: Ecuador Under Correa», *Journal of Democracy* 27 (julio de 2016): 109-118.
- 2 Gustavo Flores-Macías, «Violent Crime and the Expansion of Executive Power in Latin America», *Presidential Studies Quarterly* 53 (junio de 2023): 256-72.
- 3 Andrés Martínez-Moscoco, «2024 Referendum in Ecuador: Between Fear and Legitimacy», *ConstitutionNet*, International IDEA, 31 de mayo de 2024, <https://constitutionnet.org/news/voices/2024-referendum-ecuador-between-fear-and-legitimacy>.
- 4 Sobre las negociaciones con las pandillas y el proceso de legalización, véase David C. Brotherton y Rafael Gude, «Social Control and the Gang: Lessons from the Legalization of Street Gangs in Ecuador», *Critical Criminology* 29 (diciembre de 2021): 931-55.
- 5 Will Freeman, «¿Puede Ecuador evitar convertirse en un narcoestado?», *Current History* 123, n.º 850 (2024): 58-59; Andrés Oppenheimer, «La lección del estallido de violencia en Ecuador: no negociar con las bandas de narcotraficantes», *Miami Herald*, 12 de enero de 2024, <https://www.miamiherald.com/news/local/news-columns-blogs/andres-oppenheimer/article284164763.html>.
- 6 Carlos de la Torre, «Latin America's Shifting Politics: Ecuador After Correa», *Journal of Democracy* 29 (octubre de 2018): 77-88; Felipe Burbano de Lara y Carlos de la Torre, «The Pushback Against Populism: Why Ecuador's Referendums Backfired», *Journal of Democracy* 31 (abril de 2020): 69-80.
- 7 John Polga-Hecimovich y Francisco Sánchez, «Latin America Erupts: Ecuador's Return to the Past», *Journal of Democracy* 32 (julio de 2021): 5-18.
- 8 Como señalan Freeman y Oppenheimer (véase la nota 4 más arriba), las organizaciones criminales transnacionales se aprovecharon de la eliminación de los requisitos de visado bajo el mandato de Correa. Bajo los mandatos de Moreno y Lasso, otros delincuentes se aprovecharon de la reducción de la capacidad del Estado y de la coordinación en materia de seguridad para trasladarse a Ecuador.

- 9 Will Freeman, «Ecuador's Democratic Breakdown», *Journal of Democracy*, mayo de 2023, <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/ecuadors-democratic-breakdown>.
- 10 OECO, *Recomendaciones para el próximo gobierno en la lucha contra el crimen organizado* (Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, 2024), <https://oeco.padf.org/recomendaciones-para-el-proximo-gobierno-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado>.
- 11 Manuel Meléndez-Sánchez y Alberto Vergara, «The Bukele Model: Will It Spread?», *Journal of Democracy* 35 (julio de 2024): 84-98 [Ed. bras.: «¿Se extenderá el modelo Bukele?», *Journal of Democracy en portugués* 13, n.º 2 (octubre de 2024)].
- 12 En 2007, los partidarios de Correa protestaron contra el poder legislativo y el tribunal electoral, pero el propio Correa no convocó ni participó en esas protestas.
- 13 Juan Ponce Merchán, «Aquiles Álvarez rompe el silencio tras el allanamiento de la Fiscalía: Esto Dijo», *Expreso* (Guayaquil), 8 de octubre de 2025, <https://www.expreso.ec/guayaquil/aquiles-alvarez-rompe-el-silencio-tras-allanamiento-de-la-fiscalia-esto-dijo-260051.html>.
- 14 Defensoría del Pueblo del Ecuador, *Desplazamiento Interno en Ecuador* (Quito: Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2025), <https://reliefweb.int/report/ecuador/defensoria-del-pueblo-ecuador-desplazamiento-interno-en-ecuador>.
- 15 Javier Corrales y Will Freeman, «How Organized Crime Threatens Latin America», *Journal of Democracy* 35 (octubre de 2024): 149-61; Juan Masullo y Abbey Steele, «How Drug Wars Destroy Democracy», *Journal of Democracy*, julio de 2025, <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/how-drug-wars-destroy-democracy>.
- 16 John Polga-Hecimovich, «The Evolution of Crime Policy and Attitudes Toward Mano Dura in Ecuador», en *Mano Dura Policies in Latin America*, org. J. D. Rosen y S. A. Cutrona (Londres: Routledge, 2023).
- 17 CEDATOS, «Ecuador: Índice de aprobación del presidente Noboa 2025», Statista, 28 de agosto de 2025, <https://www.statista.com/statistics/1550478/ecuador-president-noboa-approval-rating>.

- 18 Daniel Noboa Azín, X.com (16 de noviembre de 2025, 9:14), <https://x.com/DanieloboaOk/status/1990242162236154350>.
- 19 Redacción Primicias, «¿Qué alternativas le quedan a Daniel Noboa para reformar la Constitución, tras el triunfo del ‘No’ en la consulta popular 2025?», *Primicias*, 16 de noviembre de 2025, <https://www.primicias.ec/politica/resultados-consulta-popular-referendum-ecuador-preguntas-cne-asamblea-constituyente-constitucion-16noviembre2025-109242>.
- 20 Robert A. Blair y Michael Weintraub, «Little Evidence That Military Policing Reduces Crime or Improves Human Security», *Nature Human Behaviour* 7 (junio de 2023): 861-73; Gustavo A. Flores-Macías y Jessica Zarkin, «The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America», *Perspectives on Politics* 19 (junio de 2021): 519-538; Gustavo Flores-Macías y Jessica Zarkin, «The Consequences of Militarized Policing for Human Rights: Evidence from Mexico» (Las consecuencias de la militarización de la policía para los derechos humanos: evidencia de México), *Comparative Political Studies* 57 (marzo de 2024): 387-418.
- 21 Daphne Psaledakis y Alexandra Valencia, «Estados Unidos concede a Ecuador casi 20 millones de dólares en nuevos fondos y drones para luchar contra las bandas de narcotraficantes», Reuters, 5 de septiembre de 2025, <https://www.reuters.com/world/americas/us-gives-ecuador-nearly-20-million-new-funding-drones-fight-drug-gangs-2025-09-04>.
- 22 Giorleny Altamirano Rayo, «State Building, Ethnic Land Titling, and Transnational Organized Crime: The Case of Honduras», *Latin American Research Review* 56, n.º 1 (2021): 50-66; Giorleny Altamirano Rayo, Eric S. Mosinger y Kai M. Thaler, «State-building and Indigenous Rights Implementation: Political Incentives, Social Movement Pressure, and Autonomy Policy in Central America», *World Development* 175 (marzo de 2024), artículo 106468.
- 23 Beatriz Magaloni y Alberto Diaz-Cayeros, «¿Tiene futuro el modelo Bukele?», *Foreign Affairs*, 11 de septiembre de 2025, <https://www.foreignaffairs.com/salvador/does-bukele-model-have-future>.

Creada en 2007 por la Fundación Fernando Henrique Cardoso y el Centro Edelstein de Investigaciones Sociales, la Plataforma Democrática tiene como objetivo fortalecer la cultura y las instituciones democráticas en Brasil y América Latina. Desarrollamos investigaciones, publicaciones y seminarios sobre las transformaciones de la sociedad y la política en la región y en el sistema internacional, con enfoque en los desafíos para la convivencia y la gobernanza democrática. Estimulamos el diálogo entre los productores de conocimiento y los diferentes actores sociales y políticos, de manera apartidista. Promovemos el aprendizaje democrático de la ciudadanía, fomentando una cultura cívica que valora la argumentación y el pluralismo de puntos de vista.

### **Conozca nuestras publicaciones más recientes:**

#### **Conexión América Latina**

Ensayos sobre los cambios políticos, culturales y socioeconómicos que afectan la calidad de la democracia en América Latina, cuando no su propia existencia.

Año 4, Volumen 2: [América Latina, el No Alineamiento Activo y la disputa entre Estados Unidos y China, por Jorge Heine](#)

Año 4, Volumen 1: [El panorama del crimen organizado y los mercados ilícitos en el bioma amazónico, por Leandro Piquet Carneiro y Adriano Bastos Rosas](#)

Año 3, Volumen 2: [¿Un «modelo Bukele» para América Latina?, por Lucía Dammert](#)  
[Conozca todas las ediciones](#)

#### **Colección El estado de la democracia**

Libros sobre los retos de la democracia en Brasil y en el mundo.

[Brasil ante las turbulencias internacionales](#)

[O Novo Governo dos Indivíduos](#)

[Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil](#)

[Desafios do Sistema Político Brasileiro](#)

[Identidades y la Crisis de las Democracias](#)

#### **Colección Corazones y Mentes**

Proyecto de educación ciudadana orientado por valores humanistas y democráticos, con textos de acceso gratuito para uso escolar con el objetivo de fortalecer los valores y el ejercicio de la democracia.

Volumen 1: [Pensando de forma autónoma fora e dentro da internet](#)

Volumen 2: [Ensino Religioso e Valores Democráticos](#)

Volumen 3: [Nacionalismo e Democracia](#)

Volumen 4: [Educar em Tempos de Inteligência Artificial](#)